Antonio Melo Salazar

Un Largo Trasegar

La tortuosa búsqueda de la paz

Bogotá, D. C.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

Presidente del Consejo de Fundadores
P. Diego Jaramillo Cuartas, cjm

Rector General Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
Leonidas López Herrán

Vicerrector General Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
P. Harold Castilla Devoz, cjm

Vicerrectora General Académica
Marelen Castillo Torres

Directora General de Investigaciones
Amparo Vélez Ramírez

Coordinadora General de Publicaciones
Rocío del Pilar Montoya Chacón

Rector Sede Principal
Jefferson Enrique Arias Gómez

Directora Centro Regional Ibagué
María Isabel Peña Garzón

Vicerrectora Académica Sede Principal
Luz Alba Beltrán Agudelo

Director de Investigación Sede Principal
P. Carlos Germán Juliao Vargas, cjm

Coordinadora de Publicaciones Sede Principal
Paula Liliana Santos Vargas

Melo Salazar, Manuel Antonio
Un largo Trasegar: la tortuosa búsqueda de la paz / Antonio Melo Salazar. Bogotá D.C.: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, 2016.
210 p. : il.
1. Proceso de paz -- Historia -- Tolima 2.Conflicto armado -- Historia -- Tolima 3.Tolima -- Aspectos políticos -- Siglo XX - XXI

CDD: 303.668613 M35u BRGH Registro Catálogo UNIMINUTO No. 83304

Archivo descargable en MARC a través del link: http://tinyurl.com/bib83304

Un largo trasegar: la tortuosa búsqueda de la paz

Autor
Antonio Melo Salazar

Corrección de estilo
Juan Carlos Buitrago Sanabria

Diseño y diagramación
Andrea Sarmiento Bohórquez

Iconografía
César Augusto. Corredor P.
Zamara Zambrano S.

Impresión
Xpress: Estudio gráfico y digital S. A.

Impreso en Colombia–Printed in Colombia
Primera edición: noviembre 2016
300 ejemplares

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
Calle 81 B # 72 B-70
Bogotá D.C. - Colombia
2017

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los capítulos publicados en *Un largo trasegar. la tortuosa búsqueda de la paz* son seleccionados por el Comité Editorial de acuerdo con criterios establecidos; está protegido por el Registro de Propiedad Intelectual. Los conceptos expresados en los capítulos competen a sus autores, son su responsabilidad y no comprometen la opinión de UNIMINUTO. Se autoriza su reproducción parcial en cualquier medio, incluido electrónico, con la condición de ser citada clara y completamente la fuente, siempre y cuando las copias no sean usadas para fines comerciales.

A Martha,
a mis hijos Adriana, Juanita y Federico
y a mis nietos Juan Martín, Isabela y Simón
a quienes van dedicadas estas páginas.

Agradecimientos

El presente trabajo tiene como motivación la propuesta de Leonidas López Herrán, rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, de realizar un análisis de los conflictos colombianos en el último siglo con una particular mirada a lo ocurrido en el Tolima, en cuyo territorio han tenido especial repercusión todos y cada uno de ellos sin excepción. Se buscó enfatizar en aquellas acciones que la misma sociedad ha emprendido para tratar de morigerar el efecto y la extensión de tan sangrientas, y muchas veces injustificadas, confrontaciones, varias de enorme trascendencia y eficacia, que no han recibido el merecido reconocimiento y que, vistas en perspectiva, podrían emplearse de nuevo con las debidas adaptaciones según las nuevas y diversas circunstancias y sus protagonistas.

De la misma manera, se pudieron detectar otras opciones que no tuvieron similar éxito y que, ante las perspectivas de un acuerdo de paz, no deberían repetirse so pena de malgastar el tiempo y los recursos en actividades y gestiones fracasadas en el pasado y que no vale la pena volver a ensayar.

Quiero hacer expreso agradecimiento a López por su apoyo desde el inicio de estas jornadas y, dedel mismo modo, a quienes han contribuido con su conocimiento, sugerencias, bibliotecas y buenos oficios para la culminación del trabajo emprendido.

Hago mención especial de la siempre generosa, enfocada y útil compañía de Héctor Galeano Arbeláez, quien en todo momento proveyó su biblioteca, sus apuntes y su inconmensurable conocimiento sobre la historia de la región, que facilitaron enormemente la labor, y quien permitió los contactos con académicos y protagonistas de una compleja historia que continúa sin escribirse o, que si lo ha sido, ha quedado olvidada en anaqueles sin consulta o mimetizada por quienes no están interesados en su público conocimiento.

De la misma manera, agradezco los consejos e indicaciones del profesor Mario Aguilera Peña, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI, de la Universidad Nacional, así como a mis amigos de la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima, y a Hernando Bonilla Mesa, quien es una confiable y acertada referencia de lo ocurrido en la región desde tiempos inmemoriales.

Este trabajo no habría sido posible sin la generosa contribución y dedicación del equipo de UNIMINUTO, liderado por Rocío del Pilar Montoya Chacón, especialmente del corrector de estilo Juan Carlos Buitrago S. y de la diseñadora Andrea Sarmiento B., así como de la infinita paciencia y sapiencia de Martha Myriam Páez Morales.

No puedo dejar de agradecer a todos aquellos que generosamente contribuyeron con sus memorias y vivencias sobre unos episodios, de los cuales falta mucho por decir, y a quienes no enumero para no cometer exclusiones u olvidos.

Antonio Melo Salazar

Presentación

Hablar de la obra de Antonio Melo Salazar es referirse a los escritos de un tolimense de corazón, radical en la conservación de los valores culturales del departamento del Tolima y de los valores morales y éticos de la sociedad colombiana; nos encontramos aquí ante un destacado periodista, que como cofundador y director del reconocido diario El Nuevo Día, así como miembro del sector productivo y de la academia, ha demostrado su pasión por los temas que afectan al Tolima y su interés por la protección de la sociedad tolimense.

En su obra se evidencia ese Tolima que, a través de la historia, ha vivido momentos de grandes tensiones, algunas de cuyas regiones más apartadas se han visto afectadas por conflictos sociales, políticos y de orden público que han limitado su desarrollo socioeconómico en los últimos sesenta años; de ahí la pertinencia de esta obra en una Colombia que vive un momento en el que la voluntad de reconciliación y el propósito de construir un nuevo país se hace evidente no solo en el Tolima sino en todas las regiones del territorio nacional.

En este sentido, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, dentro de su compromiso de trabajar por una renovada sociedad –como lo ha hecho desde su nacimiento– ha considerado que conocer, documentar, divulgar y evidenciar aquellos intentos por la construcción de una sociedad más reconciliada, es valioso no solo como un ejercicio de recopilación histórica, sino como un aprendizaje hacia el presente y el futuro que nos demuestra la capacidad que tenemos de construir una sociedad más justa y en paz.

Ese es el propósito de la obra Un largo trasegar: la tortuosa búsqueda de la paz, que con una narrativa fluida y la experticia de la pluma de Antonio Melo Salazar, cuenta hechos y episodios en el trasegar histórico del departamento del Tolima.

Tenemos la certeza de que esta apuesta literaria, más que oportuna en estos tiempos, será útil para la construcción de un futuro más esperanzador, a partir de los aprendizajes del pasado.

Leonidas López Herrán
Rector General

Tabla de Contenido

Agradecimientos	VII
Presentación	IX
Introducción	XIII
El Conservatorio del Tolima	3
En defensa de mi raza	7
En un mundo en ebullición	11
El regreso del conservatismo	17
Misión del Banco Mundial	25
Rojas	29
Villarrica	33
El regreso del terror	39
La reconstrucción	43
Intentos frustrados	47
Propuestas exitosas	51
El poder sanador de la cultura y el deporte	55
El Festival Folclórico Colombiano	61
El Frente Nacional	67
¿El presidente la paz?	73
Lleras Restrepo y su concepción de un "mercado interno"	79
La Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT)	85
Pastrana padre	89
Los IX Juegos Atléticos Nacionales	93
López hijo	99

Turbay y su cuestionada gestión 105
El Grupo Grancolombiano 109
La Financiera Furatena, el Banco Nacional y el Grupo Colombia 109
El Banco del Estado 110
El Banco Cafetero 111
El Banco de Bogotá 111
Belisario Betancur y la ilusión de la paz 113
La Corporación para el Desarrollo Humano y la Universidad de Ibagué 121
Barco y las negociaciones 125
De nuevo y contra la tragedia 131
¿"Bienvenidos al futuro"? 135
La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991 141
Ejemplo para imitar 145
Y... se quedó 148
La paz que no fue 151
Primer cuatrienio de Uribe 159
El segundo gobierno de Uribe 173
Primer gobierno de Santos 181
Segundo tiempo de Santos 189
Bibliografía 195
Cibergrafía 199
Lista de entrevistas 203

Introducción

Desde épocas inmemoriales, aun antes de la llegada de los españoles, el territorio colombiano ha sido escenario de cruentos enfrentamientos que, por su ubicación como cruce milenario de caminos, han tenido un lugar destacado en el Tolima.

Las precarias narraciones de los primeros historiadores, que muchas veces se confunden con la fantasía y la leyenda, hablan de reyertas entre los antropófagos y combativos Pijaos, de la familia Caribe, y los Coyaimas, más afables y pacíficos. De allí proviene la divergencia entre unos y otros, acentuada por el hecho de que los Coyaimas se aliaron con los españoles en contra de los belicosos Pijaos, que por los continuos ataques habían obligado a trasladar a Ibagué, desde su sitio inicial de fundación en donde hoy se levanta Cajamarca, hasta las orillas del río Combeima, lugar donde hoy se encuentra. Pues bien, la rivalidad terminó con la muerte de Calarcá, cacique de los Pijaos, a manos de Baltazar, cacique Coyaima, quien con su lanza atravesó a su contendor.

Las expediciones españolas sometieron a sangre y fuego a los primitivos pobladores hasta esclavizarlos. Dicen las mismas narraciones que los últimos reductos Pijaos, para evitar perder su libertad y la de su descendencia, emplearon métodos radicales como el suicidio o el control de la natalidad mediante la ingesta de yerbas abortivas.

Si se desea profundizar en lo ocurrido durante la Conquista y la Colonia españolas, será de gran utilidad remitirse al estupendo y exhaustivo trabajo de Absalón de Jesús Machado Cartagena (2009), *Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia*; allí se expone, de forma clara, lo correspondiente a los repartimientos, la mita, la encomienda –tanto de servicios como de tributos– y los resguardos. Se explica cómo se modificó el régimen de tierras en el tiempo en que se da el tránsito de los Habsburgo a los Borbones; se expone cuáles fueron las Leyes de Burgos de 1512 y las Nuevas Leyes de Indias en 1546, y cómo

fueron abolidas entre 1718 y 1720, en tiempos de Felipe V. Trata, además, de cómo Carlos V, con estas Nuevas Leyes, intentó, con la creación de los resguardos, acabar con los abusos perpetrados por los encomenderos, que no conducían a nada distinto al exterminio de los indígenas en uno de los más abyectos genocidios de los que tenga memoria la humanidad, y de cómo Carlos III las reformó de acuerdo con las necesidades de su decadente imperio.

Poco se ha dicho sobre la presencia en el Tolima de José Antonio Galán y su huestes rebeldes, en el norte del departamento y su zona minera, que encontraron, en un escenario propicio, seguidores que les acompañaron en su gesta contra el opresor español, poco antes de que la traición del arzobispo Caballero y Góngora consiguiera el desmantelamiento de las fuerzas comuneras y la muerte oprobiosa del caudillo.

Un elemento que condicionó la evolución de la nación, desde las campañas libertadoras, tuvo que ver con la financiación de la guerra. Las potencias de entonces se encontraban enfrentadas e Inglaterra se alineaba con todo lo que menoscabara el imperio español, por cierto, ya bastante disminuido. Conocido es el hecho de la vinculación de la Legión Británica en las jornadas de la Independencia; muchos de sus integrantes se quedaron en el país después de la guerra. No ha tenido tanta difusión el episodio que tuvo que ver con la financiación de los ejércitos libertadores por parte de bancos y proveedores ingleses; por supuesto, esa intervención no fue en nada gratuita –tal vez solo la presencia de los voluntarios– y se liquidaba con los correspondientes intereses y obligaciones. Para el trámite de los recursos, los líderes revolucionarios enviaron a Londres a un ducho financista llamado Francisco Antonio Zea, quien fue tan eficiente que no solo obtuvo los elementos y los dineros que se iban a utilizar en las campañas bélicas sino que consiguió, además, una suma importante para su propio beneficio, que, como se hizo tradicional desde entonces, debió ser atendida con los precarios recursos del erario. Los efectos de ese desbalance y los costos de la guerra incidieron en las finanzas nacionales hasta bien entrado el siglo XX. El Gobierno de la naciente república carecía de recursos para atender los compromisos contraídos y los que se fueron acumulando por las continuas y sucesivas guerras internas. Con lo único que se contaba era con grandes extensiones de tierra inexplotada y baldíos improductivos. La fórmula a la que se acudió fue, entonces, la de adjudicar terrenos a los acreedores. Más tarde, la misma figura se empleó para beneficiar empresas que se comprometían a realizar obras de infraestructura y colonización de terrenos incultos,

así como para retribuir a importantes caudillos políticos y militares que habían tenido protagonismo en las diferentes confrontaciones. En gran medida, los conflictos de tierras que sobrevinieron en regiones como el Cauca se derivan de esa prodigalidad que nunca estuvo soportada ni en obligaciones ni en responsabilidades por parte de los adjudicatarios.

No es preciso detenerse, por limitación de tiempo, espacio y propósito, en todas las acciones violentas que tuvieron lugar en lo que es hoy el territorio tolimense, desde el Grito de Independencia, la llamada "Patria Boba" y la Campaña Libertadora, hasta las incontables guerras civiles ocurridas a lo largo del siglo XIX en las que, por cierto, fue destacada la participación de los tolimenses, no solo en los escenarios bélicos sino también en el campo ideológico y en las propuestas legislativas conducentes a la conformación política del país, en la lucha por la conquista de los derechos fundamentales, muchas veces estéril, y en la construcción de parámetros administrativos esenciales para establecer un discurrir civilizado y un manejo ordenado de la hacienda pública.

Si bien la historia republicana del país registra una ininterrumpida cadena de violencia, de la misma manera se advierte la sucesión de no menos de doscientos episodios que incluyen perdones, en la forma de amnistías e indultos, en los que se benefició tanto a delincuentes políticos como comunes. No bien iniciada la vida republicana, en el Congreso de Angostura, en 1819, y en el de Cúcuta, en 1821, se aprobaron las primeras amnistías e indultos que habrían de cobijar a delincuentes políticos y comunes por hechos acaecidos en la Guerra de Independencia. Es de anotar que las determinaciones afectaban también a los españoles y otros europeos que habrían de conservar sus distinciones y clases (Aguilera, 2012).

Desde José María Melo, quien lideró a los artesanos y a las incipientes fuerzas que agitaban las ideas socialistas con la bandera del proteccionismo y en contra de los partidarios del libre comercio, coaligados y con el apoyo en dinero y armas de las metrópolis proveedoras de las mercancías que se vendían en el territorio, como ocurría con Inglaterra, Francia y la emergente potencia de los Estados Unidos (Vargas, 1972), hasta Manuel Murillo Toro, adalid de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de cultos y de asociación, y enemigo irreductible de la esclavitud, así como promotor de la educación y las comunicaciones en un país atomizado, de la misma manera ha de recordarse la actividad política y la postura ideológica que se refleja en los escritos de José María Samper.

Todas esas cruentas y, muchas veces, inútiles confrontaciones que impidieron el desarrollo armónico de la nación y la sumieron en un oscurantismo trasnochado del que solo se vino a salir bien entrado el siglo XX, tuvieron desenlace en la hecatombe de la Guerra de los Mil Días, que a más de destruir la precaria infraestructura productiva del país y causar la muerte y la desolación para decenas de miles de colombianos, culminó con la desmembración del territorio y la dolorosa separación de Panamá en 1903.

No obstante, en todo ese violento trasegar, hubo momentos y decisiones que arrojaron luz en el sombrío panorama e hicieron exclamar al mismo Víctor Hugo que la Constitución colombiana estaba concebida para ángeles y no para los belicosos habitantes del territorio. De esos momentos de lucidez surgieron los elementos de cohesión que impidieron la disolución de la República y son estos los que deben rescatarse y adaptarse a las actuales condiciones en la compleja tarea de reconstruir un país asolado . Por cierto, fue en los años 1907 y 1908 cuando la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa estableció amplias amnistías e indultos para beneficiar, en particular, a militares y partidarios del Gobierno que habían cometido delitos atroces durante la Guerra de los Mil Días y les imponía la obligación de reparar a sus víctimas.

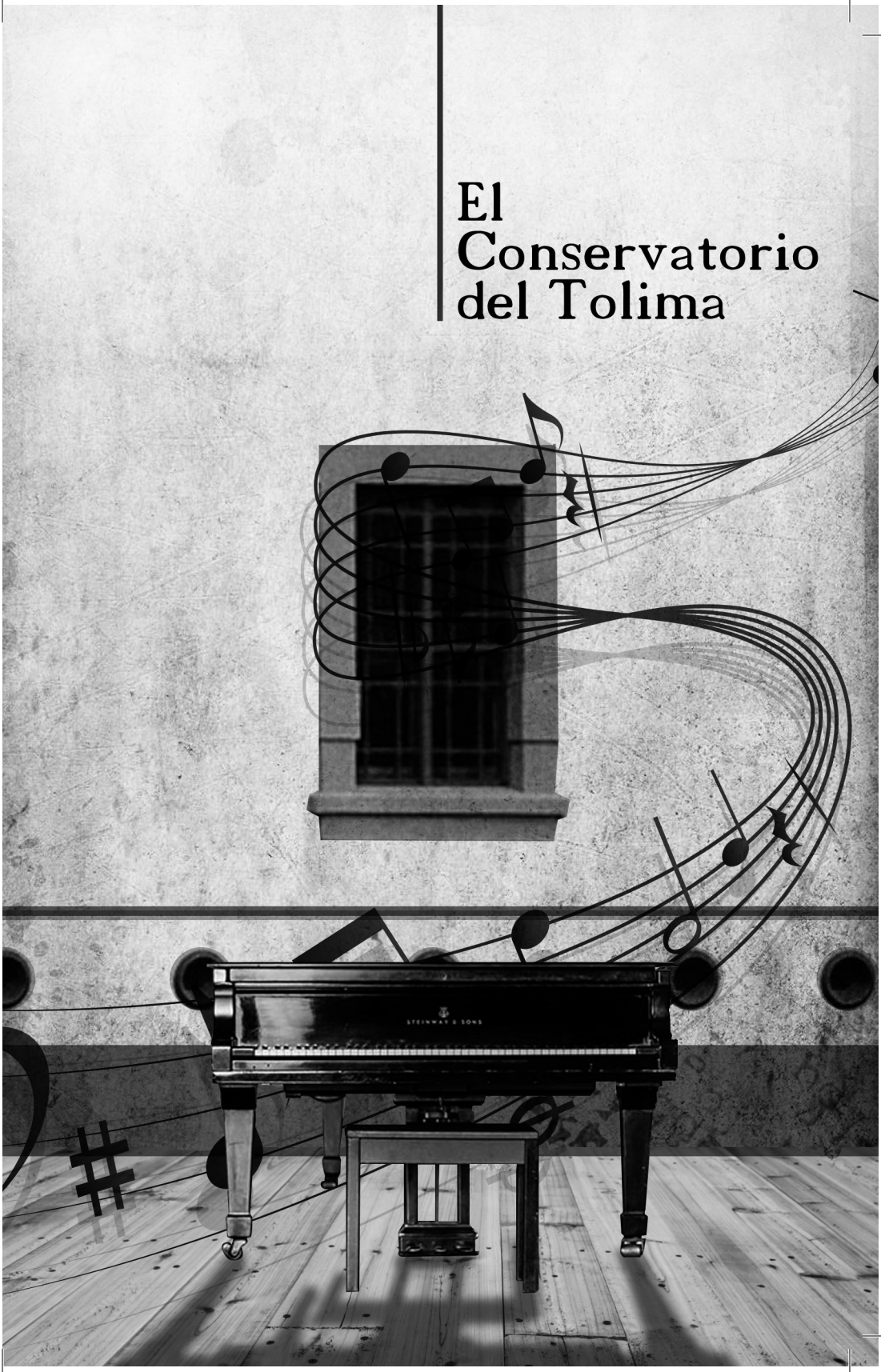
Tras la debacle de Panamá, hubo algunos periodos en los que el oscurantismo perdió algo de su preponderancia, como aconteció en los Gobiernos de Rafael Reyes o Carlos E. Restrepo; sin embargo, la herida de Panamá no acababa de restañar y ni siquiera la indemnización pagada por Estados Unidos de veinticinco millones de dólares consiguió el beneplácito popular, que siempre consideró como traidores de la patria y negociadores de lo más sagrado a quienes permitieron la escisión y aceptaron el pago por la separación.

Ni siquiera el buen uso que dio el gobierno de Pedro Nel Ospina a esos recursos permitió amainar el sentimiento popular, no obstante la creación del Banco de la República, la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria, unida a una importante inversión en ferrocarriles, provocaran una temporal sensación de bienestar.

Un Largo TraSegar

La tortuosa búsqueda de la paz

El Conservatorio del Tolima



Al inicio del siglo XX el país había quedado destruido, mutilado y quebrado, y la sociedad colombiana en total confrontación entre facciones. El proceso de restañar tan profundas heridas se consiguió en el Tolima mediante un largo y dedicado trabajo en el que las artes, y particularmente la música, tuvieron enorme protagonismo. Aquí debe hacerse mención de la participación del Conservatorio del Tolima y de su gestor y director, hasta su deceso, Alberto Castilla Buenaventura.

El Conservatorio inició tareas en 1906, con los antecedentes de una Escuela de Música nacida bajo poco auspiciosos orígenes, ya que vio la luz sobre lo que fuera una banda militar.

El Conservatorio siempre tuvo ambiciones más amplias pues, como su nombre lo indica, allí tenían espacio las diferentes artes: la pintura, la danza, la escultura, el canto, el teatro, la poesía y, por supuesto, la música, a más de las lenguas; asimismo, fue sede de publicaciones que trascendieron los límites de la nación como la *Revista Arte*.

Lo que parecía imposible se produjo: acérrimos enemigos en la reciente guerra y familias divididas por el conflicto encontraron allí el escenario para zanjar sus diferencias, alcanzar la excelencia en sus disciplinas y conformar grupos en los que no existían diferencias sociales, políticas, económicas ni religiosas.

La amplitud de miras permitió que una pequeña y provinciana villa de apenas treinta y seis mil habitantes, que por años había sido solo una estación de paso en el camino al Quindío, se le midiera a la construcción de una sala de conciertos que, aún hoy, asombra por su amplitud, la calidad de su sonido, la estética de sus ornamentos y el espartano y preciso uso de los recursos empleados en su construcción.

Pues bien, en esa villa tan pequeña se realizó, en 1936, la Semana Nacional de la Música y el Primer Congreso Nacional de la Música, al que acudió lo más importante del mundo musical de la nación y que tuvo como evento central un concierto a cargo de una orquesta sinfónica local.

También, a comienzos de siglo, se realizó en Ibagué la Convención Liberal de 1922, en la que se trazó la ruta para conseguir el poder tras una hegemonía conservadora que se prolongaba desde 1886. Allí se determinaron las propuestas y se elaboró el programa que unos años más tarde se intentó desarrollar: Libertad de expresión y de prensa, libertad de cultos, educación laica, derecho de asociación, derechos políticos y económicos de la mujer, función social de la propiedad y muchas otras propuestas que comenzaron a debatirse y a promoverse con una opción política que, por primera vez en cuarenta años, se convertía en una posibilidad clara.

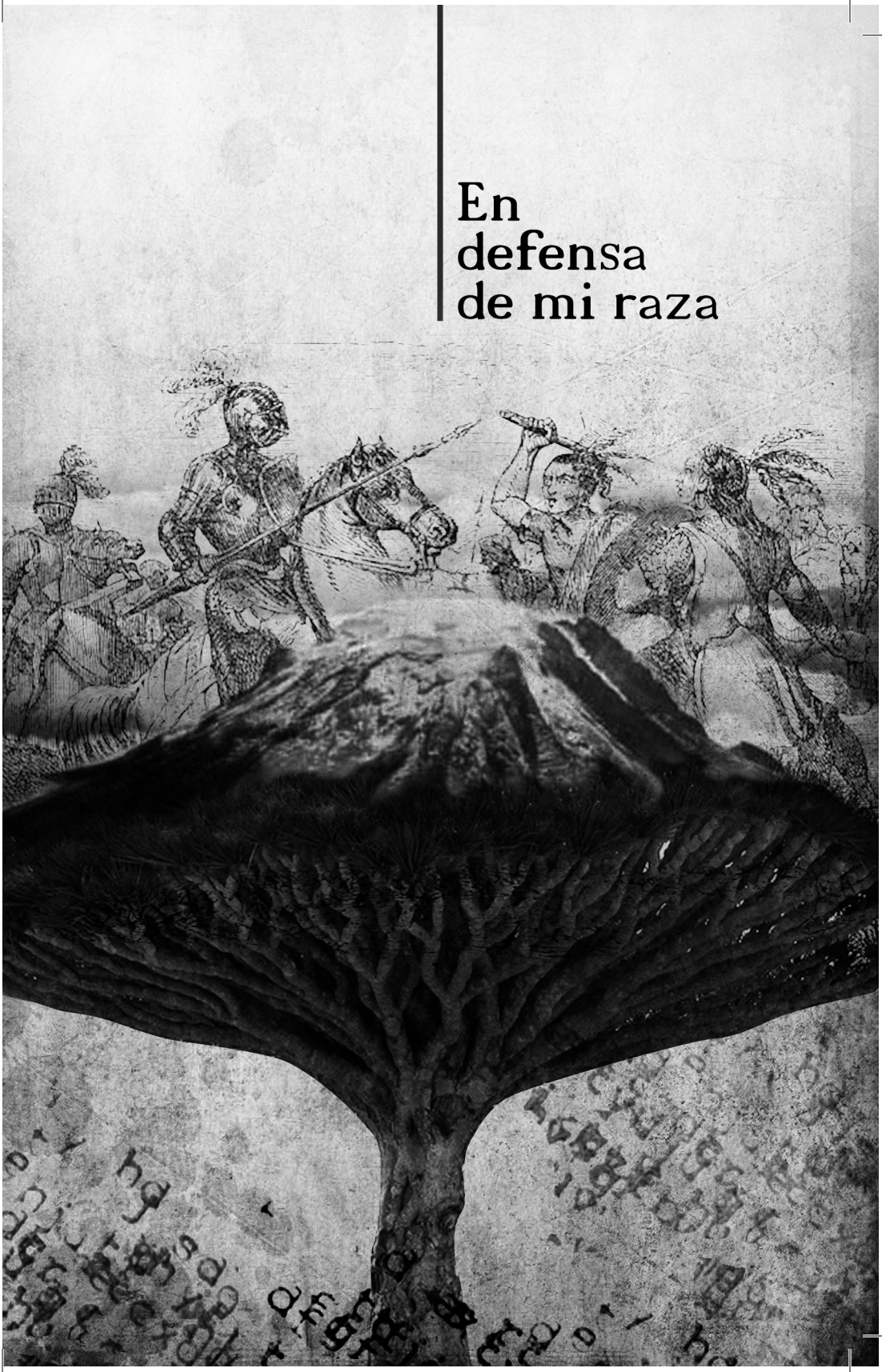
Los hechos se sucedieron vertiginosamente; se produjo la matanza de las bananeras que volvió a exacerbar el rechazo a la influencia estadounidense en el país; el arzobispo de Bogotá, el respetado Ismael Perdomo, por cierto nacido en Gigante –en ese entonces territorio tolimense–, quien luego estudió en el seminario de Ibagué y fue su primer obispo, se negó a señalar el candidato conservador a la presidencia de la República, como era la costumbre ancestral, por lo que el partido fue dividido a las elecciones entre las opciones de Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo; como consecuencia, fueron derrotados por el liberal Enrique Olaya Herrera.

Dentro de similares procesos de distribución territorial de la población, a comienzos de siglo XX se inició un movimiento migratorio proveniente de Tierradentro, en el Cauca, que vino a asentarse en el sur del Tolima; miembros de la comunidad Nasa se fueron instalando gradualmente en el territorio conocido hoy como Gaitania en el municipio de Planadas.

La búsqueda de nuevos horizontes económicos y la necesidad de encontrar tierra suficiente para la creciente población, consolidaron, a lo largo del último siglo, una comunidad que en los años ochenta se convirtió en resguardo y que actualmente consta de 725 familias, que ocupan aproximadamente 10 000 hectáreas y cobija a 3325 personas.

Los Nasa salieron del Cauca en procura de dejar atrás los inveterados conflictos de tierras de esa región y atraídos por la feracidad y abundancia de las tierras encontradas en el Tolima.

En defensa de mi raza



Se ha soslayado permanentemente el papel reivindicativo de las comunidades indígenas, abusadas y sometidas al exterminio por siglos de exclusión y persecución, hasta forzarles a adoptar una actitud combativa e intransigente que ha explotado con violencia en extensas regiones, exigiendo retribución inmediata para compensar los continuos despojos y reparación impostergable para todos sus padecimientos.

No puede, sin embargo, olvidarse el papel histórico de una figura como Manuel Quintín Lame Chaustre, quien entre 1922 y 1945 libró con sus comunidades batallas reivindicativas en Tolima y Huila, después de haberlo hecho con similar pasión en el Cauca.

Lame nació en el Cauca en 1883; su padre y tíos fueron terrazgueros de la hacienda San Isidro en Popayán, de propiedad de un hacendado ignorante de nombre Ignacio Muñoz, quien se lucró enormemente al apropiarse de más de treinta mil hectáreas que habían sido, en su mayoría, tierra de resguardos indígenas que iban siendo repartidos bajo la excusa del progreso, pese a que la legislación colombiana seguía basándose en la Ley 89 de 1890, que impedía tales procedimientos para proporcionar estabilidad jurídica a los resguardos y reglamentar su organización interna.

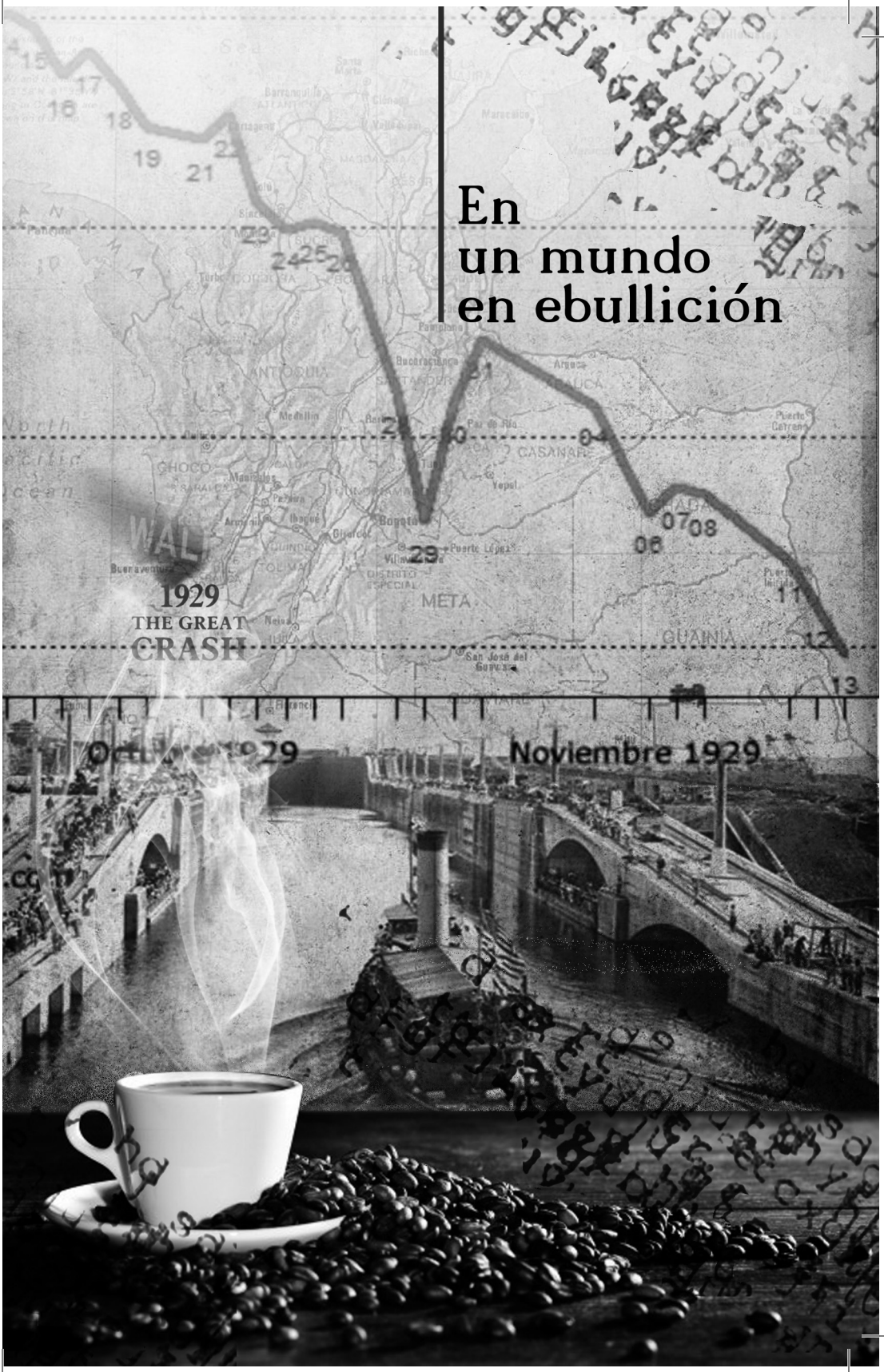
La némesis de Lame fue el poeta Guillermo Valencia, por cierto yerno de Muñoz, quien encabezó una persecución implacable contra el jefe indígena, acusándole de subversivo, invasor, expoliador, fomentador de alzamientos y promotor de la violencia. Por este motivo, Lame fue capturado y llevado a la cola de un caballo a Popayán donde permaneció en prisión cuatro años. Vale precisar que la lucha de Lame en el Cauca estuvo enfocada en impedir la desaparición de los resguardos y en defensa de la Ley que los regía.

Posteriormente llegó al Tolima y al Huila, regiones en las que se dedicó a la restauración de los resguardos que habían desaparecido; pero tras una desigual lucha y después de masacres como la de Llanogrande en Ortega, Tolima, reconstruyó los antiguos resguardos de Ortega y Chaparral; sin embargo, finalmente solo quedó el Cabildo de Yaguará en Ortega.

En tanto, Lame se paseó por diferentes prisiones pues, hasta 1939, solo en el Tolima estuvo detenido ciento ocho veces. En total estuvo en cárceles de Popayán, Silvia, Pasto, Neiva, Ortega, El Guamo, Ibagué, y en Bogotá en más de doscientas ocasiones.

Mucho de lo que sucede actualmente en el Cauca, Nariño y Putumayo, y de lo acontecido en el sur del Tolima y el norte del Huila, tiene su origen en los abusos cometidos contra las comunidades indígenas y campesinas –que muchas veces son las mismas–, aunque muchos, inclusive congresistas de nuevo cuño, desconozcan tales circunstancias y hagan gala de ignorancia supina o perversa tergiversación.

Lame murió en 1967 en Ortega y su tumba es adornada por una humilde cruz negra que lleva inscrita la frase que se transcribe literalmente y en su integridad: "Fue el hombre que no se umilló a la in-Justicia" (Castillo, 1971).


En
un mundo
en ebullición
1929
THE GREAT
CRASH
Noviembre 1929

El mundo estaba estremecido por el *crack* de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929, y Colombia, que había vivido una breve temporada de auge con la economía aupada por el dinero producto de la separación de Panamá y las exportaciones de café, cayó en una severa depresión con la que se extendió la miseria y aumentaron las necesidades.

Olaya, que fue una figura de transición, si bien había sido embajador en Estados Unidos de los Gobiernos conservadores, facilitó la aceptación popular a los Gobiernos liberales, hizo moderados avances en los temas que permitirían la modernización del Estado y, con su figura de gran componedor, ayudó a paliar las penurias a las que se vio sometida la mayoría de los colombianos por la Gran Depresión.

No obstante los conflictos por la tierra hayan sido la constante en el devenir del país y daten de las épocas de la Conquista y de la Colonia con sus repartimientos, encomiendas, mitas y resguardos, estos se acentuaron, entre otras razones, por la caída de las exportaciones de café y el derrumbe de los precios de los productos agrícolas, arrastrados por la merma en la demanda de la economía mundial, razón por la cual se presentó un periodo de escasez y de hambre generalizadas.

De nuevo los grandes debates políticos y las confrontaciones sociales, en las que tuvieron papel protagónico las Ligas Campesinas, se suscitaron luego de que se produjo el Decreto 1110 de 1928, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, que de alguna manera limitaba las propiedades de más de quinientas hectáreas –más si se trataba de apropiación de baldíos–; estas confrontaciones continuaron y confluyeron en la expedición de la Ley 200 de 1936, llamada "Ley de Tierras". Dicha legislación fue impulsada por el Movimiento Agrario del Alto Sumapaz y tuvo su punto de quiebre en un conflicto ocurrido en el Cañón del Combeima, en el que labriegos y aparceros de la inmensa Hacienda Tolima se enfrentaron con la fuerza pública con saldo de varios campesinos muertos. Hubo consenso sobre las limitaciones de la propiedad no solo en la extensión de las tierras que podían aparecer a nombre de una sola persona sino de la función social de la propiedad misma y la responsabilidad social que entraña su posesión.

Ya había subido al poder el tolimense –al menos había nacido en Honda– Alfonso López Pumarejo, por cierto damnificado de la crisis y del colapso de los negocios de café y del banco de propiedad de su padre Pedro A. López. Alfonso López había llegado a la presidencia con un equipo en el que figuraban varios tolimenses, entre los que se destacaban Carlos Lozano y Lozano, Antonio Rocha Alvira, Rafael Parga Cortés, Alejandro Bernate y el tolimense por adopción Alberto Camacho Angarita. Liderados por el que hasta entonces era un desconocido juez, el maestro Darío Echandía Olaya, de cuya concepción del *Estado* surgieron la mayoría de las reformas que modernizaron al país, lo sacaron de la oscuridad y carencia de derechos en los que se debatía y lo trajeron, o al menos lo intentaron, al siglo XX, no sin estruendo, oposición rabiosa y conmoción civil.

Uno de los logros fundamentales fue, precisamente, la mencionada Ley de Tierras, criatura salida de la mente de Echandía, bajo la influencia del concepto de que la propiedad tiene una función social que, por supuesto, no es absoluta y debe plegarse a las necesidades del colectivo.

Por cierto, dentro del conjunto de libertades y derechos preconizados por el llamado gobierno de la "Revolución en Marcha", aparecían muchos que habían figurado en las diversas constituciones y que tuvieron vigencia con anterioridad a la Regeneración, entre ellos un muy poco recordado divorcio vincular aprobado en 1863 y borrado en la Constitución de 1886.

El establecimiento de ese cúmulo de libertades y derechos no solo le granjeó al Partido Liberal multitudinarias adhesiones en la base popular sino en la intelectualidad. Al mismo tiempo, provocó una enorme reacción entre lo que podría señalarse como el "establecimiento" de la época, apuntalado por la Iglesia Católica que veía en las reformas y, particularmente, en el fortalecimiento de la educación laica y la libertad de cultos, unas potenciales amenazas para su hegemonía religiosa.

Por cierto, la reacción fue tan fuerte que en las postrimerías del primer gobierno de López se comenzó a advertir la desaceleración de los procesos reformistas, circunstancia que tomó plena forma en la administración de Eduardo Santos, en cuyo mandato se perdió toda la dinámica observada en el periodo anterior. El mundo se había enfrascado en la más sangrienta contienda de que tuviera memoria la humanidad y todo confluía en la adhesión a los protagonistas de la conflagración, mientras los recursos se empleaban en el sustento de la guerra.

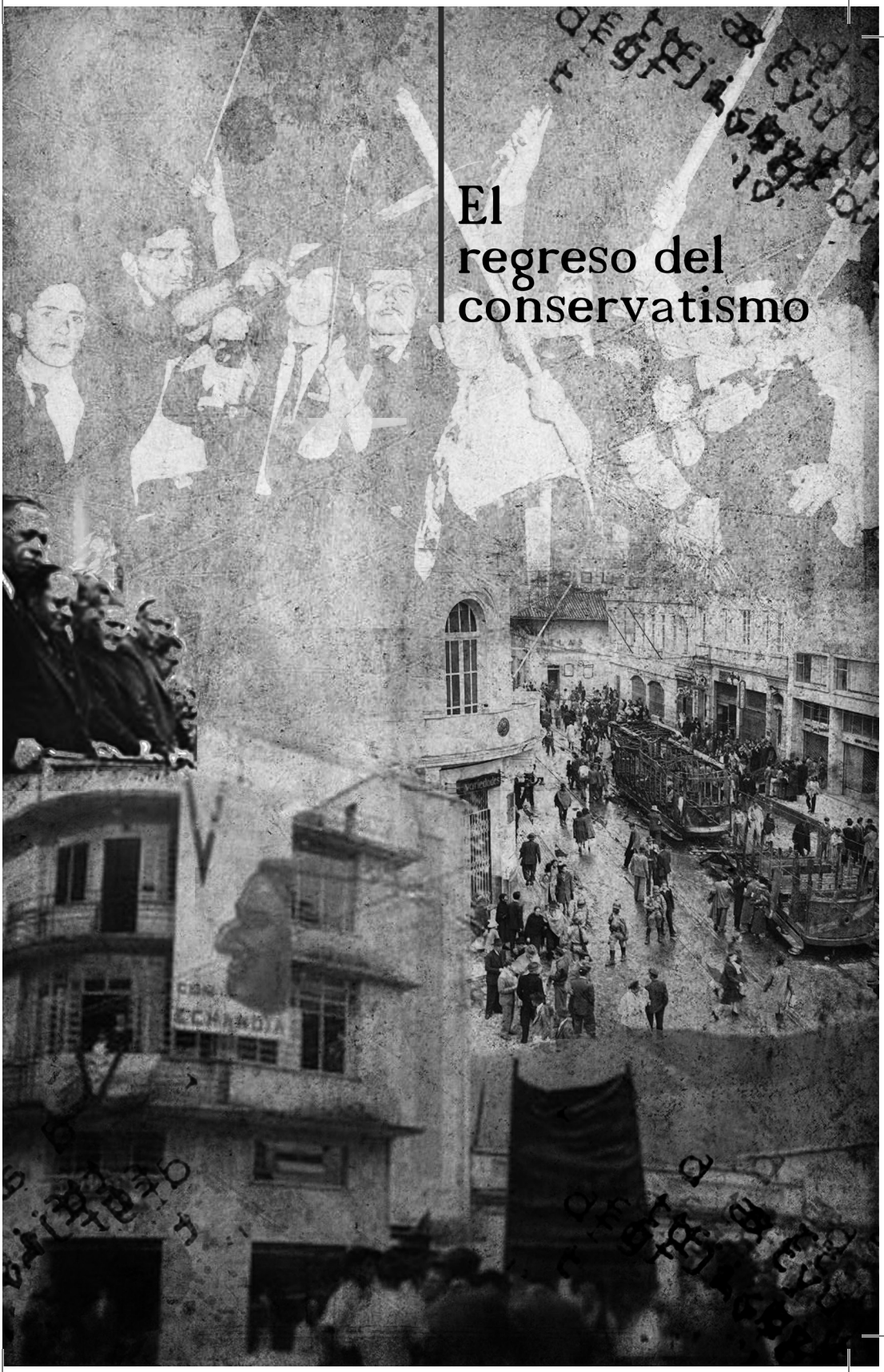
Sin embargo, la oposición conservadora entró en pleno furor ante la perspectiva de un segundo gobierno de López, en una época en la que el conflicto mundial tenía dentro del país y la política colombiana su réplica. Así como parte de la ciudadanía y el Partido Liberal se identificaban con los Aliados, la mayoría del Partido Conservador, la jerarquía eclesiástica y una también numerosa porción de la ciudadanía se mostraba afín a Franco –durante la Guerra Civil Española– y, luego, al Eje cuando se produjo la conflagración orbital.

López regresó al poder pero el Ejecutivo y el mismo partido se mostraban divididos entre quienes querían volver a inyectar vapor a las reformas y quienes mostraban reticencia ante la evidente dinámica social despertada por la conquista de las libertades y la aplicación de los derechos.

En ese convulsionado ambiente se produjo un intento de golpe de Estado por parte del ejército acantonado en Pasto, que tomó prisionero al presidente López, mientras el poder quedó momentáneamente en manos de Echandía en Bogotá. Ese episodio, si bien fugaz, mostraba que las desavenencias sobre el rumbo del Gobierno no se limitaban a la oposición política sino que revelaban profundas raíces, con signos y actitudes violentas en otros sectores de la sociedad. En nada colaboró con un tranquilo ejercicio del poder la actuación del "hijo del ejecutivo" Alfonso López Michelsen, quien aprovechando su condición se apropió de gran parte de los bienes incautados a los ciudadanos alemanes en razón de la Segunda Guerra Mundial.

La feroz oposición de Laureano Gómez y la oportunidad brindada por la liviana conducta de López Michelsen provocaron la caída del Gobierno, que quedó en manos de Echandía y luego de Alberto Lleras, ambos convencidos demócratas y respetuosos de la Ley y la Constitución hasta las últimas consecuencias.

El regreso del conservatismo



En ese estado de cosas se llegó a unas elecciones en las que se repitió el escenario de 1930, en esta ocasión, dentro del Partido Liberal, que fue dividido en las urnas entre el candidato moderado Gabriel Turbay y un fenómeno populista que había acaparado el fervor de las masas populares: Jorge Eliécer Gaitán. El Partido Conservador jugó estratégicamente la opción con la figura moderada de un ingeniero antioqueño de nombre Mariano Ospina Pérez –en lugar de haber presentado la más radical figura de Laureano Gómez Castro que generaba un mayor rechazo–; por la mitad pasó Ospina y Lleras Camargo procedió a facilitar la transición.

Si bien el panorama internacional se había definido a favor de los Aliados, lo que obligó a un reacomodamiento de las más recalcitrantes figuras conservadoras como Laureano Gómez y Gilberto Alzate Avendaño, la rápida repartición del mundo entre los amigos de los Estados Unidos y los seguidores de la Unión Soviética forzó a un nuevo y diferente reposicionamiento de las fuerzas políticas colombianas.

En ese ambiente polarizado, los conservadores se emplearon a fondo en echar atrás las reformas y alterar las que consideraban fuentes de poder de sus antagonistas. De esa manera se puso cortapisa a las conquistas laborales y a los derechos de asociación de los trabajadores y los sindicatos; igual sucedió en el espacio educativo, al punto de que las escuelas normales, las rectorías de los colegios oficiales y hasta los alumnos de las instituciones educativas fueron relevados y discriminados por sus preferencias políticas. La Policía, por entonces dependiente del Ministerio de Gobierno, sufrió un cambio masivo de integrantes y las filas se llenaron con adeptos a los nuevos gobernantes, procedentes en gran medida de las regiones de Boyacá y del norte del Valle del Cauca.

Los hechos de sangre se multiplicaron y forzaron al Partido Liberal a reclamar ante lo que se advertía como una violenta represión por parte del aparato estatal. En tanto, la figura de Gaitán se fortalecía entre las grandes masas de la población y se convertía en una ineludible alternativa de poder; de hecho, las grandes mayorías liberales se habían volcado a

favor del caudillo bogotano para desasosiego no solo del Gobierno sino del establecimiento liberal.

La violencia se extendía con la participación, cada vez más desembozada, de los organismos estatales y el apoyo de clérigos fundamentalistas. En ese crispado escenario se produjo la impresionante Marcha del Silencio en Bogotá, encabezada por Gaitán, en la que participaron decenas de miles de personas en completo silencio. Pocos días después, el 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá y el país se incendió en una orgía de violencia que fue el inicio de una de las épocas más nefastas que ha vivido el país (Braun, 2008).

Nada volvió a ser lo mismo; amigos cercanos se trastocaron de la noche a la mañana en enemigos acérrimos, las familias se escindieron por cuenta de las afiliaciones políticas y los colores que identificaban a los partidos se convirtieron en estigmas de muerte o símbolos de poder.

El Tolima, y particularmente Ibagué, que antes del 9 de abril había registrado una de las menores tasas de muertes violentas entre las capitales departamentales, se convirtió en el epicentro de los más abominables hechos, la más horrenda sangría, el más impresionante desplazamiento masivo, la destrucción del aparato productivo y el colapso del tejido social en numerosos municipios (Jaramillo, 1983).

La colaboración liberal en el Gobierno nacional había llegado a su fin y el partido se lanzó a la oposición a la presidencia de Ospina Pérez. Había consenso en que el candidato liberal debía ser el tolimense Darío Echandía. Las denuncias sobre la violencia gubernamental se multiplicaron hasta cuando una manifestación en las calles bogotanas, en la que el candidato liberal y sus partidarios recorrían el centro de la ciudad, fue abaleada por funcionarios oficiales. Allí cayó herido de muerte Vicente Echandía, hermano del candidato, y ante la falta de garantías el Partido Liberal decidió abstenerse de acudir a las elecciones, por lo que resultó elegido, sin oposición, el candidato conservador Laureano Gómez Castro, un radical y fanático que había sido inequívoco partidario de Franco, Hitler y Mussolini en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

Con la llegada de Gómez al poder se desató un verdadero genocidio que tuvo los más profundos efectos y repercusiones en el Tolima, que vivió esos años como los más oscuros de su historia.

Desde entonces se han debatido dos tesis contrapuestas respecto de los efectos de la violencia y las razones de la misma con el trasfondo

de la propiedad de la tierra. Unos señalan que fue la violencia la que determinó la desaparición del Estado en extensas zonas, lo que provocó que forzadamente los hacendados abandonaran sus propiedades; otros indican que la barbarie fue producto de la retaliación de los antiguos propietarios para extender su poder económico y político en otros territorios y recuperar las tierras que habían perdido en medio de los conflictos agrarios. Sin embargo, parece haber surgido consenso en que lo ocurrido fue una combinación aterradora de las dos circunstancias; eso sí, existió identidad entre liberales y comunistas sobre que la premisa de que la resistencia fue una alternativa de última instancia para defenderse del terrorismo de Estado.

Más de medio siglo después, este argumento continúa siendo esgrimido y ha estado sobre la mesa en todos los diálogos y negociaciones con los insurgentes: se trataba del uso de la legítima defensa para repeler una acción violenta, injusta y proveniente del Gobierno. Con el ánimo de hacer claridad sobre lo acontecido, es preciso remitirse a uno de los más completos y reveladores documentos, elaborado en 1958 por la Secretaría de Agricultura del Tolima, sobre este aciago periodo[1]. Tal vez no hubo en ninguna otra región un documento de la profundidad y gravedad del mencionado, realizado en toda su aterradora complejidad, que luego fue reproducido en algunos de sus apartes en ese otro libro indispensable sobre tan aterradora barbarie: *La violencia en Colombia* (Guzmán, Fals y Umaña, 1962). Se presentan aquí algunos datos del estremecedor estudio:

> Sobre la base de una población de 754.826 habitantes como promedio para los años de 1949 a 1956, la investigación estadística arroja un cálculo de 321.651 personas que han sufrido el exilio en forma permanente o transitoria, durante el mismo lapso, lo cual equivale a que un 42.61 por ciento de la población del Departamento ha experimentado la amargura del exilio.

Pero es más; teniendo en cuenta que hay en el Departamento 93 822 propiedades rurales que pertenecen a 75 318 propietarios, la investigación estadística concluye que 40 176 propiedades o sea el 42.82 por ciento del total, pertenecientes a 32 400 propietarios, o sea el 43.02 por ciento de ellos, han sido abandonados, transitoria o permanentemente.

Para una cabal comprensión de tan alucinantes índices, basta equipararlos con la población de Colombia registrada por el DANE, el 13

1 Ver un análisis de ese trabajo en La encrucijada del milenio (Castaño y Melo, 2005).

de enero de 2015, de 47 954 800 habitantes, por lo que una tragedia como la producida en el Tolima en el periodo citado tendría una equivalencia en el país actual de 20 433 540 personas desplazadas.

El estudio de la Secretaría de Agricultura se refiere también a las pérdidas totales sufridas por los propietarios desplazados, que fueron resumidas en el documento *La encrucijada del milenio* (Castaño y Melo, 2005), y registra además las muertes violentas ocurridas en el departamento en el mismo periodo: 35 294 muertes en el Tolima entre 1949 y 1958 por cuenta de la violencia, sin contar las de los soldados, suboficiales y oficiales.

Los efectos patrimoniales de tan terribles acontecimientos se registran a continuación:

- Liquidación total de la industria ganadera en el sur y oriente del Departamento.
- Ruina casi total de los cafetales y total de los platanales y frutales en las áreas abandonadas.
- Incendio de centenares de casas en las áreas urbanas y de millares en las zonas rurales.
- Extinción de la industria porcina y avícola.
- Saqueo de negocios.
- Desaparición de caminos por obligado abandono.
- Pérdida y depreciación de los elementos de labranza.
- Incendio de vehículos, de montajes para el procesamiento del café, caña y arroz, y de potreros, cañaverales y zonas de labranza.
- Lucro cesante por desocupación forzada de fincas y personas.

Las cifras condensadas en el estudio, que se presentan a continuación en las tablas 1, 2 y 3, son abrumadoras y ofrecen una dimensión de lo ocurrido al departamento y a su gente.

Tabla 1. Pérdidas totales sufridas por los propietarios desplazados

Bienes inmuebles	Cantidad
Propiedades abandonadas hasta 1957	93.882
Fincas totalmente abandonadas hasta 1957	34.730
Casas de habitación destruidas y quemadas hasta 1957	343.041
Enramadas y depósitos incendiadas hasta 1957	13.742

Nota: Adaptado de *La encrucijada del milenio*, L. A. Castaño y A. Melo, A., 2005, Asociación para el Desarrollo del Tolima.

Tabla 2. Robo de semovientes

Semovientes	Cantidad
Bovinos	405 567
Equinos	57 348
Porcinos	77 112
Aves	730 296
Otros	24 543
Valor equivalente en pesos de 1957	$191 982 018

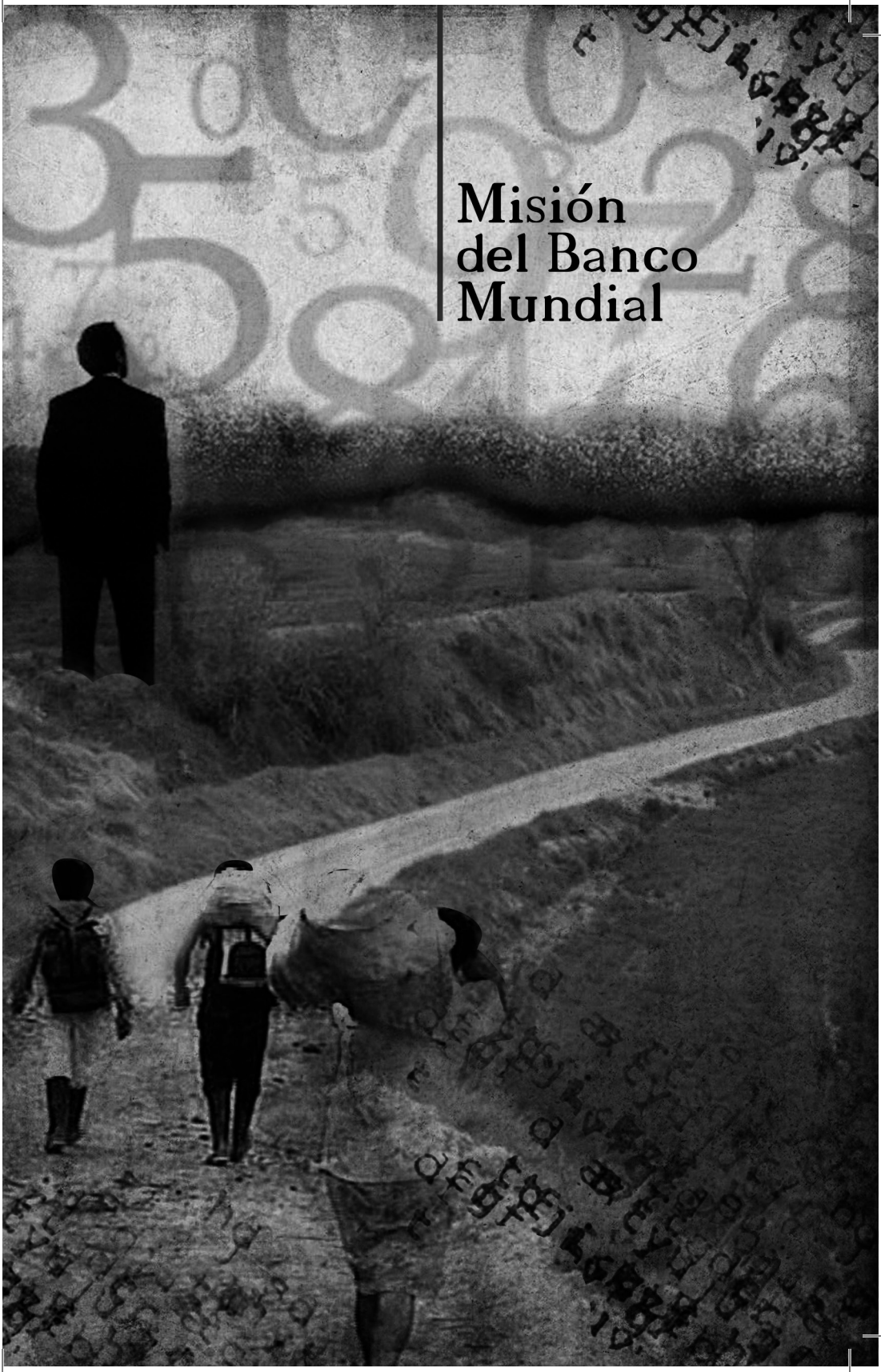
Nota: Adaptado de *La encrucijada del milenio*, L. A. Castaño y A. Melo, A., 2005, Asociación para el Desarrollo del Tolima.

Tabla 3. Valor de las pérdidas

Pérdidas	Valores
Ingreso medio perdido por los propietarios	$52 731 424
Pérdida en fincas arrendadas	$78 886 006
Valor de las casas destruidas	$106 381 350
Valor de las edificaciones incendiadas	$15 752 880
Herramientas destruidas	$47 934 342
Lucro cesante	$529 263 419
Valor en pesos de 1957	$830 949 421
Gran total en pesos de 1957	$1 022 931 439

Nota: Adaptado de *La encrucijada del milenio*, L. A. Castaño y A. Melo, A., 2005, Asociación para el Desarrollo del Tolima.

De acuerdo con las series estadísticas del Banco de la República, con los incrementos del *índice de Precios al Consumidor* (IPC), entre 1958 y 2014, esta suma equivalía al presupuesto nacional de 1955 y a $2,5 billones de la moneda actual, según cálculos al 18 de abril de 2015; es decir $2 495 089 050 146, para ser más precisos.


Misión
del Banco
Mundial

Aquí se hace mención de un hecho que no ha recibido mucha atención ni se ha concatenado con la violencia descrita: la llegada al país del equipo enviado por el Banco Mundial, liderado por el economista canadiense Lauchlin Currie en 1949.

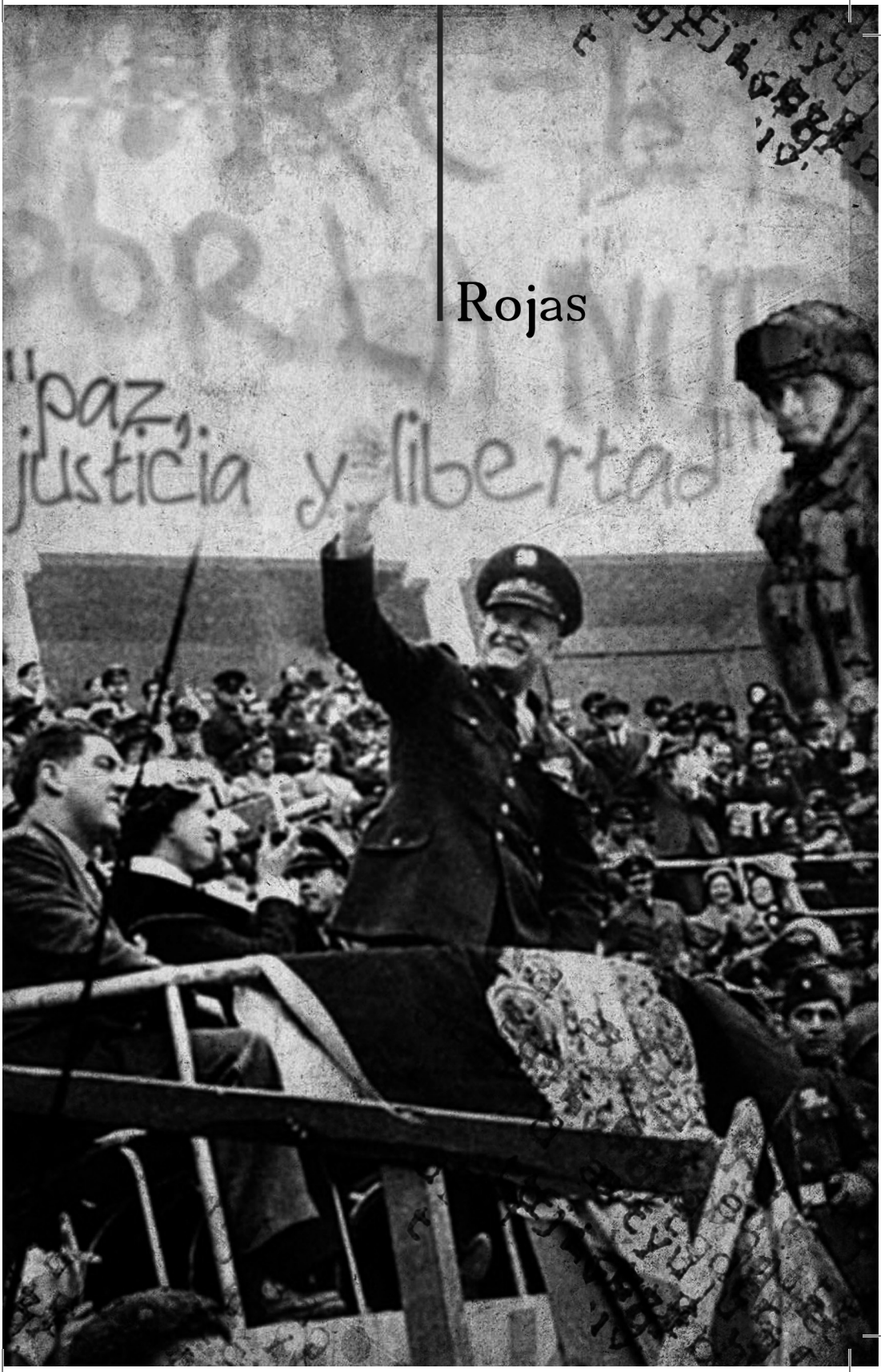
Currie había estudiado en Inglaterra en donde conoció a John Maynard Keynes –y se hizo su seguidor–, tal vez el economista con mayor incidencia en el devenir del mundo en el siglo XX. Las teorías de Keynes, y especialmente la que señala el impacto multiplicador de la inversión pública en infraestructura para sacar a las naciones de la recesión económica, fueron adaptadas con reluctancia y como última opción por el gobierno de Roosevelt. Sus efectos fueron casi instantáneos, pues la construcción de represas en el delta del Mississippi, a más de regular el flujo del río y permitir la incorporación de feraces tierras a la producción de alimentos y materias primas, sirvió para proporcionar la energía eléctrica que habrían de utilizar las industrias en el procesamiento de tales elementos. A lo anterior se sumó la construcción de una red de autopistas, puentes y puertos que interconectaron la economía estadounidense para consolidar el mercado interno y proyectarlo para la exportación de bienes terminados. Los salarios percibidos por los trabajadores contratados en todos los desarrollos mencionados contribuyeron a la solidificación de la demanda, lo que se convirtió en un círculo virtuoso y en una estructura productiva que vino a tener plena expansión en el esfuerzo industrial requerido para sustentar a los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial y a la concreción de Estados Unidos como potencia mundial en la posguerra.

Currie, que había tenido gran influencia en la adopción de las teorías de Keynes por los equipos del New Deal, había caído en desgracia e iba a ser señalado más tarde como filocomunista en la cacería de brujas de Joseph McCarthy.

La llegada del grupo de Currie significó toda una revolución en el manejo económico del país, y la utilización de herramientas, como la planeación, entró a formar parte indispensable de las funciones estatales, como instrumento clave para las decisiones del alto Gobierno.

Currie encontró refugio en Colombia contra las persecuciones en boga en Estados Unidos y, a más de lograr una enorme trascendencia en el ámbito académico, sus propuestas recibieron aceptación plena, desde entonces y en sucesivos Gobiernos. De hecho, las primeras propuestas del equipo del Banco Mundial tuvieron que ver con la planeación y con el diseño de distritos de riego –parecidos a los desarrollados en el Mississippi– que habrían de generar la desaparición, en grandes áreas cercanas a los mayores mercados, de la agricultura de pan coger y la presencia de una nueva agricultura mecanizada e industrializada que, a la par de suministrar alimentos a los grandes centros poblados, habría de producir las materias primas para abastecer las industrias que se crearían y en las que encontrarían empleo los miles de trabajadores agrícolas desplazados. Lo mismo puede encontrarse en los proyectos de posteriores Gobiernos, en los que Currie tuvo incidencia, como los de "Ciudades dentro de las ciudades" en tiempos de Misael Pastrana.

Para evitar equívocos, es preciso decir que Currie jamás preconizó que la expulsión violenta de miles de familias constituyera parte de su proyecto y más bien lo enfocó a replicar el beneficioso proceso estadounidense. Sin embargo, en las zonas afectadas por la sangría partidista, la expulsión de los campesinos para apropiarse de las tierras productivas que podrían ser objeto de los distritos de riego fueron la consecuencia trágica, en tan oscuras horas, como se comprueba al mirar la monstruosa diáspora tolimense. Vale decir que las fábricas que habrían de emplear las grandes masas de campesinos desplazados jamás tuvieron concreción.


Rojas
"paz,
justicia y libertad

La barbarie en el periodo de Gómez se hizo insoportable y el totalitarismo esgrimido por el Gobierno rebasó todos los límites hasta llevar a la generalización de focos de resistencia en las regiones más afectadas. De la misma manera, el Partido Liberal, en unión de un sector del Partido Conservador y el Ejército se coaligaron para promover un golpe de Estado que se produjo el 13 de junio de 1953. Existía tal consenso sobre la imperiosa necesidad de derribar a Gómez, Urdaneta y Pabón, que hasta un acérrimo defensor del orden constitucional, como lo era Darío Echandía, lo calificó como un "golpe de opinión".

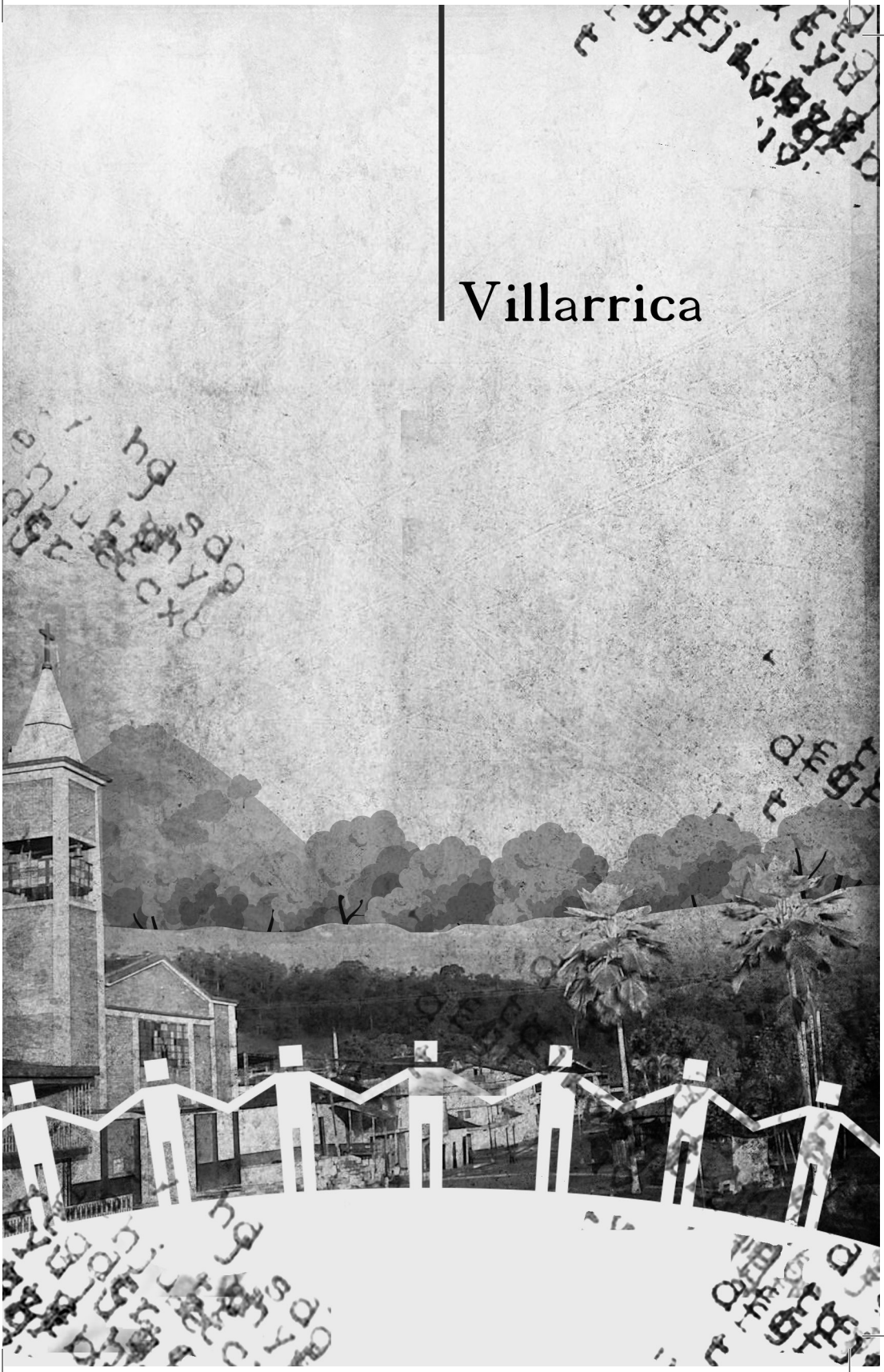
Subió al poder el general Gustavo Rojas Pinilla y, aunque antecedentes como el de la masacre de la Casa Liberal de Cali en octubre de 1949 no permitían augurar muy positiva gestión, el pueblo recibió el golpe como una bendición tras la sangría padecida (Galvis y Donadio, 2002).

Con el lema de "paz, justicia y libertad", se propuso un armisticio al que se acogieron miles de combatientes de la resistencia; las entregas de armas se multiplicaron y los desarmados regresaron a sus casas para rehacer sus vidas y reconstruir sus familias. No obstante, la concordia duró poco, ya que Rojas y el comandante de la Brigada de Institutos Militares –en esa época coronel– Rafael Navas Pardo sostenían que era preciso acabar por la fuerza con los reductos de las ligas comunistas que, lideradas por Juan de la Cruz Varela, continuaban, según ellos, con la intención de tomarse el poder con contingentes en Cundinamarca, Tolima y Meta. Todo lo contrario pensaban el Comandante General de las Fuerzas Armadas, general Alfredo Duarte Blum, el gobernador del Tolima, coronel César Augusto Cuéllar Velandia y los funcionarios de la misma embajada de los Estados Unidos, que en su correspondencia con el Departamento de Estado descalificaban la versión del presidente, con el señalamiento de que no parecía plausible que a veinte minutos de la zona calificada como bastión comunista y guerrillero estuviera levantando Rojas su finca personal de recreo y una gran base militar (Buitrago, 2006).

Las promesas hechas para la desmovilización de los guerrilleros no se cumplieron; fuerzas oficiales y paramilitares se dedicaron a perseguir y asesinar a los más reconocidos jefes y se acentuó la censura de prensa,

aun para medios tan cercanos al régimen como La República, de la familia Ospina Hernández y el Diario de Colombia, cuyo dueño era Samuel Moreno Díaz, el yerno del general. Los amnistiados más conocidos fueron cayendo uno a uno por las balas gubernamentales. Quienes regresaban a sus parcelas las encontraban ocupadas por extraños traídos de otras regiones y la recuperación de las tierras se hizo imposible. Los peligros y las amenazas, a más de las promesas incumplidas, hicieron que muchos volvieran a armarse y a reorganizar sus grupos. Por la época se creó el tenebroso Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que se convirtió en un organismo de tortura, desapariciones y abusos que operaba con órdenes del mismo palacio presidencial.

Villarrica



En el municipio tolimense de Villarrica se había concentrado el movimiento que desde los años treinta luchaba por la propiedad de la tierra. Allí ejercía la mayor influencia el líder agrario Juan de la Cruz Varela, quien había liderado las reivindicaciones agrarias en la zona del Sumapaz y el sur del Tolima que tuvieron repercusiones en los llanos Orientales. De hecho, en ese municipio se había establecido la más importante y pionera escuela agronómica, que fue destruida posteriormente y cuyas ruinas pueden observarse en las cercanías del municipio.

En Villarrica existe el icónico bosque de Galilea que, a más de servir de refugio a familias contestatarias, alberga la que puede considerarse como la última reserva forestal de su clase en el continente –bosque húmedo premontano– con especies en vía de extinción. Es oportuno señalar que allí aparecieron los hermanos Álvaro y Enrique Gómez Hurtado, uno de ellos al mando de una comisión de agrimensores que levantaría los planos topográficos de la región, con la intención de que les fueran adjudicados extensos baldíos en los que se asentaban numerosas familias de colonos. Tiempo después, los Gómez se presentaron como propietarios de extensos territorios, que veinte años más tarde seguían reclamando como si fueran de su propiedad y establecieron un aserrío en la reserva forestal (Aprile-Gniset, 1991[2]).

Como en esa región del Tolima se concentraban la resistencia y las disputas por la tierra, a la consigna de exterminio señalada desde Bogotá, el Ejercito destacó diez mil hombres en el departamento con tanques de guerra, morteros, artillería de precisión y helicópteros para desarrollar la tarea de "tierra arrasada"; de ellos, dos mil quinientos efectivos fueron enviados a Cunday, Villarrica y Berlín, entre el 27 de marzo y el 12 de abril de 1955.

Por la época trabajaba en el diario El Espectador Gabriel García Márquez a órdenes del legendario José Salgar. Los sucesos de Villarrica comenzaban a atraer la atención nacional y el Gobierno de Rojas, que

2 Conversaciones con Mario Aguilera, Isidro Parra y Deogracias Díaz.

solo había ejercido la censura de prensa con ocasión del asesinato de estudiantes en la carrera Séptima de Bogotá, invitó a diferentes medios a enviar sus corresponsales al Tolima para que palparan de primera mano la realidad de lo que ocurría en el municipio tolimense. El escritor narra el episodio en su obra autobiográfica *Vivir para contarla* (2002, pp. 549- 556).

García Márquez viajó con el fotógrafo Daniel Rodríguez; se trataba de la primera visita del escritor al Tolima. En Melgar, donde se encontraba el general Rojas, fueron trasbordados a un helicóptero que los llevó a Villarrica. Tras acomodarse en un hotel convertido en cuartel, salieron caminando hacia donde se suponía estaba la guerrilla. A poco de andar se produjo un tiroteo, por lo que hubieron de replegarse en el pueblo. Momentos después, llegó un contingente de soldados trayendo muertos y heridos de las filas tanto del ejército como de la guerrilla. Contra las órdenes de la oficialidad, Rodríguez logró tomar subrepticiamente una fotografía. Muy rápidamente los reporteros fueron evacuados, la entrevista prometida con Rojas jamás tuvo lugar y la nota periodística fue censurada para frustración de García Márquez. Algunas fotos de estos episodios vieron la luz en el libro de Jacques Aprile-Gniset (1991), aquí citado.

Un tiempo después, José Salgar envió nuevamente al periodista a cubrir otro episodio de oprobio: más de tres mil niños (algunos de ellos apenas unos bebés) fueron desarraigados de sus hogares y desperdigados sin rumbo ni destino en diferentes hospicios en los que les asignaron nombres al desgaire y sus familias nunca volvieron a saber de su paradero. La diáspora infantil fue el complemento de otra expulsión colectiva de la que fueron víctimas mil doscientos ciudadanos, también abandonados en diversos municipios bajo la sindicación de tener nexos con grupos comunistas. Las notas sobre estos forzados éxodos fueron publicadas gradualmente en *El Espectador* sin ninguna censura.

Pese a la censura de prensa, la información se filtraba y llegaba a publicarse en algunos medios; por esa razón, se envió a la cárcel al director del diario Tribuna de Ibagué, Héctor Echeverri Cárdenas, quien luego fue asesinado por agentes del SIC en los tiempos de la Junta Militar de Gobierno, en junio de 1957.

En Cunday, del que anteriormente hacía parte Villarrica[3] (Aprile-Gniset, 1991) se estableció un campo de concentración con reminiscencias

3 Aguilera (2012) en conversaciones con Eduardo Pizarro y con Charro Negro en el libro *Crónica de Villarrica.*

de los que funcionaron en Europa en el régimen nazi, con torturas, castraciones, choques eléctricos y violación de los más elementales derechos; la región fue bombardeada con napalm, un compuesto que luego fue de uso generalizado en la guerra de Vietnam por la aviación estadounidense (Galvis y Donadio, 2002).

Debe anotarse que los artefactos de *napalm* habían sido solicitados a Washington por el gobierno de Gómez a través del embajador Eduardo Zuleta Ángel, pero el gobierno estadounidense se negó. No obstante, el administración de Rojas se dio sus trazas y consiguió los compuestos químicos en Europa, utilizó la tecnología estadounidense y con mano de obra colombiana elaboró las bombas de las cuales se emplearon cincuenta, entre el 7 y el 10 de junio de 1955, en bombardeos a Villarrica y Sumapaz. Ante los oprobiosos ataques contra la población civil indefensa, a la gente no le quedó opción distinta de huir y así lo hizo en lo que vino a conocerse como una de las "columnas de marcha" que se dirigió al sur, pasando por Herrera para llegar a Planadas, Gaitania, El Pato, Guayabero y zonas del Caquetá. La marcha la integraban mujeres, muchas de ellas embarazadas, niños, ancianos y sobrevivientes de los enfrentamientos y los bombardeos. En total fueron más de cien mil desplazados y nunca se sabrá con certeza el número de muertos en los bombardeos y las confrontaciones. La marcha fue permanentemente hostigada con la utilización de una docena de aviones F-47 (Aprile-Gniset, 1991).

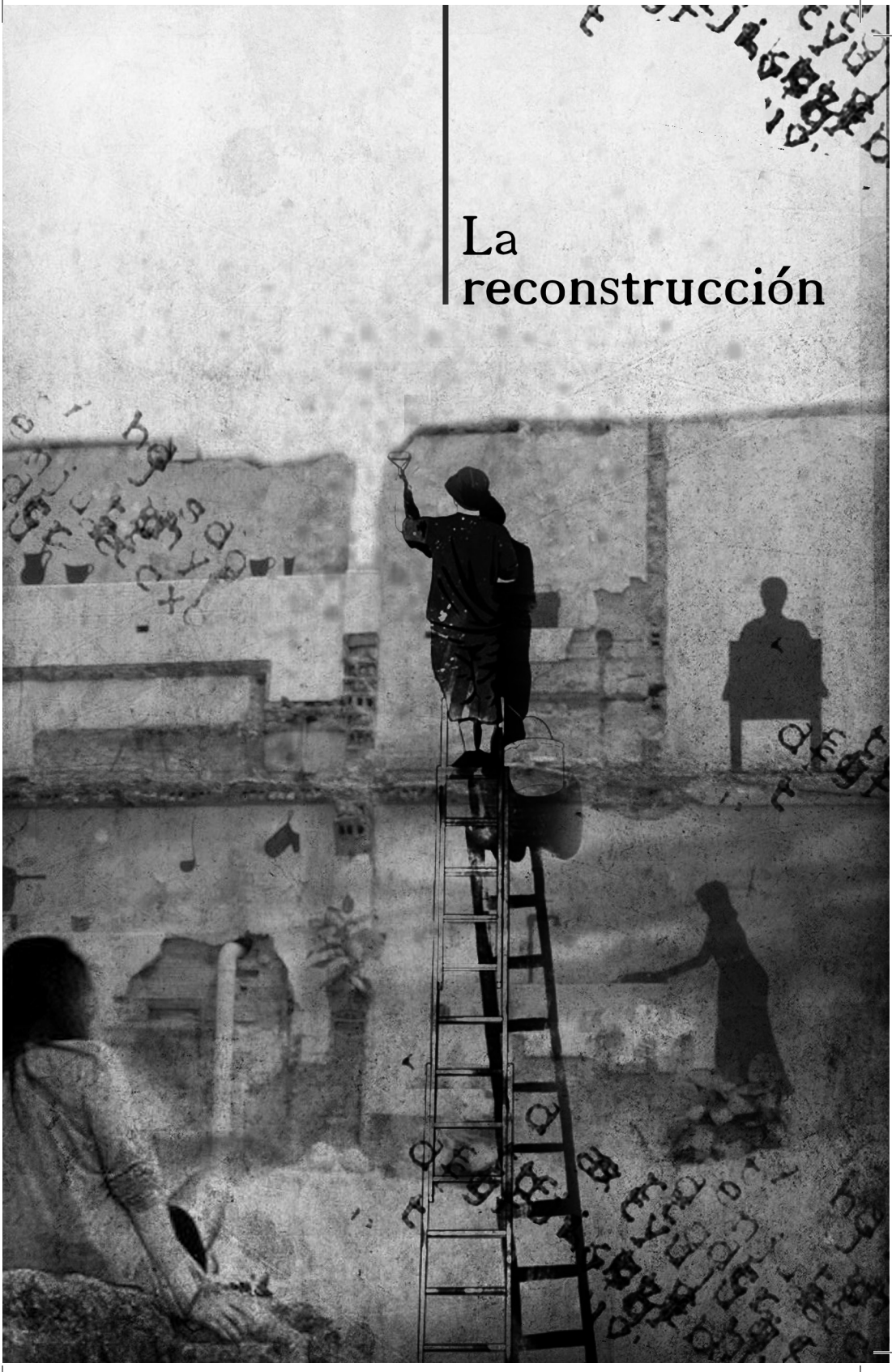
El regreso del terror

La represión se hizo similar a la del Gobierno anterior; los derechos más elementales fueron conculcados. El atrabiliario Lucio Pabón Núñez, que había cumplido similar función en el gobierno de Gómez, se convirtió en el supremo perseguidor. Se dieron episodios en los que los estudiantes universitarios y los asistentes a una corrida de toros en Bogotá fueron abaleados por las tropas del Batallón Colombia, recién llegadas tras participar en el conflicto internacional de Corea dentro de los contingentes de las Naciones Unidas.

Samuel Moreno Díaz, el yerno del general, recorría el país recogiendo coimas a los contratistas de obras públicas –numerosas y útiles, por cierto– que se realizaban con los dineros producto de la bonanza de los precios del café, y María Eugenia, la hija de Rojas, a similitud de Evita Perón en Argentina, montaba todo un aparato asistencialista del que obtenía beneficios económicos y políticos.

El país se levantó en protestas y se inició una huelga general en la que participaron obreros, empresarios y estudiantes, hasta que Rojas dejó el poder en manos de una Junta Militar de cinco miembros, que gobernó mientras se hacía la transición de vuelta a un gobierno civil. En España, Alberto Lleras y Laureano Gómez firmaron un pacto por medio del cual los dos partidos se comprometían a turnarse en el poder por dieciséis años y a repartirse las posiciones del Estado equitativamente en lo que vino a llamarse el "Frente Nacional" y que, si bien fue criticado por excluyente, logró amainar la violencia y establecer una precaria paz. El pacto fue refrendado con un plebiscito, respaldado por la mayoría de los votantes –incluidas las mujeres que por primera vez pudieron votar– y más tarde fue elegido presidente Alberto Lleras Camargo (Tirado, 1976).

La reconstrucción



La magnitud de la tragedia, los efectos sociales y económicos que se experimentaron y la destrucción de la estructura social padecida resultaban superiores a la capacidad de reacción del Tolima y sus administradores. Sin embargo, de la imaginación de su gente, de la generosidad de la mayoría, del espíritu de servicio de muchos y con la no poca ayuda del Gobierno nacional e instituciones extranjeras de solidaridad, se inició la inconmensurable tarea de la reconstrucción. Aquí habría que acotar que de los cientos de miles de tolimenses desplazados violentamente, muchos encontraron cobijo y asilo en otras regiones del país en donde la carnicería no llegó a las insoportables situaciones padecidas en el Tolima.

En Santander, el Cesar, Magdalena, el Llano y, por supuesto, Bogotá, a más de Ibagué, fueron recibidos los exiliados y en esos lugares pudieron reconstruir sus vidas, sus profesiones y sus familias, en medio de grandes privaciones.

Con lo que se tenía a mano, que no era mucho por razón de la mencionada destrucción del aparato productivo, fueron surgiendo propuestas e iniciativas que, sobre la marcha, intentaban, y muchas veces lo lograron, paliar parte de los sufrimientos y las necesidades de quienes lo perdieron todo.

Por iniciativa privada, y con el apoyo de la Iglesia Católica, florecieron entidades como la Casa del Niño que intentaba acoger a los innumerables huérfanos que dejaba el paso de los violentos. Grupos de señoras en soporte de la institución realizaban tradicionales costureros que se dedicaban a la confección de sábanas y pañales para atender las siempre crecientes necesidades del hospicio. De sus propios recursos, las damas compraban el género y los elementos requeridos para la confección; las mismas señoras, junto con otras colaboradoras, realizaban censos en los cerros nororientales de Ibagué donde se habían instalado, en precarias condiciones, los sobrevivientes del genocidio, para de esta manera recabar la información que les permitía en la Navidad entregar vestidos, zapatos y juguetes de acuerdo con la edad de los niños habitantes de las viviendas informales.

Algunas de esas señoras, agrupadas en organizaciones como la Cruzada Social y con aportes y donaciones que ellas mismas conseguían, a más de recursos provenientes de la explotación de algunos bienes recibidos por la generosidad de empresas afincadas en la región, se dieron a la tarea de construir viviendas para los desplazados.

Los alumnos de colegios ibaguereños dedicaron sus jornadas de descanso a la visita periódica de las familias refugiadas en las montañas circundantes de la capital del Tolima para llevarles raciones semanales de leche y harina que suministraban entidades de solidaridad como CARE, AID y otros organismos internacionales de ayuda.

Notables tolimenses que habían llegado a las más altas posiciones del Estado, como fue el caso del expresidente Darío Echandía Olaya y el exministro Rafael Parga Cortés, resolvieron retornar a su tierra a contribuir con su presencia, capacidad de gestión y ejemplo en la tarea de la reconstrucción. Echandía lo hizo como gobernador y, a más de gestionar las iniciativas de pacificación, logró que se concretaran inversiones como la Hidroeléctrica de Río Prado. Parga aceptó relevar a Echandía en la gobernación y además de contribuir fundamentalmente en las conversaciones de paz con los grupos de resistencia campesina, organizados para defenderse del genocidio gubernamental, impulsó luego, disponiendo incluso de sus propios recursos, la consolidación de la Universidad del Tolima.

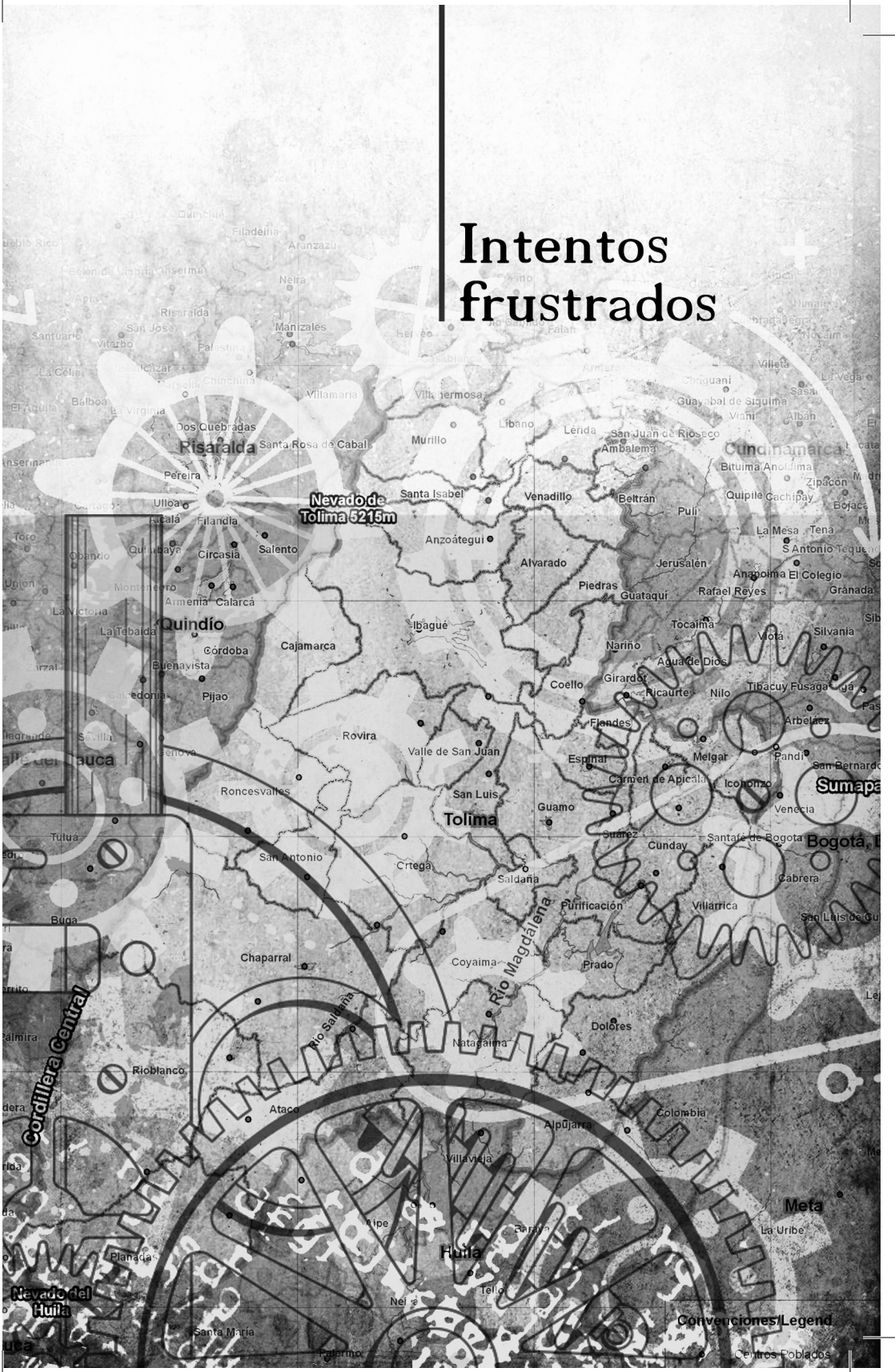
La Iglesia Católica, cuya actuación en los años más terribles de la violencia oficial había sido tan controvertida, hizo en el Tolima un giro de ciento ochenta grados y con el liderazgo del obispo de Ibagué, Rubén Isaza Restrepo, se emprendió la que se llamó "Gran Misión del Tolima", en la que participaron "trescientos sacerdotes, dos mil religiosos, cuatro mil laicos y doscientos jóvenes voluntarios de Ibagué"[4].

La Misión inició tareas el 20 de julio de 1960 con grandes marchas y oficios religiosos en Ibagué, actividad que se repitió cada seis meses por cuatro años con presencia en los municipios más afectados por la confrontación. Esta Misión tuvo enorme incidencia en la pacificación; adonde llegaba se hacía la entrega y destrucción de las armas y propició el arduo proceso de reconstrucción de un territorio devastado. Incluso, algunos jefes liberales, con pocas afinidades religiosas, trabajaron hombro a hombro con los llamados "cruzados de la paz" liderados por monseñor Isaza Restrepo. Los índices de violencia y las cifras de muertos se redujeron radicalmente[5].

4 Según datos proporcionados por el padre Raúl Darío Bejarano, párroco de Cajamarca en 1999.

5 Conversaciones con Héctor Galeano.

Intentos frustrados



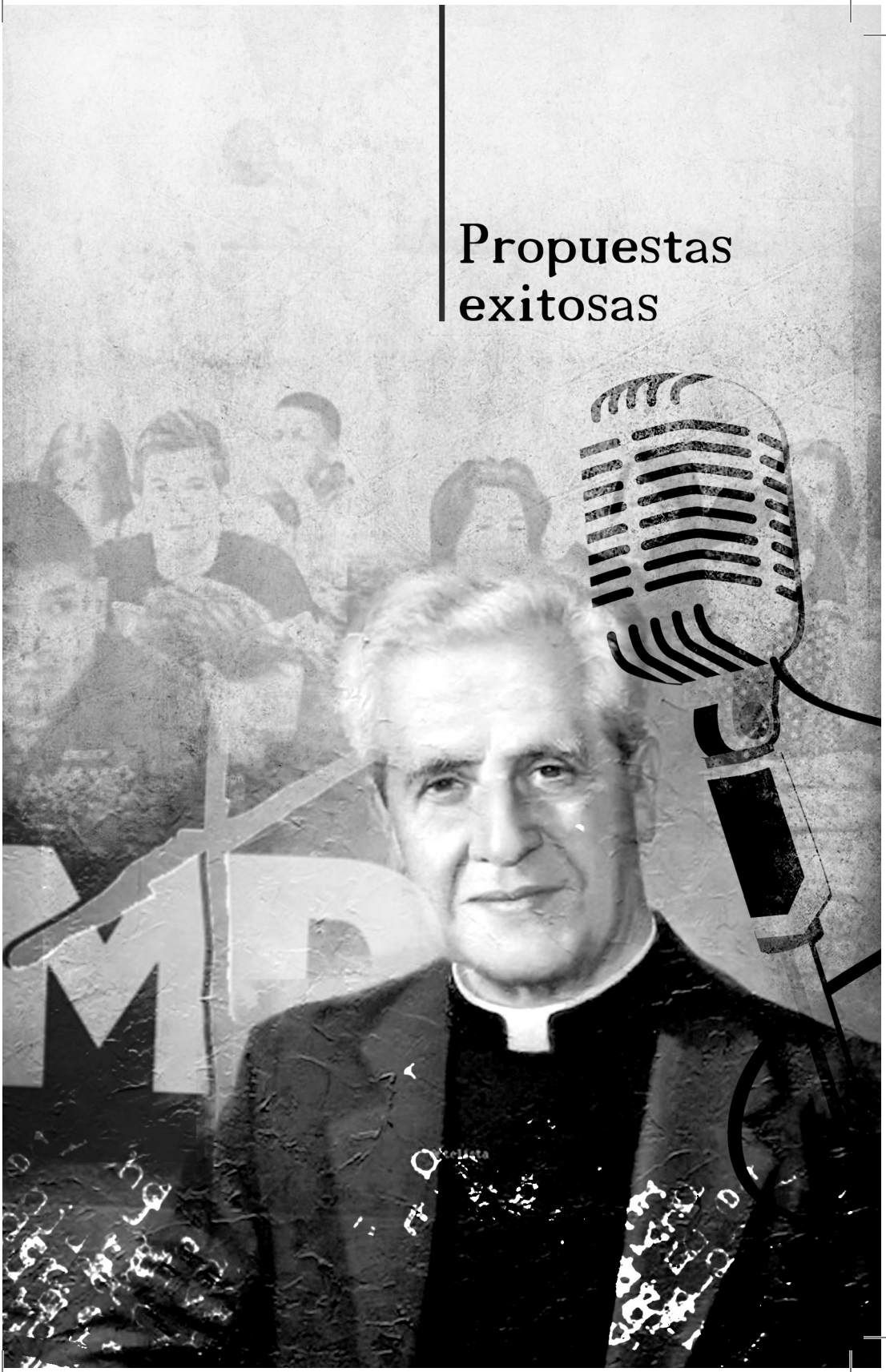
Así como se han descrito algunos de los más plausibles esfuerzos para recuperar la normalidad en una región asolada, debe también registrarse una propuesta hecha por el Gobierno departamental del Tolima a la Junta Militar de Gobierno en el sentido de crear una Corporación de Rehabilitación y Desarrollo del Tolima (Revista de la Contraloría General del Tolima, 1985).

Se buscaba, con esta iniciativa, enfrentar la angustiosa situación social y económica del departamento en procura de un desarrollo armónico del mismo, pues la destrucción había sido general. Con esa entidad se pretendía evitar la dispersión de los recursos fiscales mediante una adecuada planificación de las empresas por promover, un estímulo al fomento de la inversión y la asociación de esfuerzos.

Se debe hacer énfasis en el hecho de que la violencia no era de origen regional sino producto de situaciones e intereses del orden nacional y, por la misma razón, debían aunarse esfuerzos nacionales en la reparación de la tragedia.

Lamentablemente, la propuesta de la Gobernación no tuvo eco y lo conseguido casi que se produjo por el esfuerzo regional y las iniciativas ciudadanas.

Propuestas exitosas



La tragedia fue de tal magnitud y el desplazamiento adquirió tales dimensiones que en los centros poblados más grandes que recibieron a los exiliados, como Bogotá, surgieron actividades que pretendieron mitigar los padecimientos de las víctimas. Uno de los que más impacto tuvo, y que ha trascendido sesenta años después en una organización que es un parámetro internacional como entidad privada para ciudadanos de bajos recursos, ha sido el Minuto de Dios, fundado por el sacerdote eudista Rafael García-Herreros. De un espacio en la incipiente televisión colombiana, en el que primaba el asistencialismo y se suministraban mercados a las familias necesitadas, se pasó a un programa de vivienda a los desposeídos que devino en una estructurada organización de la cual surgió una enorme urbanización, que se expandió a otras regiones del país, en las que, a más de las viviendas, se reconstruía la comunidad con todos los elementos requeridos: educación, organización comercial, emisora, museo, colegio y una universidad que, hoy en día, cuenta con un mayor número de alumnos matriculados –más de ciento diez mil– gracias a un diseño que permite brindar educación de primera línea a bajos costos de matrícula para beneficio de los sectores de menor capacidad adquisitiva.

El poder sanador de la cultura y el deporte

La misma sociedad agobiada y maltrecha fue encontrando fórmulas que permitieron recuperar el tejido social y la convivencia pacífica. Fue así como iniciativas en el campo deportivo y cultural se abrieron paso y conformaron canales para fomentar la paz y calmar las confrontaciones; algunas de ellas del orden nacional, que tuvieron enorme respuesta en las regiones, y, otras, de corte regional, que hicieron volver los ojos de la nación al Tolima por razones diferentes a la depredación y la muerte.

En 1952, y como réplica a eventos mundialmente famosos como las vueltas ciclísticas a Francia, España e Italia, se realizó la primera Vuelta a Colombia. La competencia ciclística por etapas tuvo inmediato impacto entre la ciudadanía, en lo que contribuyó enormemente el hecho de que al comienzo se conformaban equipos integrados por pedalistas provenientes de las diferentes regiones, de manera que los enfrentamientos partidistas sangrientos comenzaron a sustituirse por las simpatías por los equipos regionales, en un espectáculo que cruzaba por unas precarias vías y unía los departamentos. La radio cumplió una tarea fundamental para la promoción del torneo y de un deporte que, con el tiempo, vino a constituirse en uno de los emblemas del país.

Algo similar ocurrió con la aparición de un equipo de fútbol profesional que entraría a participar en el torneo rentado colombiano con el nombre de "Deportes Tolima". En diciembre de 1954 se conformó la escuadra que representaría a la región, lo que contribuyó en gran medida a apaciguar los espíritus y solidificar amistades, y sirvió de entretenimiento en medio de la tragedia, propiciando la construcción de los primeros escenarios deportivos para multitudes que hubo en la región. En la creación del equipo de fútbol y la construcción del estadio de Ibagué participó no solamente la sociedad civil sino el Gobierno militar que había tomado el poder en el momento más salvaje de la conflagración.

Un proceso parecido se vivió con la Universidad del Tolima. Por años, el acceso a la educación superior para los tolimenses estuvo reservado a aquellos cuyas familias contaban con los recursos para asumir los costos de matrícula y su estadía en otra ciudad o, en su defecto, aquellos que con grandes esfuerzos, sacrificios, estrecheces y, esporádicamente, becas

o apoyos generosos, lograban acceder a instituciones educativas por fuera de la región.

Todo comenzó a cambiar en 1955 cuando, durante el gobierno de Rojas Pinilla y en la gobernación del coronel César Augusto Cuéllar Velandia, con el sustento de la ordenanza número 26 del 16 de diciembre de 1954 (Ministerio de Educación, 2006), se puso en funcionamiento la Facultad de Agronomía en las que fueron las instalaciones de la Escuela Agronómica de San Jorge de la comunidad salesiana en Ibagué.

Hay que decir que desde 1945 se contaba con una ordenanza que oficializaba la creación de la Universidad, pero diversas contingencias se interpusieron para su concreción, desde económicas, políticas y de orden público, a lo que se unía la falta de aspiraciones de los locales.

El afán por dejar atrás la horrenda violencia y cumplir con un propósito de cualificación de la vocación agropecuaria del departamento fue una de las principales razones que contribuyeron a la realización de la aspiración. Las clases se iniciaron el 12 de marzo de 1955; poco tiempo después fueron creadas la Facultad de Medicina Veterinaria, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Bellas Artes.

Las facultades de Agronomía y de Medicina Veterinaria muy rápidamente adquirieron renombre nacional y se convirtieron en polo de atracción para decenas de alumnos de otros departamentos que eligieron a la Universidad del Tolima para continuar su educación, muchos de los cuales echaron raíces en la región y aportaron sus vivencias y su cultura en la reconstrucción del tejido social afectado. De la misma manera, los egresados de las facultades mencionadas supieron aprovechar la bien ganada fama de calidad profesional y se convirtieron en elementos estratégicos para la evolución de la actividad agropecuaria en la Costa, el Cesar, Santander y Meta.

La Escuela de Bellas Artes, que se inició con la presencia de afamados artistas como Manuel Hernández, Jorge Elías Triana y Julio Fajardo, tuvo un efímero momento de gloria que le permitió concitar a los más destacados de la plástica de la época en los "salones" que se realizaron en las primeras ediciones del Festival Folclórico Colombiano. Años después, un "experto en eficiencia", que fue designado como rector, encontró que el arte no era rentable; la Escuela de Arte, al menos, y quienes allí estudiaban, tenían ideas políticas que no encajaban con el pensamiento oficial, por lo que procedió a clausurarla.

Hacia 1972 se impulsó la acción de la Universidad por fuera del campus con la creación de los programas extramuros, que con el tiempo evolucionaron en la forma de Centro de Educación a Distancia, hasta llegar a la situación actual en la que se cuenta con ocho programas con acreditación de alta calidad, doce maestrías y cuatro doctorados, y se han iniciado los protocolos para alcanzar la acreditación de alta calidad institucional.

Con la presencia de la Universidad del Tolima en la región se abrieron los horizontes para decenas de miles de tolimenses que, de otra manera, nunca habrían podido acceder a las aulas universitarias.

CORPORACION
FESTIVAL FOLCLORICO
COLOMBIANO

El Festival Folclórico Colombiano

Un destacado papel en el proceso curativo de la sociedad le correspondió al Festival Folclórico Colombiano, concebido precisamente para convertirse en un evento que permitiera la cercanía entre diversos sectores de la ciudadanía, con el apoyo de la música, la danza, la plástica, la gastronomía y demás elementos de la cultura y el buen vivir.

Del magín de un líder cívico, Adriano Tribín, y con la complicidad del exministro y gobernador Rafael Parga Cortés, se puso en marcha el Festival Folclórico Colombiano, al que se invitó a los diferentes departamentos para que enviaran a sus delegaciones conformadas con lo más selecto de sus artistas y reflejaran con mayor autenticidad las expresiones culturales de los pueblos. La ciudad vio un desfile de talento en el que participó lo más granado del folclor nacional: Delia Zapata Olivella y Sonia Osorio, quién estrenaba lo que habría de convertirse en el Ballet Folclórico Colombiano; el Salón de Pintura en el que participaron con sus obras Grau, Obregón, Botero, Granada y Ramírez Villamizar, quienes conformaban la vanguardia plástica de la época; al lado, orquestas, conjuntos, grupos de danzas, solistas, intérpretes y compositores de las más altas calidades.

No había hoteles para acomodar a los participantes, las delegaciones o los turistas, por lo que los hogares se abrieron para alojarlos y compartir el evento en armonía. La gente acudía orgullosa a los escenarios con atuendos típicos de los campesinos tolimenses y se bailaba en las calles sin distingos de clases sociales o afiliación partidista. Los altísimos parámetros de los primeros festivales se vieron posteriormente deteriorados con la llegada de una malsana hegemonía política que todo lo degradó, de la cual se tratará más adelante, lo que contribuyó a la pérdida de calidad de un evento que en su momento sirvió para ubicar al Tolima como tierra de música y paz, a sanar heridas que había dejado la violencia y a recuperar la estima por valores que habían quedado sepultados en la horrible conflagración.

El efecto se había conseguido: el Tolima, que unos pocos años atrás se había convertido en sinónimo de violencia y muerte, se identificaba ahora

como cuna del regocijo civilizado y lugar al que se acudía para celebrar y disfrutar de lo más emblemático del arte nacional.

Como se podrá apreciar a lo largo del presente trabajo, la lúdica, la música y el arte se manifestarán como elementos empleados por la resistencia a lo largo de los numerosos episodios de violencia que ha debido padecer la población colombiana en los cruentos años que siguieron.

Por cierto, y es preciso registrarlo, todas estas iniciativas se gestaron en medio de un ambiente nacional hostil a todo lo que no se acomodara a la visión oficial, tradicional y confesional de cultura.

La censura impregnaba las distintas regiones y las manifestaciones artísticas que no se encuadraban dentro de los estrechos parámetros de los dignatarios a cargo del presupuesto y la promoción eran criticadas, ahogadas, cercadas y señaladas como subversivas, revolucionarias, decadentes, carentes de gusto y propiciadoras de elementos de disolución de la sociedad, con los mismos argumentos esgrimidos por el estalinismo en la Unión Soviética, la Revolución Cultural de Mao en la China, la dictadura franquista, el macartismo estadounidense y el nacional socialismo alemán (Tirado, 2014).

Fruto de ese ambiente de totalitarismo unanimista, se adelantaron en Colombia campañas contra quienes se atrevían a proponer alternativas a la "cultura oficial" o a los parámetros político-religiosos imperantes.

Pintores como Débora Arango o Pedro Nel Gómez eran vetados en las exhibiciones oficiales o los salones regionales, sus obras censuradas, mutiladas o retiradas y su misma presencia perseguida en los escenarios culturales, con argumentos similares a los utilizados desde los ministerios y las secretarías regionales para impedir la presencia del arte abstracto y todo lo que no se acoplara al figurativismo oficial.

A la literatura le ocurría lo mismo, así como a los libros y textos de historia que no se acomodaran a la versión oficial del devenir nacional. Los autores eran señalados como subversivos, que pretendían imponer ideas foráneas y, en muchas ocasiones, sus obras enviadas a las piras que muchos fanáticos organizaban en diversas regiones del país para intentar borrar todo vestigio de visiones y conceptos diferentes.

Por la época, tenía plena vigencia el "Índice", o su versión colombiana, en el que aparecían las obras de los italianos del neorrealismo, como había ocurrido con los estadounidenses que quedarían señalados

por McCarthy y los rusos que se separaban del canon de Pravda. Por supuesto, los nuevos historiadores y novelistas colombianos, e inclusive los periódicos y revistas que no comulgaban con el pensamiento oficial, pasaban a engrosar las listas prohibidas cuya sola lectura se consideraba pecado mortal.

El cine no escapaba de la acción de estos "torquemadas" de nuevo cuño. Se estableció una Junta Nacional de Censura y, en regiones como Antioquia, desde los púlpitos y en periódicos confesionales, se hacían públicas las listas de las películas "prohibidas para todo católico"; entre las que encabezaban los oprobiosos escalafones estaban las obras de Visconti, De Sica, Fellini, Antonioni y toda la Nueva Ola francesa . De hecho, muchas de las que se consideraban impropias para los ojos de los colombianos de la época como *La Dolce Vita*, de Fellini, *Viridiana* de Buñuel o *Los cuatrocientos golpes* de Truffaut, se pueden ver actualmente en versiones sin recortes en los canales de cable a cualquier hora del día o de la noche.

La música y la danza también caían en las categorías de corruptoras y propiciadoras de la degeneración de las costumbres. Ciertos géneros musicales, no pocas expresiones coreográficas y conjuntos artísticos quedaban señalados con el mote de "peligrosos para el espíritu y degradadores de la moral". Se destruían acetatos, se vetaban presentaciones, se encontraban mensajes demoníacos y letras disolutas en las canciones, por lo que se limitaba cualquier apoyo oficial a tales expresiones artísticas.

Todo ese ambiente de oscurantismo y fanatismo contrastaba con la aparición de escenarios que acogían expresiones censuradas, como aconteció con el Museo de Arte del Minuto de Dios, que pronto se convirtió en referente para el arte moderno colombiano y poseedor de una colección de lo más representativo de la plástica que, en ciertas épocas, se debatía entre la censura y la persecución de los entes oficiales y funcionarios prosaicos.

Si bien por la época vieron la luz dos de los trabajos más serios, emblemáticos y valerosos que sobre hechos tan aciagos se han escrito, ya reseñados en estas páginas, como el documento de la Secretaría de Agricultura del Tolima de 1958 y el libro *La Violencia en Colombia* de Guzmán, Fals y Umaña (1962), desde entonces muy poca trascendencia han tenido los escritos sobre tan aborrecibles hechos, ni siquiera en la literatura de ficción, ni mucho menos se han realizado análisis científicos

sobre la inmensa tragedia. Un trabajo emblemático que ilustra lo sucedido en Villarrica, realizado por el francés Jacques Aprile-Gniset (1991), con todo el rigor periodístico e histórico, fue desechado por cuatro editoriales, hasta que finalmente se logró su publicación, pero nunca obtuvo la difusión que ameritaba. Intereses económicos y políticos han contribuido al silencio que solo ha sido roto por esporádicas canciones de trascendencia nacional o cantos populares de muy restringida audiencia. Por cierto, se han sucedido tragedias naturales y nuevas formas de violencia que sepultan los padecimientos del pasado, o el temor de la repetición hace que muchos no se atrevan a hablar y vayan desfilando a la tumba con sus relatos y sus testimonios. Por esa razón, resulta de tanta vigencia que a la cabeza de las tareas que se encaminan al establecimiento de una elusiva paz, esté la conformación de una entidad que permita la búsqueda de la verdad e identifique responsabilidades, que ciertamente debe retroceder en el tiempo de análisis hasta los años treinta del siglo pasado so pena de quedar trunco e incompleto.

El Frente Nacional

La transición entre la caída de la dictadura de Rojas y el siguiente Gobierno civil se llevó a cabo mediante el gobierno de la Junta Militar, un mando colegiado integrado por cinco altos militares.

El gobierno de Rojas colapsó el 10 de mayo de 1957 tras un paro nacional en el que participaron las centrales obreras, los sindicatos, los empresarios y los estudiantes. Si bien la defenestración fue incruenta, en el país continuaron las acciones violentas, entre soldados, policías y el SIC, contra la población civil y la reacción de grupos de resistencia de campesinos liberales y comunistas que se les oponían y que más tarde fueron el origen de grupos de bandoleros.

Las cosas se aceleraron; el Pacto de Benidorm[6], entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro, fue ratificado por el plebiscito en el que, por primera vez, la mujer pudo ejercer el derecho al voto, y que estableció la alternación en el poder entre los partidos Liberal y Conservador por dieciséis años y el reparto milimétrico de la burocracia entre los miembros de las dos organizaciones políticas.

Sin mucha oposición, los dos partidos acordaron el nombre de Alberto Lleras Camargo para iniciar la alternación; este barrió en las elecciones y se posesionó el 7 de agosto de 1958 con el beneplácito general.

La llegada de Lleras Camargo al poder vino acompañada de una disminución notable de los hechos de sangre, un abandono masivo de las armas por los grupos de resistencia, una desmovilización de los más importantes jefes guerrilleros y esfuerzos notables de pacificación, reparación de víctimas y restitución de tierras usurpadas en la que participaron connotados jefes políticos que, como en el Tolima con Echandía y Parga, habían ocupado la presidencia y los ministerios y encabezaron desde la gobernación del departamento los esfuerzos para recuperar la paz.

Sin embargo, en el mundo, y particularmente en América, se comenzaron a producir hechos de enorme trascendencia. El más

6 Nombre de la población turística española donde se llevaron a cabo las conversaciones.

importante para la región, que tuvo los más profundos efectos a lo largo del continente, fue la derrota del dictador cubano Fulgencio Batista por parte de un ejército revolucionario comandado por los hermanos Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Huber Matos.

El primero de enero de 1959 llegaron las tropas rebeldes a La Habana; Batista huyó a los Estados Unidos y nada volvió a ser igual en la isla; muchas cosas se alteraron en el Caribe, Sur América y África en los lustros siguientes, al punto de convertirse en el Gobierno más prolongado de la historia de la humanidad y referente obligado para acciones similares alrededor del orbe.

Nunca hubo cordialidad entre el nuevo Gobierno revolucionario cubano y los Gobiernos de los Estados Unidos, que habían ejercido un poder colonial sobre la isla desde cuando derrotaron a España a comienzos del siglo XX. Gran parte de la estructura productiva de la isla era propiedad de estadounidenses, así como de la actividad turística, que compartían con los miembros de un régimen corrupto y los tentáculos de organizaciones mafiosas del continente que usufructuaban el juego y la prostitución.

El nuevo Gobierno cubano procedió a expropiar gran parte de la actividad empresarial, fusiló a no pocos de los más destacados miembros del régimen anterior y reveló su enorme afinidad con la ideología comunista y su estandarte, la Unión Soviética.

En tanto, en Estados Unidos subió al poder el Partido Demócrata, en cabeza de un joven presidente, John F. Kennedy, quien se propuso hacer contrapeso a los aires liberadores que se expandían por toda Latinoamérica y gran parte del mundo con la ilusión de la Revolución Cubana (Tirado, 2014).

Kennedy lanzó la idea de la "Alianza para el Progreso" a través de la cual se modificaría el accionar imperial de los Estados Unidos para convertirlo en uno de cooperación y amistad. Con la Alianza, que recibió el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se incrementaron los presupuestos de ayuda y se conformaron los Cuerpos de Paz, cuya primera misión vino precisamente a Colombia.

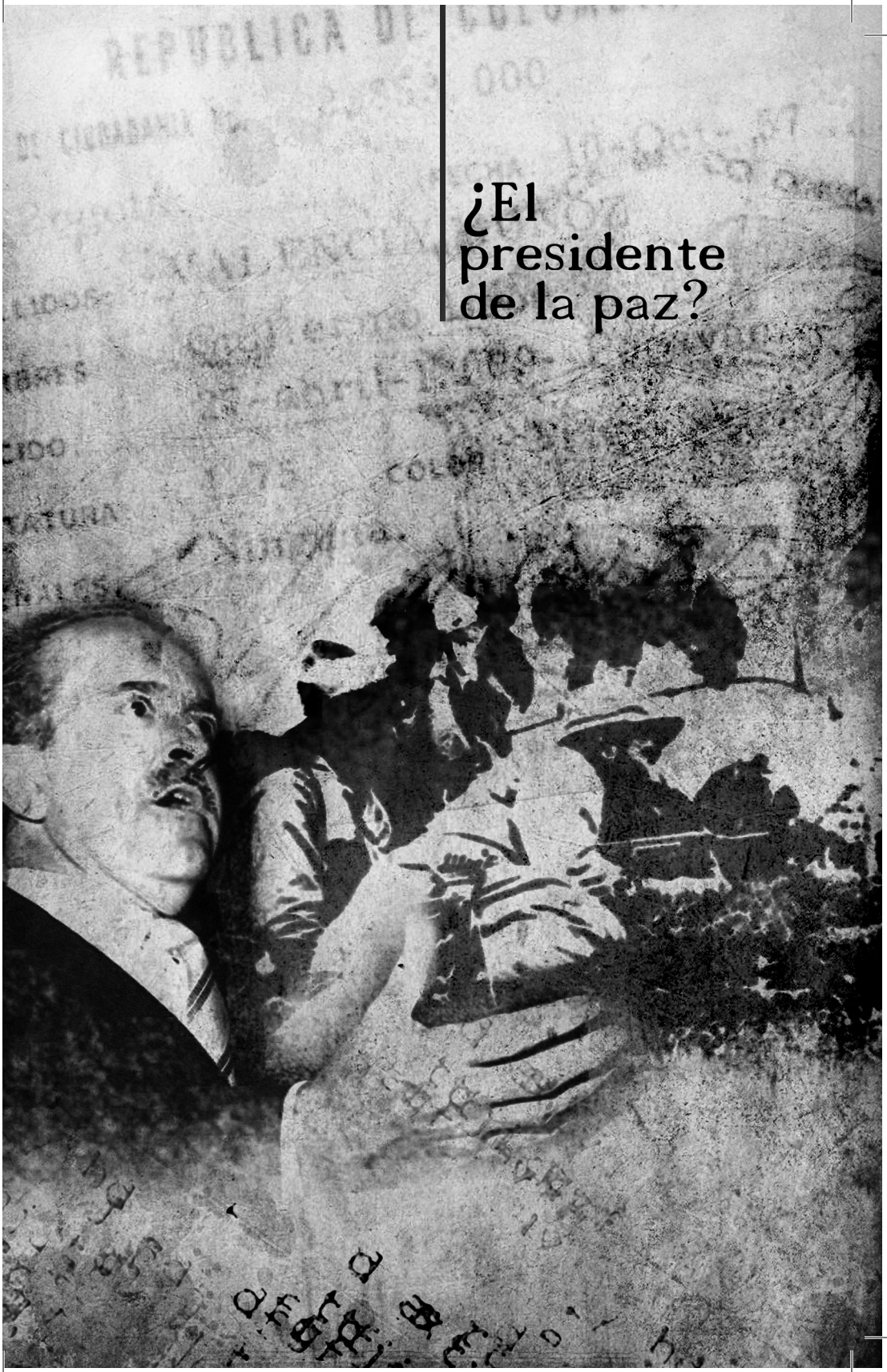
El establecimiento del régimen comunista en Cuba, su cercanía con la Unión Soviética y las expropiaciones de las empresas estadounidenses en la isla llevaron al rompimiento de las relaciones entre los dos países y a la ejecución de una fracasada invasión a la isla por parte de voluntarios

cubanos, apoyados y auspiciados por el Gobierno de Washington, la Invasión de Bahía de Cochinos, que sirvió para tensionar aún más las relaciones entre los dos países y llevó a Cuba a quedar en la órbita soviética en pleno apogeo de la llamada "Guerra Fría".

La confrontación llegó al clímax cuando Kennedy denunció la presencia de proyectiles atómicos en territorio cubano y dio un plazo perentorio a los soviéticos para desmantelarlos. Kennedy venció en el pulso a Nikita Kruschev, el primer ministro soviético, y los misiles fueron desmantelados, pero Cuba quedó íntimamente inserta en la órbita de Moscú, mientras que Washington promovió su expulsión de la OEA en julio de 1964, y estableció un embargo comercial, al que se sumó la mayoría de los miembros de la OEA, manteniendo el dominio sobre la base militar de Guantánamo en territorio cubano. Poca difusión se dio al hecho de que, en contraprestación por el desmantelamiento de los cohetes instalados en suelo cubano, Estados unidos hizo lo mismo con los que tenía enfilados a la Unión Soviética en tierras de Turquía.

Muy pronto Cuba comenzó a exportar su revolución a Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina. Los guerrilleros de todo el continente iban a Cuba a recibir entrenamiento militar e ideológico y la Unión Soviética auspiciaba, a través de la isla, la dotación y avituallamiento de los insurgentes en medio de las confrontaciones de la Guerra Fría.

¿El presidente de la paz?



La situación internacional cambió radicalmente con el asesinato de Kennedy, en 1963, y en Colombia con la llegada al poder de Guillermo León Valencia, quien tenía la concepción de que para el conflicto colombiano no había solución distinta al uso de la fuerza ni otro origen que unos grupos de bandoleros los que necesariamente debían exterminarse. En esa visión le acompañaban muchos de los altos mandos militares, las directrices de Washington y parte del establecimiento político colombiano que agitaba el Congreso y los medios con señalamientos contra las "repúblicas independientes", que en realidad eran los rezagos de las luchas agrarias de los años treinta, asentadas en el Sumapaz, el Tolima y los Llanos, y los grupos de resistencia conformados por campesinos liberales y comunistas que se situaban en el sur del Tolima, en El Davis, en Gaitania y en las zonas de El Pato, Guayabero y Marquetalia, que eran las supervivientes de persecuciones durante los gobiernos de Ospina, Gómez, Rojas y la Junta Militar. Eran estructuras pobremente armadas, con escuálidas formaciones y sin capacitación, que conformaban, sobre todo, grupos de campesinos aislados que suplantaban al Estado, ausente en esos territorios, y que recibían la simpatía y la aceptación de la población campesina; de la misma manera, en las ciudades, la población estudiantil se mostraba afín con las teorías marxistas en boga y manifestaba su antipatía por la exclusión que se derivaba del reparto milimétrico orquestado y administrado por el Frente Nacional.

Los ataques de la fuerza pública dentro del llamado "Plan Soberanía", que formaba parte del Plan Laso[7], se realizaron a través de un multitudinario despliegue de fuerza pública[8], al que se añadieron indiscriminados bombardeos y el empleo de químicos en recipientes de vidrio que producían lo que las comunidades afectadas llamaron "espuela de gallo" y "viruela negra". Lo anterior, unido a los efectos de la Revolución Cubana, aceleraron y propiciaron la consolidación de los mencionados grupos que conformaron los movimientos guerrilleros que, medio siglo después,

7 Por sus iniciales en inglés: Latin América Security Operation.

8 Se habla de más de dieciséis mil soldados, que durante los cuatro meses que duró el plan requirió para su sostenimiento de 372 millones de pesos de la época.

continúan empeñados en una guerra sin solución. Años más tarde, el general Manuel José Bonnet Locarno lo resumía en una frase: convirtieron "(...) un movimiento sin peso político, muy localizado, en un fenómeno con un gran peso nacional e incluso internacional" (Martínez, 2006).

El primero en establecerse formalmente fue un grupo que continuaba las viejas luchas campesinas de principios de siglo, que vino a llamarse "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) y confrontó la acción del ejército que actuaba con la denominación de "acción cívico-militar", una iniciativa con pleno respaldo de Washington y cuyo principal escenario fue Marquetalia.

En enero del año siguiente, la Revolución Cubana inspiró la aparición del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en sus inicios contó con fuerte participación de estudiantes universitarios y un muy caracterizado sector radical del clero católico.

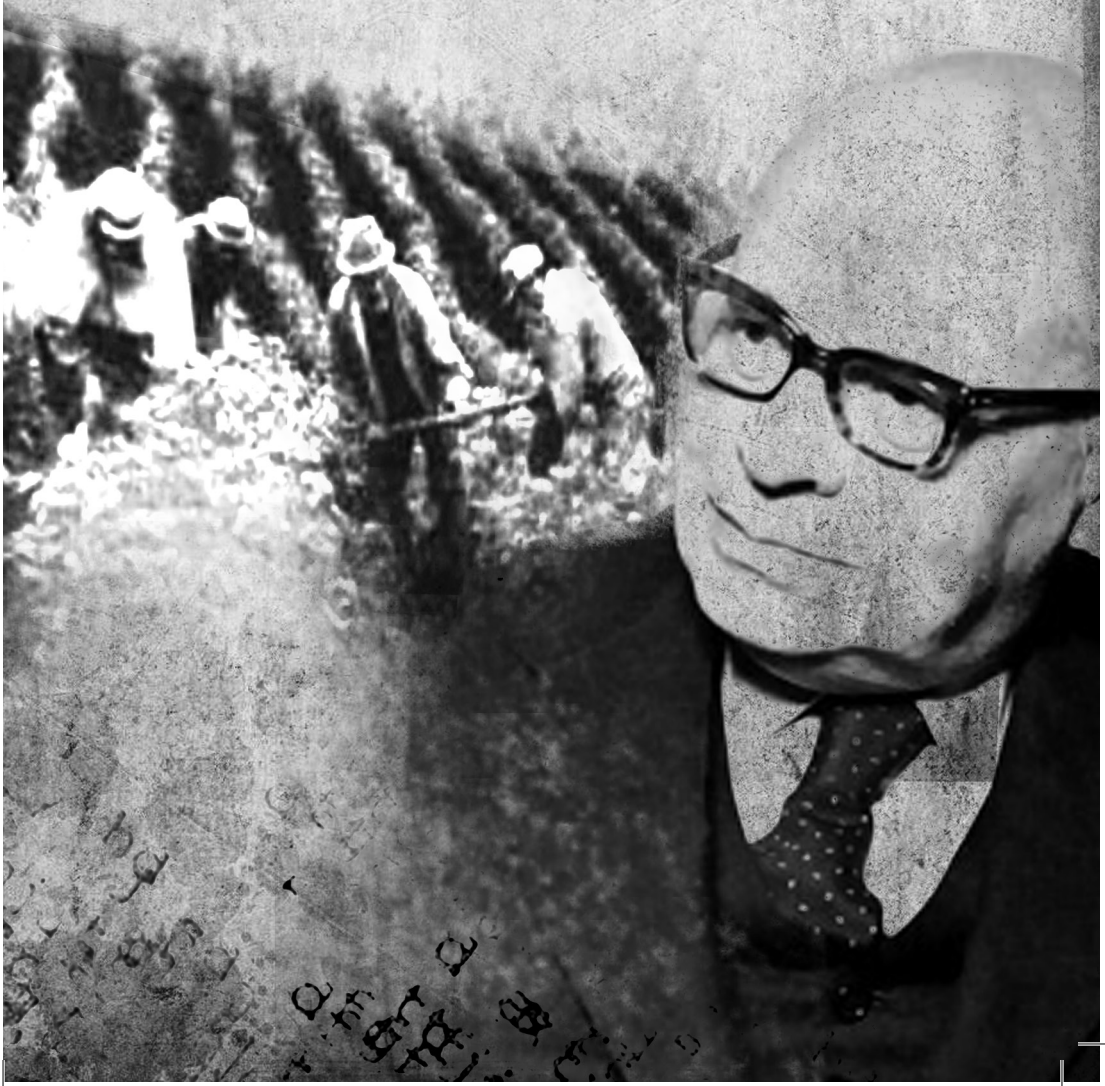
Mao y la revolución china fueron la inspiración del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se conformó en 1968 y reflejó el distanciamiento que en el escenario internacional protagonizaban Pekín y Moscú, que paradójicamente se libraba con sangre en diversos lugares del globo, entre otros, las calles y las montañas colombianas (Tirado, 2014).

Si bien la aparición de estos grupos significó una nueva orientación política y el establecimiento de objetivos muy dispares a los esgrimidos por los grupos de resistencia de los años anteriores, principalmente por su meta de la toma del poder por las armas, tiene idénticos escenarios y similares víctimas a las de las guerras pasadas: afecta a poblaciones marginales que habitan en zonas rurales y de difícil acceso, compuestas por campesinos pobres, afrodescendientes e indígenas.

Por cierto, la mayoría de los colombianos que habitan en las ciudades perciben el conflicto como una guerra que no los amenaza, del que se enteran por los reportes esporádicos de los medios y por la presencia de desplazados en las esquinas y los semáforos de las urbes. A muchos de esos habitantes de las ciudades les importa poco si se consigue un acuerdo de paz o se imponen las reformas que harían más justo y equitativo el discurrir de la nación, pues sus vidas no se alteran ni sus existencias se afectan por lo que ocurra en las montañas y las selvas del país. En tanto, quienes padecen la confrontación saben lo que significa la paz y cómo se constituye en una alternativa de estabilidad y vida, en contraposición con la que les toca sufrir, caracterizada por la destrucción, el desplazamiento y la muerte.

Al presidente Valencia los temas económicos le eran ajenos y sus preocupaciones se centraban en la bohemia y la caza; sin embargo, y con el apoyo de los Estados Unidos, dio vía libre a las acciones militares que supusieron una victoria temporal sobre las incipientes fuerzas insurgentes que se refugiaron en lugares aún más remotos. La temporal sensación de tranquilidad permitió que se hiciera llamar "el presidente de la paz" (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Lleras Restrepo y su concepción de un mercado interno



Las doctrinas de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal), la conformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), y los grupos regionales que se crearon a imagen del mercado Común Europeo, tuvieron enorme incidencia en el país, particularmente durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien se empeñó en sacar adelante reformas en los sectores económico y agrario.

El Gobierno tenía claro que el eje de la confrontación y la inconformidad pasaba por la tierra y que conflictos heredados de la dominación española y la traumática vida republicana se centraban en la propiedad agrícola; por eso, libró una desigual tarea por dar vida a una reforma agraria que hiciera productivo al campo, generara excedentes para la exportación, atendiera la seguridad alimentaria, proveyera las materias primas para la industria nacional y, sobre todo, permitiera establecer fórmulas de equidad y ofrecer oportunidades a grandes masas de marginados y desposeídos (Bonilla, 1966).

En razón a que la zona de Villarrica concentraba todos los elementos del conflicto por la tierra, el Gobierno fijó sus ojos en la región para adelantar los primeros trabajos del recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). La región seleccionada cubría los municipios tolimenses de Icononzo, Cunday y Villarrica, a los que posteriormente se añadió Melgar. Dada la penosa situación social y económica de un territorio que había sido arrasado en los momentos más crueles de la violencia, ya se había intentado un apoyo en crédito y servicios sociales a través de entidades de crédito estatales y allí, y sobre la marcha, se desarrolló el proyecto Tolima 1, el primero sobre reforma agraria. La labor allí fue extremadamente compleja no solo por la inexperiencia y la falta de infraestructura administrativa y técnica del Instituto sino por las precarias calidades de las tierras por intervenir, sus conflictos sociales y las muy deficientes condiciones de salud y educación de las familias objeto de la experiencia. Pronto se supo que, más que programas de desarrollo, lo que se necesitaba allí era un proyecto de promoción social integral, con crédito, salud, asistencia técnica, vivienda, infraestructura y educación. Sobre la marcha, se diseñó una nueva legislación, se construyeron vías,

se levantaron viviendas, se adjudicaron baldíos y se procedió a expropiar extensas haciendas abandonadas, y, lo más importante, se reconstruyó el tejido social y se recuperó para la población la confianza en el Estado y las instituciones. Lamentablemente, a causa de la reacción contra las medidas adoptadas por Lleras, con el tiempo todo vino a estancarse nuevamente y los conflictos que habían entrado en solución volvieron a brotar (Bonilla, 1966).

Con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y en la misma línea de la Ley de Tierras de López Pumarejo, se expidió la Ley Primera de 1968. Sus esfuerzos fueron derrotados, el Congreso destrozó las iniciativas y, como ocurrió con gran parte de las propuestas de la Revolución en Marcha en los años treinta, la reacción se impuso.

A la par, y con base en las teorías económicas en boga, el Gobierno se empeñó en promover la sustitución de importaciones y la construcción de una estructura productiva que, a más de atender las necesidades internas, se enfocara en las exportaciones mediante la creación y el fortalecimiento de organismos de crédito y asistencia técnica que, combinados con líneas blandas de financiación, exenciones tributarias y el establecimiento de barreras arancelarias a los productos terminados importados, permitieron el fortalecimiento y el desarrollo de una industria nacional.

El mundo había entrado a una sangrienta polarización entre dos bloques, liderados por Moscú y Washington, que se disputaban la hegemonía a través de conflictos regionales como los librados en el sudeste asiático y América Latina. El conflicto entre las potencias y los sistemas económicos se libraba en el espacio, en la tecnología, en los campos de arroz de Vietnam, en los cañaduzales de Nicaragua y en las breñas cafeteras de Colombia.

Dentro de los imperios se presentaban cismas e interpretaciones; Pekín se enfrentaba a Moscú y, a sesenta kilómetros de Florida, se conformaba la Revolución Cubana.

A ambos lados se creaban Estados militares-industriales que hacían de la guerra la razón de ser de su actividad y era imperativo el control sobre las materias primas y recursos para sustentar su crecimiento y desarrollo.

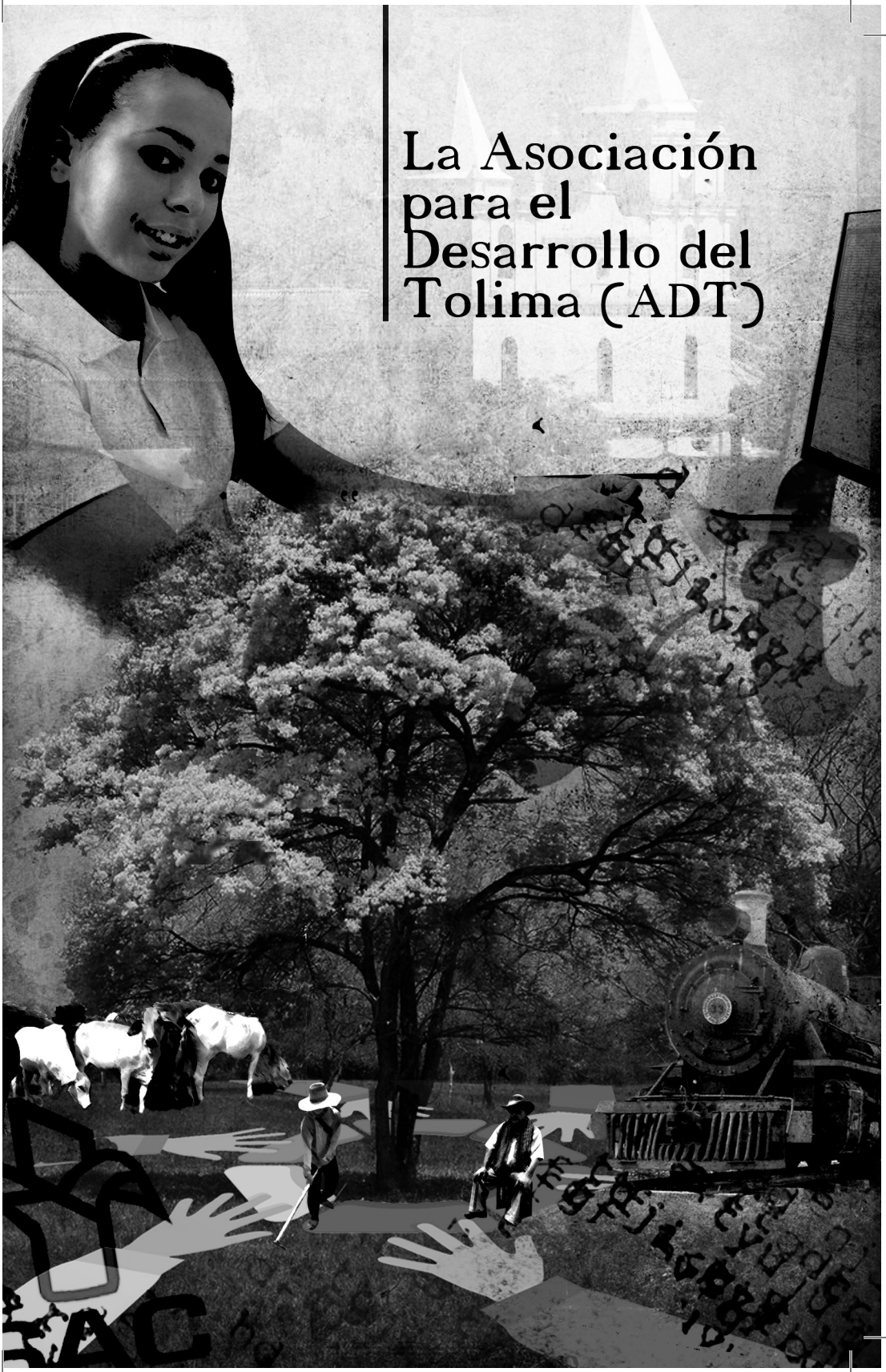
Las sangrientas confrontaciones y la barbarie que acompañaba esos conflictos chocaba a las nuevas generaciones nacidas tras el final de la

Segunda Guerra Mundial, lo que iba generando una contracultura que, en Occidente, enfrentó a los Gobiernos que pretendían mantener el orden anterior y la estructura colonial y, en la órbita soviética, produjo los cismas de Pekín, Yugoeslavia y Checoslovaquia que también se dirimieron en distintos escenarios pero, en la mayoría de los casos, con el imperio de la fuerza.

La polarización mundial y los choques culturales que se produjeron en el mundo tuvieron efectos globales y locales. En Estados Unidos los demócratas perdieron el poder y, el país, la Guerra de Vietnam; en Francia, las manifestaciones callejeras y estudiantiles dieron al traste con el gobierno de De Gaulle; en México las protestas de la plaza de Tlatelolco fueron ahogadas en sangre y en las universidades de todo el mundo se produjo una enorme reacción contra los sistemas económicos imperantes y los sistemas políticos en boga.

Colombia no fue la excepción; a la reacción de quienes se oponían a las reformas económicas y sociales se sumaron generalizadas protestas estudiantiles. El Frente Nacional y su excluyente alternación en el poder comenzaba a hacer agua; las guerrillas se habían ido fortaleciendo con los apoyos de Moscú y La Habana, y sectores políticos inconformes expresaban su rechazo en plazas y escenarios públicos.

La Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT)



Inspirados en la Sociedad Económica de Amigos del País, el 23 de abril de 1964, un grupo de empresarios de la región creó una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, que significó, desde sus orígenes, un elemento de la mayor trascendencia para el desarrollo y el progreso del departamento y sus habitantes. Acogidos a lo expresado en su nombre y con ejemplar generosidad, los asociados han actuado en tres líneas de acción principalmente: la planeación y la gestión de proyectos, la investigación cultural, ambiental y económica, y la veeduría cívica.

Son numerosas las iniciativas que en los diferentes campos de la actividad se han podido cristalizar gracias a los estudios liderados por la Asociación, al apoyo económico y administrativo que les ha brindado la entidad y sus asociados, a la gestión realizada ante organismos nacionales e internacionales y al nombre alcanzado en la comunidad, que le permite actuar como veedor y referencia en asuntos que le atañen al interés colectivo y a la protección del patrimonio público.

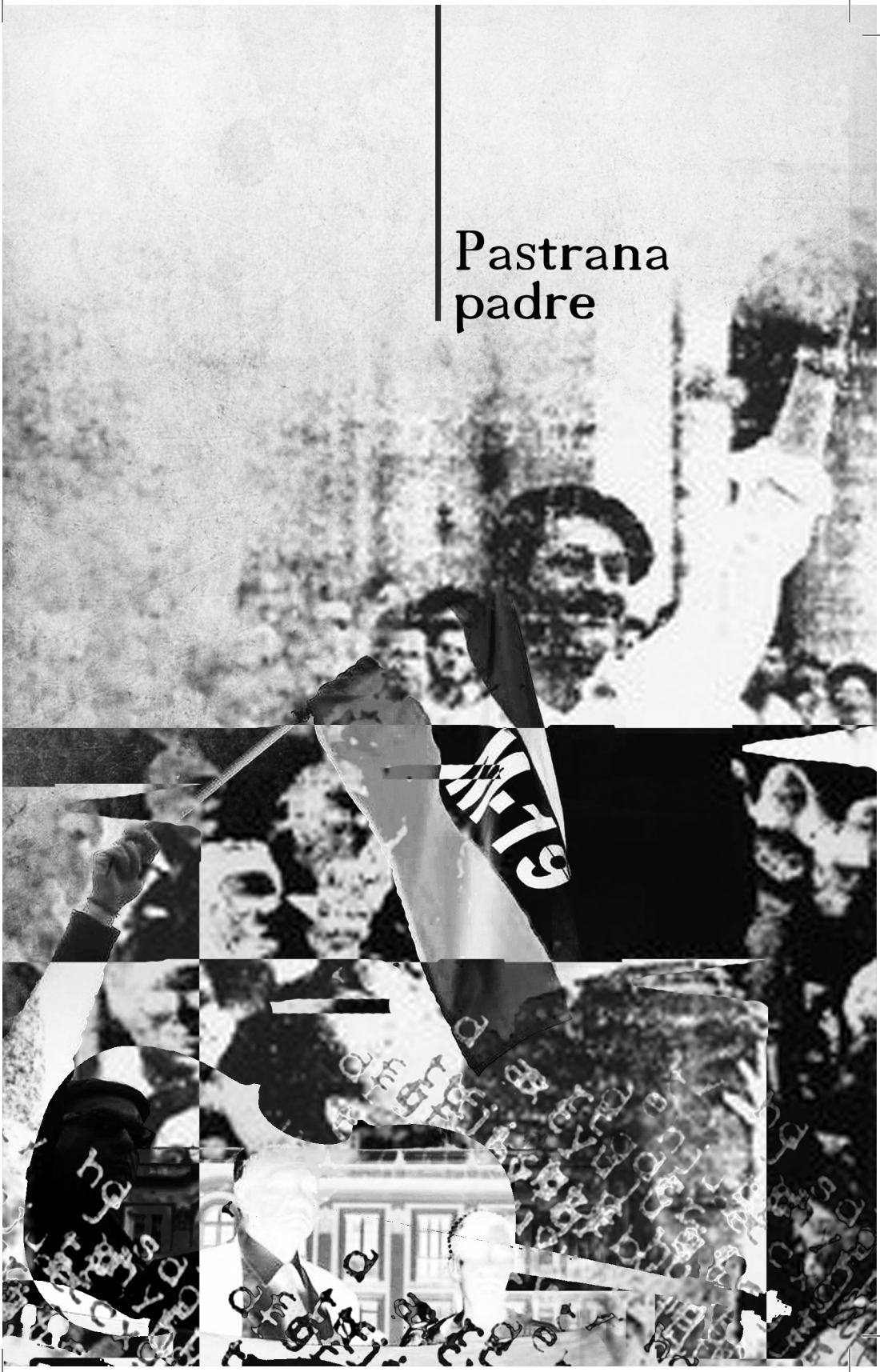
La reseña de sus más importantes logros habla por sí sola de la importancia que ha tenido para la región la ADT. En el primer decenio de actividad, coordinó los esfuerzos para la creación de la Corporación Financiera del Tolima, el Club de Ejecutivos, Carnes del Tolima –que dotó a Ibagué de un matadero moderno e higiénico en sustitución del obsoleto y deteriorado del municipio– y la Corporación Forestal. En el segundo decenio, sus departamentos Técnico y de Promoción estuvieron detrás del nacimiento de empresas como Frigorífico de Ibagué, Textiles Espinal, Concentrados Tuluní, Complejo Agroindustrial del Tolima (Catsa, S. A.), Programa de Desarrollo Piscícola del Tolima, Plaza de Ferias del Guamo, Complejo Turístico del Espinal, Jardín de los Abuelos, Aerolíneas Regionales de Integración (Aires), y de la Corporación para el Desarrollo Humano y la Corporación Universitaria de Ibagué –sobre estas dos últimas y su importancia se hará referencia más adelante–. El apoyo de la ADT también fue crucial para la creación de las seccionales de la Sociedad de Agricultores, la Cámara Colombiana de la Construcción y la Asociación Nacional de Industriales.

El tercer decenio estuvo marcado por la tragedia de Armero y por la actividad desarrollada para la reconstrucción de la región y la promoción empresarial derivada de la Ley 44 de 1987, que brindaba exenciones y facilidades a las empresas que se instalaran en las regiones cobijadas por la citada ley, entre ellas la Corporación Acción por el Tolima (Actuar Tolima), el Colegio San Bonifacio de las Lanzas, la Fábrica de Textiles del Tolima (Fatextol) y la Editorial Aguasclaras –quien publica el diario El Nuevo Día–. En el cuarto decenio se incluyó al Gasoducto del Tolima, Corcuencas, al Centro de Productividad del Tolima, al Fondo Regional de Garantías, al Observatorio del Empleo y a la Empresa Generadora de Energía (Egetsa).

Ya para el quinto decenio su acción se ha visto registrada en el desarrollo de un ejercicio de planeación regional con actores públicos y privados, llamado "Visión 2025", el proyecto de tecnología Tolima Vive Digital, la gestión interinstitucional en las obras de infraestructura más impactantes tanto en vías, navegación fluvial y ferrocarriles, como en la red aeroportuaria regional y, de la misma manera, en la promoción y vigilancia en la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras del triángulo del Tolima, Golondrinas y Hatico Tamarindo (Álvarez, 2005).

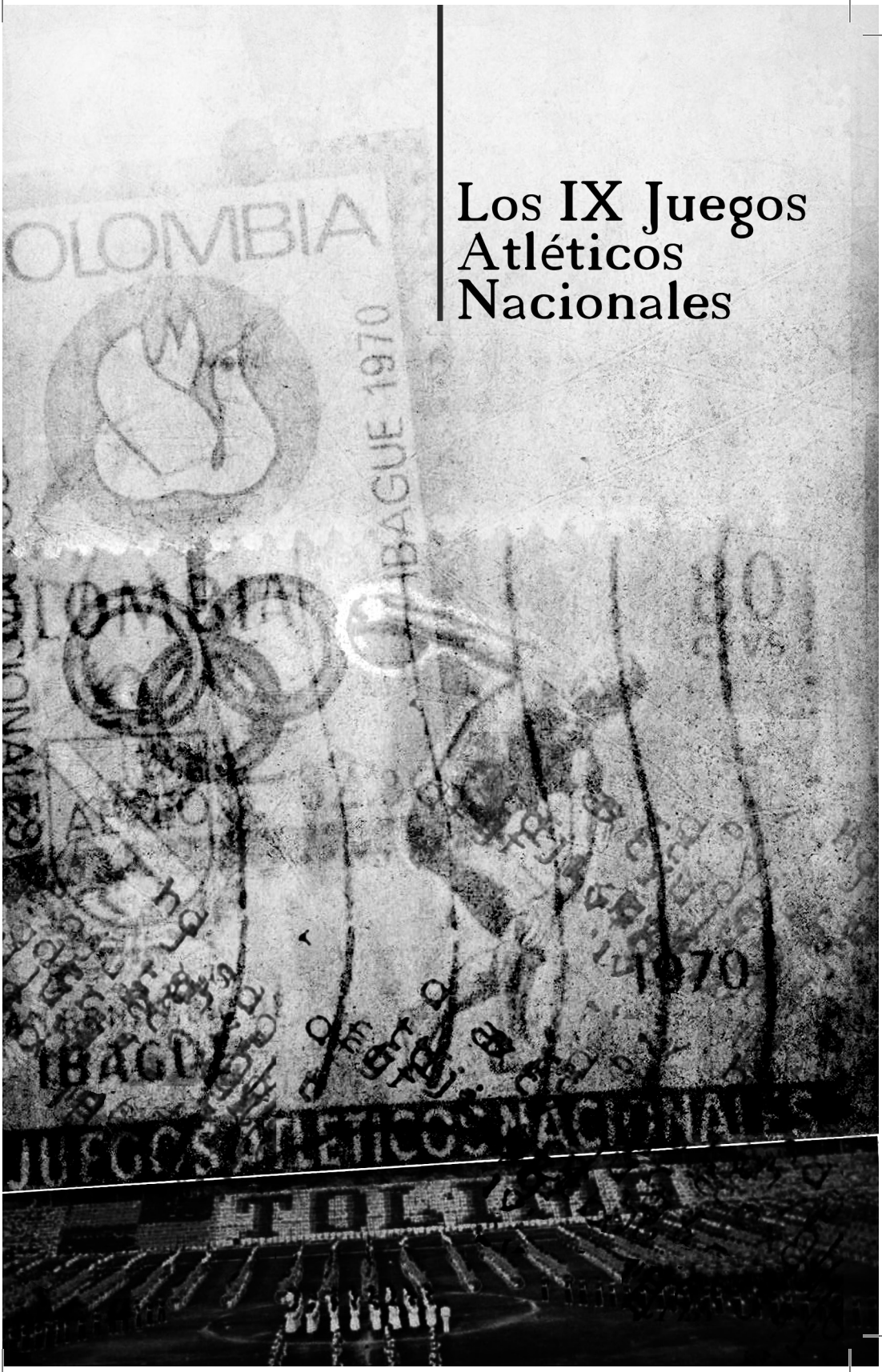
Por supuesto, algunos de los proyectos mencionados han desaparecido ante avatares comerciales y económicos, se han fusionado con otros o han sido absorbidos por empresas de mayor capacidad. También debe recalcarse que el papel de la ADT ha sido siempre generoso, solidario y sin ínfulas de protagonismo, lo que ha permitido el buen suceso de las iniciativas y su proyección.

Pastrana padre



Alrededor del general Rojas Pinilla y su hija María Eugenia se había conformado una amalgama populista de indefinida tendencia ideológica que se llamó Alianza Nacional Popular (Anapo), que vino a retar a la coalición de Gobierno que llegó a elecciones con la débil candidatura de Misael Pastrana Borrero. Los escrutinios, siempre controvertidos, le dieron la victoria al candidato conservador por lo que se presentaron protestas callejeras generalizadas y, con el tiempo y como reacción al denunciado fraude, se conformó el Movimiento 19 de abril (M-19), de corte nacionalista, bolivariano y populista, en el que participaron antiguos cuadros de las FARC, desencantados con los enfrentamientos entre facciones guerrilleras y las sangrientas purgas que se dieron dentro de los grupos armados. Desde sus inicios, el M-19 recibió apoyo, financiación y dotación del régimen cubano.

Los IX Juegos Atléticos Nacionales



La dinámica que impregnó al Tolima a finales de los años cincuenta y el inicio de los sesenta del siglo XX, que le habían permitido ir saliendo poco a poco de la penosa situación en que lo sumió la Violencia, se iba perdiendo y comenzaban a reaparecer preocupantes nubarrones en el horizonte.

La actividad cívica creada alrededor de campañas como la Gran Misión, el Festival Folclórico y las acciones de los grupos solidarios, que se han mencionado, iban perdiendo vapor en medio de las dificultades que habían hecho que la capital del Tolima se hubiera hinchado, que no crecido, por el influjo de los desplazados que habían llegado a la ciudad a preservar lo único que les quedaba: su vida –la de ellos y la de sus familias–.

Por cierto, la ciudad no contaba con los recursos ni mucho menos con administraciones competentes para manejar tan críticas circunstancias. Había, eso sí, una gran ventaja que, lamentablemente, nunca se utilizó apropiadamente y fue despilfarrada, que era la existencia de grandes extensiones de ejidos que de haberse empleado eficientemente habrían paliado buena parte de las necesidades de una ciudad asediada por las penurias.

Por la época y con la intención de colaborar en tan urgentes situaciones, las autoridades deportivas nacionales habían designado a Ibagué como la sede de los IX Juegos Atléticos Nacionales. Las limitaciones anotadas, que afectaban a las sucesivas administraciones, habían obligado a la postergación de las justas en varias oportunidades y se corría el peligro de que se retirara el apoyo a Ibagué y se le asignara la responsabilidad a otras ciudades más pujantes, con su comporte de vergüenza por la pérdida de la oportunidad.

De nuevo surgió el espíritu cívico y las fuerzas vivas de la región, dejando de lado diferencias circunstanciales y discusiones estériles, se propusieron asumir el compromiso. Se creó un comité polifacético y a los diferentes sectores se les asignaron responsabilidades; de la misma forma,

se nombró un director y una junta encargada de gestionar las múltiples tareas y conseguir los recursos que entrañaba la organización.

El sentimiento colectivo se reavivó, los jóvenes se ofrecieron voluntariamente para prepararse como guías turísticos o bastoneras para los diferentes desfiles, la inauguración, la clausura y las premiaciones. La ciudadanía en general se ofreció de forma voluntaria para participar activamente en los ejercicios masivos que habrían de enlucir la inauguración y la clausura, a cargo de quien había desempeñado similar función en los Juegos Olímpicos de México 68.

La administración municipal construyó una serie de avenidas y vías para facilitar la circulación. El Instituto de Crédito Territorial (ICT), desarrolló un proyecto habitacional moderno que habría de servir de alojamiento a las diferentes delegaciones departamentales.

La ciudad quedó dotada con una envidiable infraestructura deportiva, con escenarios como el velódromo, las piscinas olímpicas, el Coliseo Cubierto, el diamante de béisbol y el Parque Deportivo, un complejo con canchas, piscinas y escenarios que, luego de los Juegos, se convertiría en lugar de recreación y práctica deportiva para miles de ciudadanos. A la par, las distintas ligas realizaron un minucioso trabajo de preparación y selección de los deportistas que habrían de representar al departamento en las diferentes disciplinas, lo que permitió que este obtuviera una posición en el tablero general de desempeño que nunca había ocupado ni ha vuelto a ocupar.

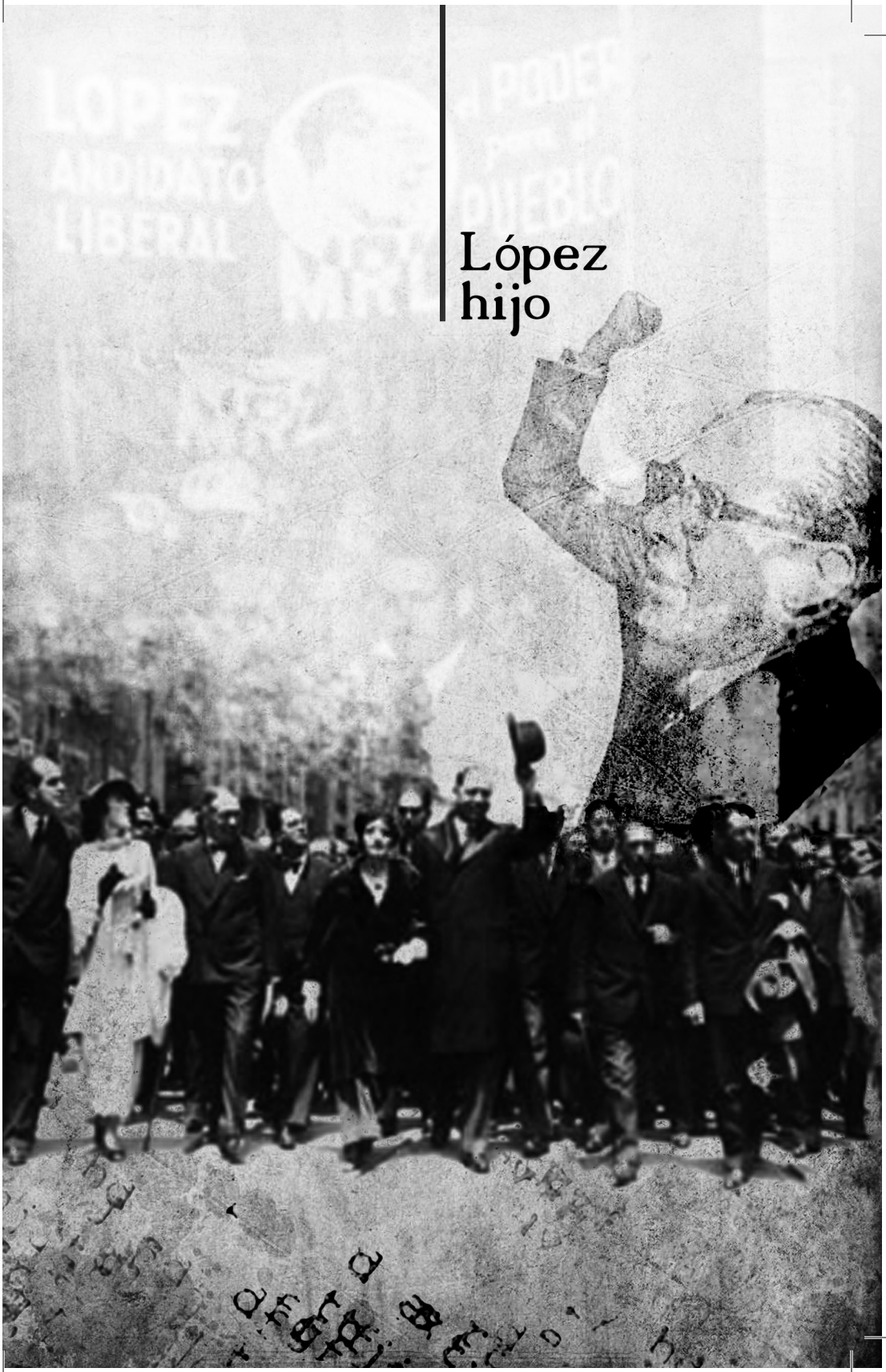
Los IX Juegos se convirtieron en un hito no superado y permitieron la generación de un nuevo tejido social que ayudó a reparar heridas del pasado, y, a la par, el factor multiplicador de las inversiones realizadas se proyectó a la comunidad con mensajes de optimismo y orgullo.

Nadie estaba en capacidad de predecir que, unos pocos años después, una dañina hegemonía política habría de causar toda suerte de estropicios, corromper a varias generaciones y menoscabar al departamento en diferentes escenarios, sectores y actividades, cuyo efecto solo podría equipararse a lo ocurrido durante la Violencia.

En su proyecto de desarrollo, Pastrana se basó de nuevo en las teorías de Currie para formular un plan que denominó "las cuatro estrategias"; en particular, la que tenía que ver con la creación de ciudades dentro de las ciudades, imprimió enorme impulso a la construcción al establecer un sistema de financiación de origen brasileño que llevó el nombre de

"UPAC" –unidad de poder adquisitivo constante– que entrañaría, con el tiempo, enormes presiones inflacionarias.

En el gobierno de Pastrana se fueron abandonando gran parte de las reformas establecidas en el periodo de Lleras; en particular, se produjo el "Pacto de Chicoral" en 1972, llamado así por la población tolimense a la que acudieron los más connotados y poderosos terratenientes que llevaron al Gobierno a revocar todos los avances logrados en la administración anterior. Los grupos insurgentes siguieron tomando fuerza con apoyos extranjeros (Arrubla *et al.* 1978).



López hijo

Con Pastrana terminó la alternación que había sido piedra angular del Frente Nacional y el Partido Liberal triunfó en las elecciones presidenciales con la candidatura de Alfonso López Michelsen, quien había encabezado una escisión de su partido al formar el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que constituyó con el ala izquierda del liberalismo y los más destacados ideológicamente que, por cierto, se mostraron muy afines a los procesos revolucionarios latinoamericanos y decididos antagonistas de las fórmulas excluyentes del Frente Nacional. Pocos recordaban las actuaciones de López que le costaron el poder al partido liberal en 1946 y la llegada de Ospina y Gómez a la presidencia.

El país vivió una fugaz bonanza económica derivada de los altos precios del café en los mercados internacionales; pero, al mismo tiempo, las protestas populares fueron tomando inusitada fuerza hasta que, en septiembre de 1977, se produjo un extendido paro cívico que fue sojuzgado por la fuerza, con cincuenta muertos de por medio, y hubo saqueos y enfrentamientos generalizados con la fuerza pública.

Ya se mencionó que el Frente Nacional se había agotado en sus posibilidades y se comenzaba a percibir uno de los más funestos resultados de la experiencia: la aparición de organizaciones políticas especializadas en el saqueo de los recursos y usufructuarios del poder casi omnímodo que les proveía la exclusión de opciones ajenas al bipartidismo.

Algunas de las mencionadas organizaciones disfrazaban su actuar depredador con un discurso populista, con tintes socialistas, que engañó a partidos y entidades de izquierda al punto de plegarlos a sus actividades y expoliaciones. El Gobierno nacional se prestó a tales subterfugios e incluso abrió espacio en el gabinete a los más caracterizados protagonistas del despojo y la rapiña.

Por esta época, comenzaron a aparecer en las regiones sujetos con cuantiosas e inexplicables fortunas que, desde el principio, buscaron aliarse con los más señalados jefes políticos en sociedades de mutuo beneficio, en los que unos proporcionaban el poder político y los otros la abundancia económica.

Los primeros fueron los llamados "esmeralderos", que se apropiaron a sangre y fuego de las zonas mineras en donde se encontraban las gemas, así como de la comercialización de las mismas; de entrada, establecieron un público contubernio con los grupos conservadores de la región y conformaron ejércitos privados para su defensa, que luego sirvieron para la apropiación por la fuerza de enormes extensiones de terreno en zonas ganaderas y, más tarde, establecieron alianzas con otras organizaciones ilegales; de la misma manera, implantaron su particular estética en amplios sectores de la población. Sus disputas las trasladaron a ciudades como Bogotá en donde se repitieron las violentas *vendettas* que habían escenificado en Muzo, Coscuez y Pauna.

Casi simultáneamente se produjo la llamada "bonanza marimbera" en regiones del Magdalena, Bolívar y La Guajira. Colombia se convirtió en la referencia mundial de abastecimiento y calidad de la hierba[9]. La exportación del alucinógeno enriqueció a conocidas familias de Santa Marta, que aprovecharon la prohibición que existía para obtener exorbitantes precios y fabulosas ganancias que luego emplearon en la compra, por la razón o la fuerza, de emporios ganaderos, frutícolas y hasta equipos de fútbol profesional. De nuevo, las fortunas sirvieron para consolidar empresas electorales que se adueñaron de los Gobiernos locales, departamentales y las representaciones para el Congreso de Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar.

Nadie podía presagiar lo que vendría después y el efecto que tendría en todos los aspectos de la vida nacional, pues, a similitud con lo ocurrido en el Asia en la confrontación de la Guerra Fría, el negocio de la droga y sus incalculables utilidades se convirtió en elemento esencial para la financiación de la guerra, en un incontenible corruptor de la actividad económica y política, y en destructor de los valores de la sociedad (Tovar, 1999).

El mercado de la marihuana se fue diversificando y del sur provino un flujo de cocaína producida en Bolivia y Perú que se exportaba a los siempre ávidos mercados de Europa y de Estados Unidos. La visión empresarial de los narcotraficantes y los severos controles establecidos en Perú y Bolivia llevaron a que los cultivos de la hoja de coca se trasladaran a Colombia, en las extensas zonas de frontera agrícola, e inmediatamente se estructuró un sistema de laboratorios para procesar el alcaloide, lo que condujo a la creación de un elaborado sistema de transporte, distribución

9 Marihuana (Cannabis sativa).

y comercialización del estupefaciente, por medio de un eficiente sistema de integración vertical de la industria que, en pocos años, conformó una poderosa y multimillonaria internacional del crimen que, con sus numerosos recursos, se infiltró en los diferentes sectores e instituciones de la sociedad.

Como había ocurrido en Vietnam, la droga también se fue convirtiendo en el combustible necesario para la expansión del conflicto interno, ya que las inmensas utilidades del tráfico proporcionaban los recursos para las armas, las municiones, los vehículos, los equipos, las embarcaciones y los precursores y químicos, a más de las obscenas extensiones de terreno –que se adquirían también por amenazas–, propiedades estratégicas para la exportación de la droga y la importación de las armas, los químicos y las mercancías con las que se lavaba el dinero y aumentaban las ganancias. Por cierto, de allí surgían los ganados, los equinos y los extravagantes y costosos gustos que vulneraban fácilmente las reservas morales y los escudos éticos de una sociedad, de suyo permeada por la liviandad con la que se manejaban los recursos y los bienes públicos (Tovar, 1999).

En el Tolima se consolidaba una dañina hegemonía cuyos efectos todavía se sienten en la administración pública. Prohijados por un connotado demagogo , que luego se alió con todos los grandes capos del narcotráfico, una pandilla de ineptos y deshonestos entró a saco contra los recursos estatales, tanto del orden nacional como departamental y local, de modo que, en los casos en que se les brindó figuración nacional, su desprestigio rebasó el ámbito local y regional, para adquirir una dimensión nacional. Por cuenta del poder electoral, conseguido sobre la base del despilfarro de los recursos, esa hegemonía se prolongó por cerca de dos decenios hasta que colapsó por cuenta de sus escandalosas relaciones con los criminales y el saqueo del erario.

Turbay y su cuestionada gestión

El periodo de Julio César Turbay Ayala marcó la consolidación de tan censurable estado de cosas: primero, por la aparición de castas políticas sin escrúpulos que recibían sin miramientos los recursos de la corrupción y la droga, y, segundo, porque las guerrillas comenzaron a expandir sus actividades sobre la base de recursos provenientes del secuestro, la extorsión y las contribuciones obligadas de los cultivadores de la coca y los comercializadores de estupefacientes.

Las FARC, el ELN y el EPL, aunque fortalecidos, se situaban en zonas apartadas mientras que el M-19 desplegaba una creativa estrategia urbana plena de ingeniosos ardides y golpes publicitarios que le fueron proporcionando simpatías en amplios sectores de la sociedad. El Gobierno, envuelto en su propia incapacidad, maniatado por quienes más que aliados políticos eran verdaderos cómplices en el pillaje, confirió plena autonomía al Ejército para acabar con la subversión, sus simpatizantes y la oposición política, con instrumentos que se saltaban todas las barreras humanitarias, el ordenamiento legal y los más elementales derechos. Bajo el nombre de "Estatuto de Seguridad", se desaparecía, se torturaba, se asesinaba, se sometía a los civiles a la justicia militar y se perseguía hasta el exilio a lo más destacado de las artes, las letras y la intelectualidad colombiana, a más de los líderes de los más disímiles sectores.

Las fuerzas guerrilleras no fueron ajenas a este estado de descomposición; la abominable práctica del secuestro se convirtió en indispensable fuente de financiación, así como la extorsión indiscriminada que afectaba hasta las más sencillas actividades empresariales, a lo que vino a sumarse el cobro a los distintos eslabones del tráfico de narcóticos, en contraprestación a una supuesta protección de laboratorios, sembrados y rutas.

El mismo M-19, que se había caracterizado por sus ingeniosas acciones, pronto saltó la barrera hacia formas más violentas, como el secuestro y el macabro asesinato de sus retenidos, la cruenta toma de la Embajada de República Dominicana y el uso de minas antipersonas (Lara, 1986).

En tanto, el dinero del narcotráfico infiltraba todos los resquicios de la sociedad colombiana. Prácticamente no quedó institución, región, actividad o sector donde el dinero corruptor del narcotráfico no se enseñoreara e impusiera sus condiciones; la infiltración se dio a ojos vistas y abiertamente, con muy pocos opositores o rechazo colectivo: en el Congreso se veía a Pablo Escobar codeándose con parlamentarios como Alberto Santofimio –que había sido Ministro de Justicia de López–, Jairo Ortega y Ernesto Lucena. El mismo Escobar patrocinaba los espacios en la televisión de su amante Virginia Vallejo y apoyaba económicamente a la programadora en la que aparecía la presentadora; de la misma manera, era propietario, en Medellín, de la corresponsalía del noticiero de Arturo Abella, condición que en Armenia tenía Carlos Lehder y, en Ibagué, Isabel Cristina Melo, esposa de un lugarteniente de Lehder. En el fútbol, Escobar era dueño del Atlético Nacional, Gonzalo Rodríguez de Millonarios, los Rodríguez Orejuela del América, los Moncada del Pereira, César Villegas de Santa Fe y Cruz y Caro del Deportes Tolima. Los Rodríguez tenían una cadena de droguerías y una farmacéutica que manejaba sustancias controladas, una cadena radial y una financiera. Rodríguez, "el Mexicano", era dueño de una emisora en Ibagué, fincas en el Tolima, Cundinamarca, Córdoba, Sucre y Boyacá, tenía acciones en las minas esmeraldíferas y en el club El Nogal, a más de un enorme ejército privado. Carlos Lehder era dueño de hoteles, islas en el Caribe, un periódico, un movimiento político, además de tener muy buenas migas con el obispo de Pereira. Los narcotraficantes eran propietarios de las más finas dehesas, los más costosos equinos, arrasaban en las ferias agropecuarias, financiaban equipos de ciclismo, contrataban a los más famosos cantantes y eran mecenas del mundo de los toros. A la par, se adueñaron de incalculables extensiones de terreno en diferentes regiones y alteraron el precio de la propiedad raíz (Castillo 1987).

En ningún otro sector del país hubo efectos más nocivos por la laxitud y liviandad del gobierno de Turbay y, especialmente, de sus organismos de control, que en el sector financiero. Al amparo y con el contubernio de la Superintendencia Bancaria de la época, nacieron, crecieron y se solidificaron grupos de saqueadores, especuladores y mercenarios que, con maniobras ilegales, pusieron a su servicio e intereses los dineros del público, en peligro el sistema bancario y causaron daños irreparables a industrias emblemáticas como la textil.

Un breve repaso de lo ocurrido muestra también que la ley tuvo dispar actitud con los protagonistas del descalabro, pues mientras unos

fueron a la cárcel y sus empresas fueron intervenidas, a otros se les premió con posiciones en la diplomacia o se les admitió la utilización de las maniobras torticeras para solidificar sus imperios.

Terminaba el gobierno de Turbay con una crisis en el sistema financiero que amenazaba hacer colapsar a la banca colombiana, pues generó una aguda pérdida de confianza.

El Grupo Grancolombiano

Su gestor fue el banquero Jaime Michelsen Uribe quien, a través de los fondos Grancolombiano y Bolivariano, se fue apoderando de acciones de las más emblemáticas empresas del país, muchas de ellas situadas en Antioquia y de propiedad del que fuera apodado "Sindicato Antioqueño", hoy conocido como Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), del que formaban parte Nacional de Chocolates, Noel y Cine Colombia; las mismas maniobras le permitieron adquirir la mayoría de las acciones del Banco de Colombia, con las que configuró el grupo financiero más agresivo y poderoso del país. Los recursos utilizados provenían de préstamos entrecruzados provistos por las empresas del grupo y derivados del uso abusivo de los ahorros del público, lo que le permitía un amplio margen de maniobra para marcar artificialmente el precio de las acciones y así apoderarse del control de las mismas.

La Financiera Furatena, el Banco Nacional y el Grupo Colombia

Tras este grupo se encontraba un oscuro comerciante antioqueño, con negocios en la población de Caucasia, de nombre Félix Correa Amaya, quien creó una pequeña compañía de financiamiento, agio en sus inicios, a la que llamó Furatena. Era el comienzo del auge de las fortunas de narcotraficantes como Pablo Escobar, los Ochoa Vásquez y los Rodríguez Orejuela, quienes proporcionaron parte de los recursos que Correa empleó en consolidar su empresa. Tiempo después, Correa adquirió un mediano conglomerado de empresas financieras y de seguros, de controvertida reputación, que era propiedad del elegante caballero bogotano Ignacio Umaña de Brigard; la estructura se denominaba "Grupo Colombia"; de ella formaba parte el Banco Nacional, una entidad que creció como espuma mediante la oferta de intereses exorbitantes para los depósitos. Allí entraron en acción cuatro controvertidos banqueros a los que se les asignó el apelativo de los "cuatro Jinetes del Apocalipsis":

Uldarico Robles Vivius, Octavio Becerra Vélez, Eduardo Uribe Uribe y José Lizardo Muñoz Turbay. El cuarteto había iniciado su accidentado historial en el Banco de Occidente, en ese entonces un pequeño banco de Cali, que bajo las directrices y artimañas del equipo mencionado se dedicó a captar dinero de entidades oficiales que se caracterizaban por tener grandes volúmenes de recursos ociosos en las cuentas, sin requerir remuneración alguna, ni mucho menos créditos para su funcionamiento. El tiempo de hibernación de los recursos oficiales se acentuaba mediante generosos incentivos, regalos y créditos a tasas irrisorias para quienes eran responsables de las cuentas. La fama de los cuatro creció y atrajo la atención de Jaime Mosquera Castro, quien mediante extrañas maniobras y oscuros dineros se había adueñado del venerable Banco del Estado, orgullo de Popayán, pero de insignificante tamaño; de nuevo, los métodos de los jinetes permitieron la expansión acelerada del banco. Muy pronto hubo desavenencias y los cuatro se trastearon al Banco Nacional, de Félix Correa, donde repitieron la faena, pero combinándola con dineros de la bonanza de los carteles. La curva ascendente terminó cuando los cuatro recalaron en la recién inaugurada subsidiaria del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), de origen árabe, y decididamente dedicada a la piratería financiera y al lavado de dinero, que colapsó por la intervención de entidades internacionales de control en diversos países.

En 1981, el Banco Nacional permaneció más de un año en posición negativa de encaje sin que moviera a la Superintendencia a actuar; la situación llegó al extremo de negarle el Emisor el redescuento y el acceso a la cámara de compensación. De la nada, apareció una voluminosa capitalización que hizo encajar al banco hasta cuando se descubrió que esta había sido ficticia y meramente contable; el establecimiento volvió a ser sancionado, se produjo una corrida de depositantes y el banco colapsó (Castillo, 1987).

El Banco del Estado

De esta institución se ha referido casi todo; siguió el mismo sendero pues fue notorio el protagonismo de un filibustero internacional con operaciones bancarias en diversos países, de nombre Jorge Enrique Castro, cuyas maniobras, junto con las de Mosquera, llevaron a la intervención y la liquidación del centenario banco.

El Banco Cafetero

Una entidad tan respetada como el Banco Cafetero tampoco escapó a las maniobras y maromas. A través del Continental National Bank de Miami y con el apoyo del Banco Cafetero de Panamá, los Rodríguez Orejuela transfirieron los dinero que les permitieron adueñarse del Banco de los Trabajadores en Cali, una entidad que contó con la asesoría y la vinculación de muy importantes políticos y funcionarios y que tuvo similar destino al de los otros mencionados.

De otro lado, el Banco Cafetero se vio involucrado en transferencias de recursos del IOR[10] o Banco Vaticano, manejado por Monseñor Marcinkus, que provenían de una logia llamada "Propaganda Due", con ramificaciones mafiosas, manipulada por Roberto Calvi, quien estuvo a cargo del Banco Ambrosiano y apareció colgado de un puente en Londres en 1982. Los dineros pasaban del Banco Ambrosiano al Banco Cafetero de Panamá y de allí al Ambrosiano de Lima. Por el hecho hubo un gran debate nacional del cual da cuenta la edición del diario El Tiempo del 10 de noviembre de 1983 ("Hace 25 años", El Tiempo, 2009).

El Banco de Bogotá

Igualmente irregular fue la puja por el control del Banco de Bogotá entre la organización de Luis Carlos Sarmiento, propietaria del Banco de Occidente, y el Grupo de Seguros Bolívar, en el que se señaló a los contendientes de haber utilizado fórmulas nada ortodoxas para obtener los recursos para la disputa, que se saldó con el control del Bogotá por parte de Sarmiento.

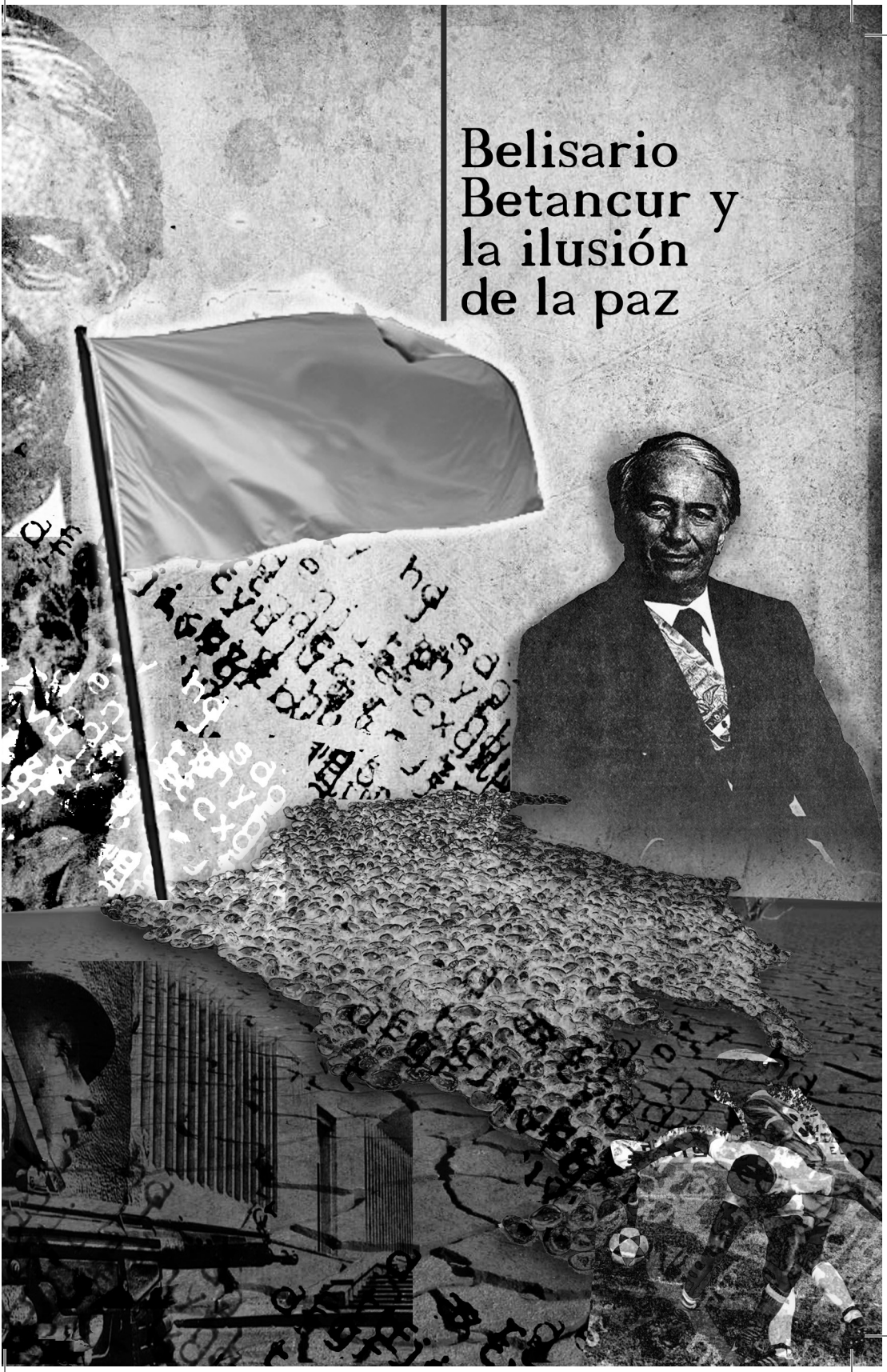
La crisis explotó a mediados de 1982 en los estertores del gobierno de Turbay, pero los correctivos, la nueva regulación y las sanciones se produjeron solo hasta el gobierno de Betancur, entre 1982 y 1983, aunque el grueso de las penas vino a concretarse en este último año.

Fueron intervenidos los bancos de Colombia, Nacional, del Estado, de los Trabajadores y BCCI[11], a más de todos los satélites financieros de tales instituciones. Acabaron condenados a prisión Michelsen, Correa, los "cuatro del Apocalipsis", Mosquera, Castro y nueve más. En tanto, Umaña fue designado embajador en México.

10 Por sus iniciales en italiano: Istituto per le Opere di Religione.
11 Banco Internacional de Crédito y Comercio.

La banca colombiana terminó seriamente cuestionada, el contribuyente hubo de poner de su parte para paliar la crisis y al superintendente nada le ocurrió.

Belisario Betancur y la ilusión de la paz



El repudiable estado de cosas y el desprecio evidente que se practicaba por la Constitución y las leyes, llevaron a que el Partido Liberal, de nuevo dividido, perdiera el poder ante el conservador Belisario Betancur Cuartas, un intelectual de origen humilde, que predicaba la conciliación y el final de la confrontación. El país recibió esperanzado su propuesta de paz y muy pronto se iniciaron los diálogos con los diferentes grupos guerrilleros. Betancur conformó una comisión liderada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, de la que formaba parte Otto Morales Benítez, quien aceleró los diálogos y consiguió que los más importantes jefes guerrilleros se congregaran al sur del Huila con el propósito de determinar las condiciones de un armisticio. Una fracción de las Fuerzas Armadas, enemiga de las conversaciones, pretendió dar un golpe de mano y urdió un ataque aéreo sorpresa a la reunión con la intención de exterminar a la dirigencia guerrillera. Betancur se enteró de tan desequilibradas intenciones, procedió a viajar al Huila y logró abortar el atentado. La valiente acción de Betancur hirió profundamente a los conspiradores, no fue olvidada y, como se verá más adelante, ellos y sus aliados le pasaron una abrumadora cuenta de cobro.

Lleras, enterado del complot, renunció inmediatamente a la comisión y Morales Benítez dio unas declaraciones enigmáticas en las que habló del fracaso de las conversaciones por cuenta de "enemigos agazapados de la paz" (Santos, 1991, Capítulo C, 2ª parte, "La contra-amnistía..."). Los intentos de lograr la paz saltaron en mil pedazos y la confianza de los insurgentes en la palabra gubernamental se perdió por lo menos por un lustro[12].

Los intentos de negociación con los insurgentes durante el gobierno de Betancur se vieron menoscabados por la fría respuesta de los gremios económicos y la tibia posición de los altos jerarcas religiosos, a más de las aspiraciones de los grupos guerrilleros de aprovechar la oportunidad para expandir su dominio en el territorio y solidificar sus arcas mediante el aumento del secuestro y la extorsión. De hecho, los gremios concebían

12 Conversaciones con César Augusto Alvarado Gaitán.

un acuerdo reducido al desarme y la desmovilización de la guerrilla sin tener para nada en cuenta las necesarias reformas sociales y económicas que se requerían para eliminar las desigualdades y la injusticia.

Los altos mandos militares pensaban que todo obedecía a una proclive intención soterrada de las fuerzas de izquierda para limitar la acción del ejército y poder expandir su influencia en más extensas regiones.

Al final del periodo, Betancur debió enfrentar dos de los más descomunales desastres que han afectado al país en los últimos decenios; el primero, el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá por un comando del M-19, que tenía el delirante propósito de hacerle un juicio público al presidente. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían pormenorizada información sobre lo que se avecinaba y organizaron una celada al grupo guerrillero que les había hecho quedar en ridículo con el robo de armas perpetrado en las bodegas de la guarnición militar situada en el Cantón Norte en Bogotá, a lo que se unía el ánimo de retaliación contra el presidente por haber impedido la acción violenta contra la comandancia guerrillera. Tan pronto se produjo la toma del Palacio, el país presenció atónito la acción arrasadora llevada a cabo para recuperar la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en la que perecieron más de un centenar de personas: la cúpula de la Corte, el Consejo y numerosos auxiliares de los magistrados, la totalidad del comando guerrillero, varios ciudadanos que por una razón u otra se encontraban en el lugar, a la par de numerosos uniformados y personal del DAS. No se volvió a saber de al menos una docena de personas, quienes habían salido con vida del palacio, entre las que se contaban magistrados, funcionarios judiciales, empleados de la cafetería y guerrilleros, en sucesos que más de un cuarto de siglo después siguen sin esclarecer, no obstante últimamente se ha logrado dar con los restos de un par de los desaparecidos. Durante varias horas, Betancur y su gabinete permanecieron aislados e impotentes ante los urgentes llamados del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, para evitar la retoma a sangre y fuego, y permitir la intercesión de la Cruz Roja Internacional. Sobre tan terribles episodios ha habido toda suerte de versiones y declaraciones de los protagonistas. Algunos de los militares participantes han sido condenados a largas penas de prisión, muchos ciudadanos han sido llamados a declarar y el presidente Betancur ha escrito una versión de los hechos que solo habrá de revelarse a su muerte (Behar, 1985).

Una semana después, tras haberse desoído las advertencias de Ingeominas y otros expertos e historiadores ante las señales de actividad

que se advertían en el volcán Nevado del Ruiz, se produjo una erupción que se convirtió en lahar, al derretirse las nieves de la cúspide, que arrasó con el municipio tolimense de Armero, una próspera población que se había convertido en el eje comercial, agrícola y ganadero del norte del Tolima, en donde coexistían dos hospitales, la granja de la Universidad del Tolima, el Museo Antropológico, y el Serpentario, donde se producía el suero antiofídico para atender las necesidades del país, y haciendas en las que se desarrollaba lo más avanzado en genética vacuna. En el desastre murieron cerca de veinticinco mil personas y se destruyó lo que se había logrado recuperar tras la Violencia, entre lo que se destacaban modernas y productivas explotaciones agropecuarias. Decenas de miles fueron desplazados, así como miles más llegaron ante las ofertas gubernamentales e internacionales de ayuda y solidaridad.

Un episodio poco conocido de lo ocurrido en esos días muestra el caos que se vivió y las extrañas determinaciones tomadas[13]. Un día después de ocurrido el desastre, las fuerzas vivas del departamento tomaron por su cuenta tareas esenciales como el suministro de alimentación para los sobrevivientes, para cuyo efecto se organizaron brigadas de voluntarios que formaban cadenas de elaboración de comidas de fácil confección, traslado y distribución; de la misma manera, y como a Ibagué estaba llegando el grueso de la población sobreviviente, se formaron grupos que operaban las máquinas y los programas en las agencias de cómputo de la ciudad. Pasado los tres primeros días se llegó a registrar una población cercana a los diez mil damnificados, que sería la masa de ciudadanos a los que se brindaría atención prioritaria y hacia la que se encausarían las ayudas nacionales y extranjeras que comenzaban a fluir. En la mañana del siguiente lunes, llegó a la capital del Tolima una comisión organizada en el Gobierno central que procedió a hacerse cargo de la información y a relevar a los locales de la tarea voluntaria que desarrollaban; una vez consolidados los datos, la cantidad había superado, sorpresivamente, las veinticuatro mil personas, muchas de ellas con cédulas y documentos de identificación de regiones alejadas de la zona del desastre. A los voluntarios no se les volvió a dejar participar en las tareas de recolección y organización de los datos de la población damnificada.

Por cierto, si bien en un principio se designaron personas de la región en la dirección y coordinación de las labores de reconstrucción, más tarde esa responsabilidad fue encomendada a un conocido urbanizador

13 Extraído de las conversaciones con Julio Alberto Londoño Botero, ingeniero.

experto en la promoción y ejecución de centros comerciales y vivienda para estratos altos en Bogotá, actuación que intentó replicar en la zona afectada y particularmente en la ciudad regional escogida para la reconstrucción, que fue el pequeño y agropecuario municipio de Lérida, en el que se levantaron bodegas para una inexistente industria y se urbanizaron varias zonas para construcción de vivienda que nunca fueron ocupadas, inversión que quedó pronto cubierta por la maleza.

De nuevo el Tolima se puso a prueba ante la enormidad de la tragedia y, de nuevo, hubo de inventar fórmulas improvisadas para asimilar el desastre y brindar oportunidades a quienes todo lo perdieron, a las familias desintegradas, a los centenares de niños huérfanos como resultado de la tragedia y a la desaparición de todo un aparato productivo.

El Gobierno nacional y la comunidad internacional salieron en auxilio de una región desmantelada, e Ibagué y Bogotá, de nuevo, se convirtieron en los centros de recepción de los damnificados. La capital del Tolima, otra vez, tenía que valerse con todo lo que tuviera a su alcance para paliar esta nueva catástrofe.

De otro lado, la dirigencia tolimense, otra vez actuando unida, logró que la región fuera incluida entre las que habrían de ser beneficiadas con la Ley 44 de 1987 –de auxilios y exenciones– lo que le permitió un temporal alivio y la creación de una infraestructura industrial y empresarial, en gran medida pasajera, que tuvo enorme incidencia en la inversión, el empleo y la transferencia tecnológica en el campo y la industria.

En tanto, la presencia de los enormes recursos derivados del tráfico de estupefacientes se hizo evidente en diferentes sectores e instituciones colombianas. Casi ninguna región ni actividad quedaron eximidas de la infiltración.

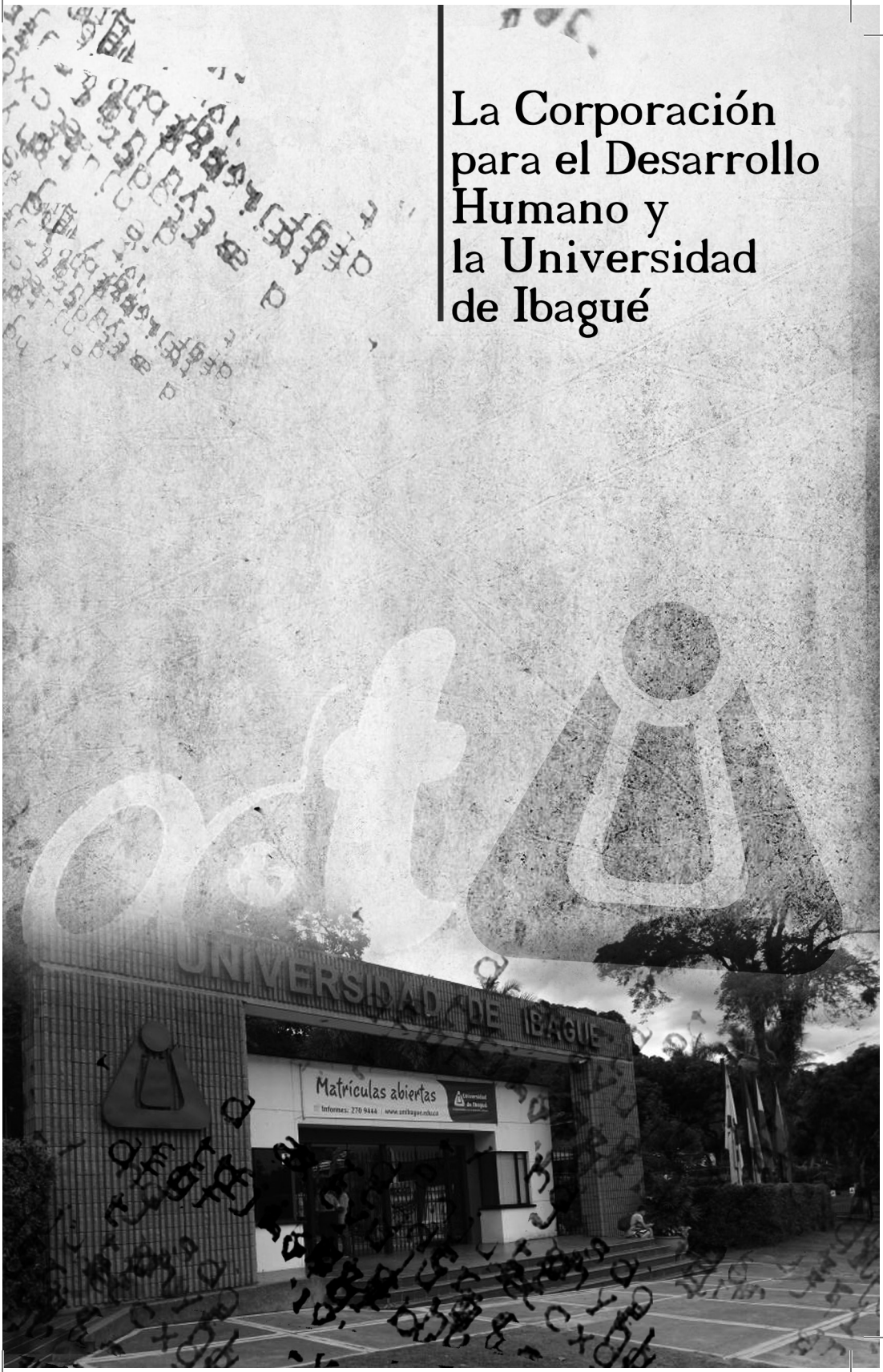
La mayoría de los equipos de fútbol profesional, la radio –desde cadenas completas de propiedad de los Rodríguez Orejuela hasta emisoras locales como Radio Fantasía en Ibagué en manos de Gonzalo Rodríguez Gacha–, las entidades financieras y cadenas de droguerías, las ferias ganaderas y equinas, las ferias taurinas y el rejoneo, grandes extensiones agrícolas, la televisión –desde programadoras enteras hasta el principal noticiero del mediodía, cuyos corresponsales en las distintas ciudades pertenecían a testaferros de Pablo Escobar y Carlos Lehder–, industrias enteras –como la naciente fábrica de textiles en el Tolima–, financieros, columnistas en periódicos y revistas, comentaristas en televisión y radio al servicio de los carteles, dos o tres universidades, clubes sociales y, por

supuesto, el Congreso, las asambleas y los concejos municipales, todos vieron desfilar a validos y testaferros de grandes y medianos mafiosos que, a más de expandir el poder de los criminales, los utilizaron para adueñarse de posiciones y presupuestos, y poner al servicio de los antisociales las instituciones estatales, desde los ministerios hasta la Aeronáutica Civil; no solo les permitían ampliar su área de influencia sino que se convertían en instrumento propicio para una inmensa operación de lavado de dinero sucio (Castillo, 1987).

Al tiempo, como ya se ha mencionado, los grupos guerrilleros participaban de la dañina bonanza, bien como receptores directos de recursos, o brindando protección a cambio de dinero o bien recibiendo armas y vituallas de las bandas criminales.

El reto a la sociedad había alcanzado cotas inimaginables. La mafia asesinó al ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien los había denunciado y retado al hacer pública la infiltración de los narcotraficantes en los equipos de fútbol profesional. Si bien la reacción del Gobierno al alevoso crimen hizo que se reactivara la extradición de nacionales, los sucesos de Armero y el Palacio de Justicia habían minado la autonomía y la capacidad de acción de Betancur y su gobierno para enfrentar los poderosos tentáculos de la maquinaria del crimen (Bejarano, 1990).

La Corporación para el Desarrollo Humano y la Universidad de Ibagué



De nuevo, el espíritu de la región no se dejó doblegar y con la aparición de organismos de desarrollo colectivo se hizo frente a los avatares de la naturaleza y a la descomposición social.

Como se había enunciado, en 1980, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), y varios de sus miembros conformaron la Corporación para el Desarrollo Humano (CDH), con el objeto de promover la educación de calidad para los tolimenses. Diversas formas fueron adoptadas: becas para estudiantes destacados en instituciones dentro y fuera del país, creación de entidades educativas y sustento financiero para las organizaciones creadas por su iniciativa.

A partir de lo anterior, el 27 de agosto de 1980, veintidós empresarios y dos personas jurídicas, la ADT y la CDH, firmaron el acta de fundación de lo que se llamó, en un principio, "Corporación Universitaria" y, hoy en día, Universidad de Ibagué, que desde sus inicios ha tenido un estrecho compromiso con el desarrollo regional. Por supuesto, la naciente institución no tenía recursos para los necesarios terrenos y construcciones en donde operar y fue la CDH la que, mediante un crédito bancario avalado por quienes participaron en la fundación, se adquirieron los primeros lotes y se proveyeron los fondos para las primeras aulas y laboratorios.

En 2015 la Universidad cumplió treinta y cinco años de fundada; sus estudiantes provienen, en un 70 %, de los estratos económicos 2 y 3; el 49 % son mujeres y el 40 % son financiados en sus matrículas por la misma Institución.

En sus orígenes, la Universidad ofrecía tres carreras que no existían en ninguna otra institución de la región; hoy ofrece diecisiete carreras, de las que once están acreditadas como de alta calidad y se encuentra en proceso de adquirir la certificación de alta calidad institucional.

Actualmente cuenta con veintidós profesores con doctorado, pero se planea que, en cinco años, el 30 % de sus docentes ostenten ese título, época para la cual se espera tener diez mil alumnos en la modalidad presencial.

El campus universitario ocupa un área de doscientos mil metros cuadrados, a los que deben adicionarse los veintiún mil metros cuadrados de sus instalaciones deportivas.

La Universidad incluye, en todos sus programas, un semestre denominado de "Paz y Región", por medio del cual equipos interdisciplinarios de estudiantes trabajan mancomunadamente con las administraciones de los municipios del departamento en apoyo de diversas actividades regionales y solución de problemas.

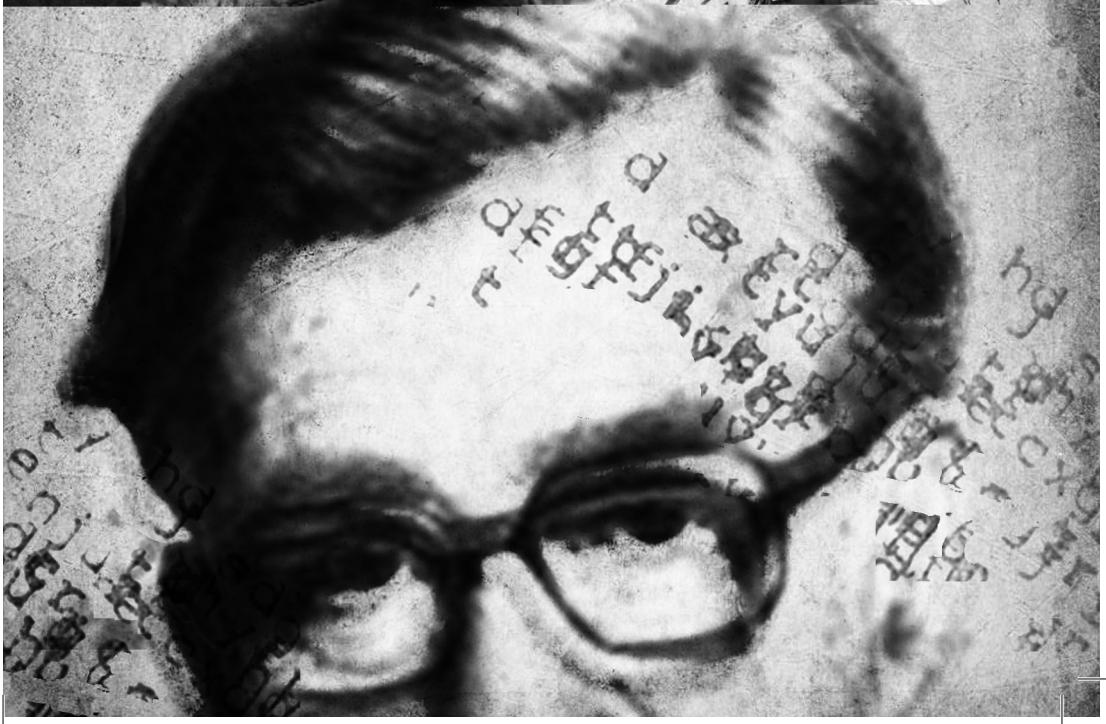
Para fomentar una mayor vinculación institucional con los municipios y con otras ciudades del país, la Universidad ha materializado convenios con cuatro instituciones educativas del departamento y cuatro universidades nacionales, por medio de los cuales los alumnos de los municipios cursan los dos primeros años en Chaparral, Espinal, Honda y Purificación, para luego culminar su carrera en Ibagué. De la misma manera, existe la opción de cursar los dos primeros años en la Universidad de Ibagué y terminar la carrera en la Universidad de Los Andes, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Pontificia Bolivariana o la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El 70 % de los estudiantes son oriundos de Ibagué y el resto de otros municipios del Tolima y demás departamentos del país.

La acción de la CDH continuó con la creación, en agosto de 1985, de un colegio de alta calidad educativa que se llamó San Bonifacio de Las Lanzas y cuyos alumnos, individual y colectivamente, ocupan consuetudinariamente las más destacadas posiciones en las Pruebas de Estado.

Con el mismo horizonte, la Universidad ha promovido el Instituto Avancemos, para complementar y otorgar la titulación en bachillerato a adultos y personas provenientes de sectores populares. De la misma manera, y en alianza con la Pía Comunidad Salesiana, ha consolidado el Instituto San José, en donde ofrece, en compañía del SENA, programas técnicos y tecnológicos (Universidad de Ibagué, 2015).

Barco y las negociaciones



A las siguientes elecciones, el Partido Liberal acudió con la candidatura del ingeniero Virgilio Barco Vargas, que había sido ministro en dos ocasiones, alcalde de Bogotá y embajador en Washington. El Partido conservador insistió con el nombre de Álvaro Gómez Hurtado que no había podido borrar el estigma del gobierno de su padre, su protagonismo en la tristemente famosa Operación K y su participación decisoria en los bombardeos a Marquetalia, con el sustento de las llamadas "repúblicas independientes". En tanto, la izquierda participó con el nombre de Jaime Pardo Leal.

La victoria de Barco fue arrolladora; se basó en una propuesta de paz con los grupos armados, el fortalecimiento de un Estado laico, con clara separación entre este y la Iglesia, y el establecimiento de un claro esquema de gobierno-oposición.

Las conversaciones con los grupos armados fueron inicialmente exitosas; primero, se hicieron con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, de la que formaban parte el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT[14], y a la que, posteriormente, se unieron las FARC y el ELN.

El primero en desmovilizarse fue el M-19, que había quedado herido de muerte tras el desastre del Palacio de Justicia y, luego, en el siguiente gobierno, se sumaron el EPL, el Quintín Lame, el PRT y una escisión del ELN que se llamó la "Corriente de Renovación Socialista".

El fracaso de las iniciativas de paz del gobierno de Betancur obligó a un planteamiento radicalmente distinto de parte del de Barco. El enfoque se centró en quitarle la base social a la guerrilla mediante inversiones en infraestructura que sacaran de la marginalidad a las zonas con presencia de la insurgencia. Los esfuerzos del Gobierno se concentraron, entonces, en el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que se volcó hacia las zonas más afectadas por el accionar guerrillero, caracterizadas por un grado sumo de necesidades básicas insatisfechas. La propuesta buscaba integrar todas las agencias del Estado, incluso las armadas, en beneficio de los habitantes de las zonas aisladas. El Plan recuperaba las iniciativas

14 Partido Revolucionario de los Trabajadores.

desarrolladas en el gobierno de Lleras Restrepo con la acción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), de López Michelsen. En efecto, lo que pretendió hacer Barco con la Ley 30 de 1986 fue una nueva reforma agraria. La descentralización política y administrativa, que más tarde tendría plena concreción en la Constitución de 1991, dio sus primeros pasos con la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1988. Por entonces, comenzó a hacer carrera una radical reforma a la Constitución de 1886, que luego habría de consolidarse con la sustitución de la misma.

Los propósitos e intentos reformistas de Barco se vieron frustrados por la reacción de sectores violentos que, ante todo, se empeñaron en impedir el acceso de la izquierda a posiciones políticas dentro de la estructura del Estado mediante avances electorales. El asesinato de líderes y partidarios de la Unión Patriótica así lo demuestra más allá de cualquier duda: en el genocidio cayeron dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y miles de simpatizantes. En los crímenes intervinieron grupos paramilitares, miembros de organismos de seguridad del Estado –Ejército, DAS y Policía–, como lo relatan informes de la Defensoría del Pueblo , todo con la amplia sombrilla del narcotráfico que, lejos de ser un estigma, se había convertido en muchas regiones en símbolo de éxito y la forma más expedita de movilidad social.

Barco estableció el funcionamiento del esquema gobierno-oposición y configuró un gabinete conformado únicamente con liberales. Pronto se hizo público el grado de corrupción y cercanía con los carteles de la droga de algunos de los más connotados políticos del partido de Gobierno, no obstante algunos de la oposición y miembros de las más caracterizadas familias de esa colectividad también actuaran de manera similar.

El escándalo rebasó cualquier límite: los directivos de las más grandes corporaciones acudían al Congreso a recibir genuflexiones de sus mandaderos y, a cambio, les proporcionaban espacios televisivos y radiales, y columnas en los principales diarios. Abiertamente, y con el contubernio de algunos ministros, se modificaban los precios de productos con precios controlados y los mismos mercenarios hacían abierta vida política con el apoyo y los dineros de los grandes mafiosos.

El presidente, que aquejado de dolencias había visto mermadas sus facultades, no patrocinó lo que estaba sucediendo y procedió a remover ministros y gobernadores, fichas de los más connotados barones

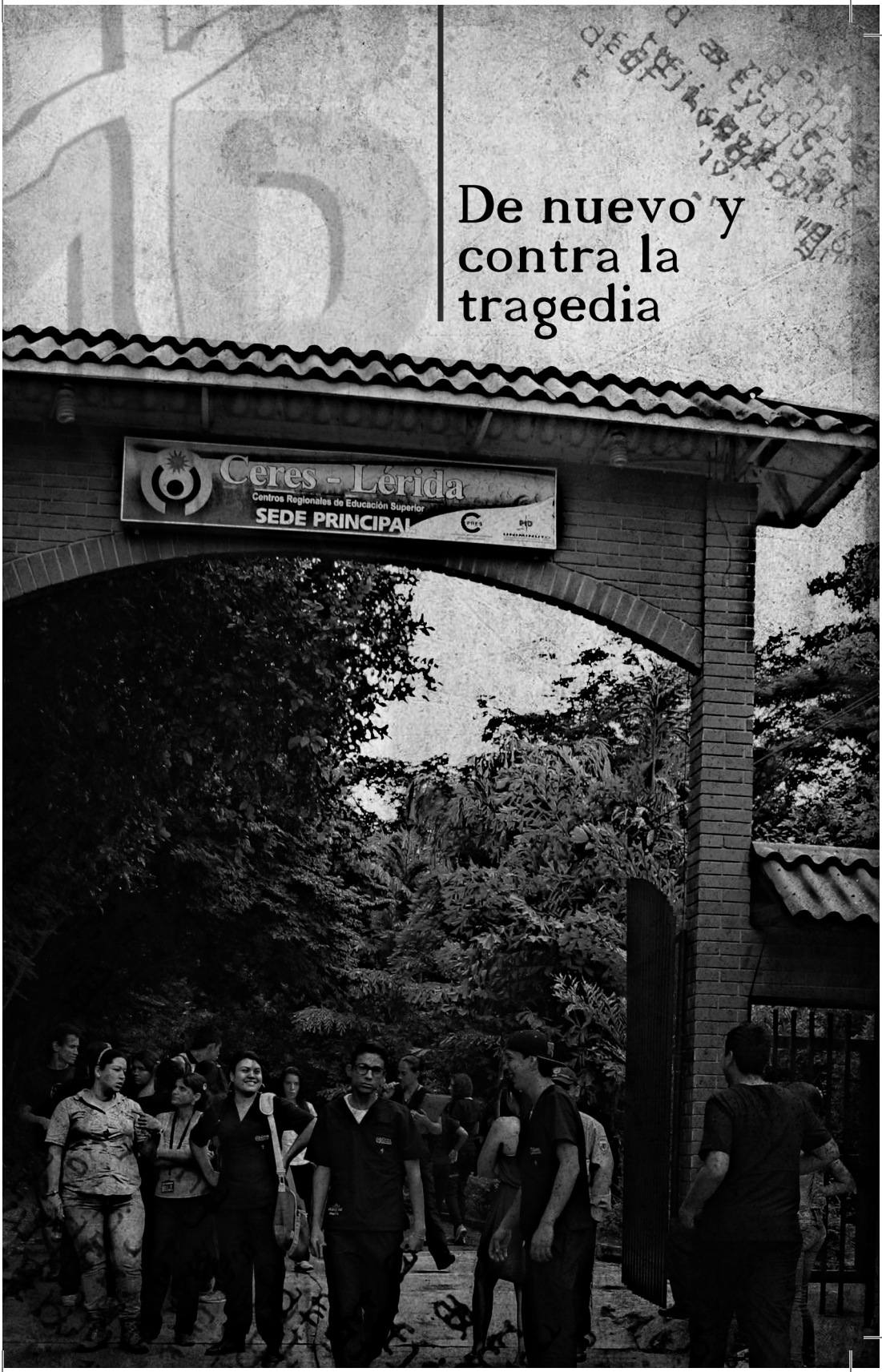
electorales, lo que significó la inmediata mengua de su poder electoral y el derrumbe de sus poderes en las siguientes elecciones.

El Gobierno se había decidido por confrontar a los carteles de la droga, y el Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán, que desde siempre los había combatido decidió regresar al Partido Liberal.

La guerra se libró sin cuartel y las fuerzas políticas alineadas con los narcotraficantes vieron el peligro que se cernía en el horizonte contra sus organizaciones, de tal manera que hicieron un pacto siniestro con las máquinas de guerra de las mafias. En el baño de sangre iniciado se produjo no solo el exterminio de la Unión Patriótica –la expresión política del Partido Comunista– y los candidatos y los partidarios de este movimiento que pudieran estorbar su proyecto político en las regiones, sino el asesinato de todos los candidatos presidenciales que les fueran contrarios, algo que nunca había sucedido en Colombia con la excepción de la muerte de Gaitán. Bajo las balas de los sicarios cayeron Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro a más de miles de políticos, jueces, periodistas, militares, sindicalistas, policías, funcionarios y ciudadanos del común que se ponían en el camino de mafiosos y corruptos (González, 2014).

En medio de esa vorágine, venció en las elecciones un político tradicional de Risaralda, César Augusto Gaviria Trujillo, que había triunfado en una consulta interna de su partido en la que había derrotado a otros cinco aspirantes. Por el Movimiento de Salvación Nacional participó el sempiterno Gómez Hurtado y Rodrigo Lloreda por el partido Conservador; también lo hizo Antonio Navarro, que había recogido las banderas del M-19; por franjas lunáticas, Regina Betancur, y por un grupo cristiano Claudia de Castellanos.

De nuevo y contra la tragedia



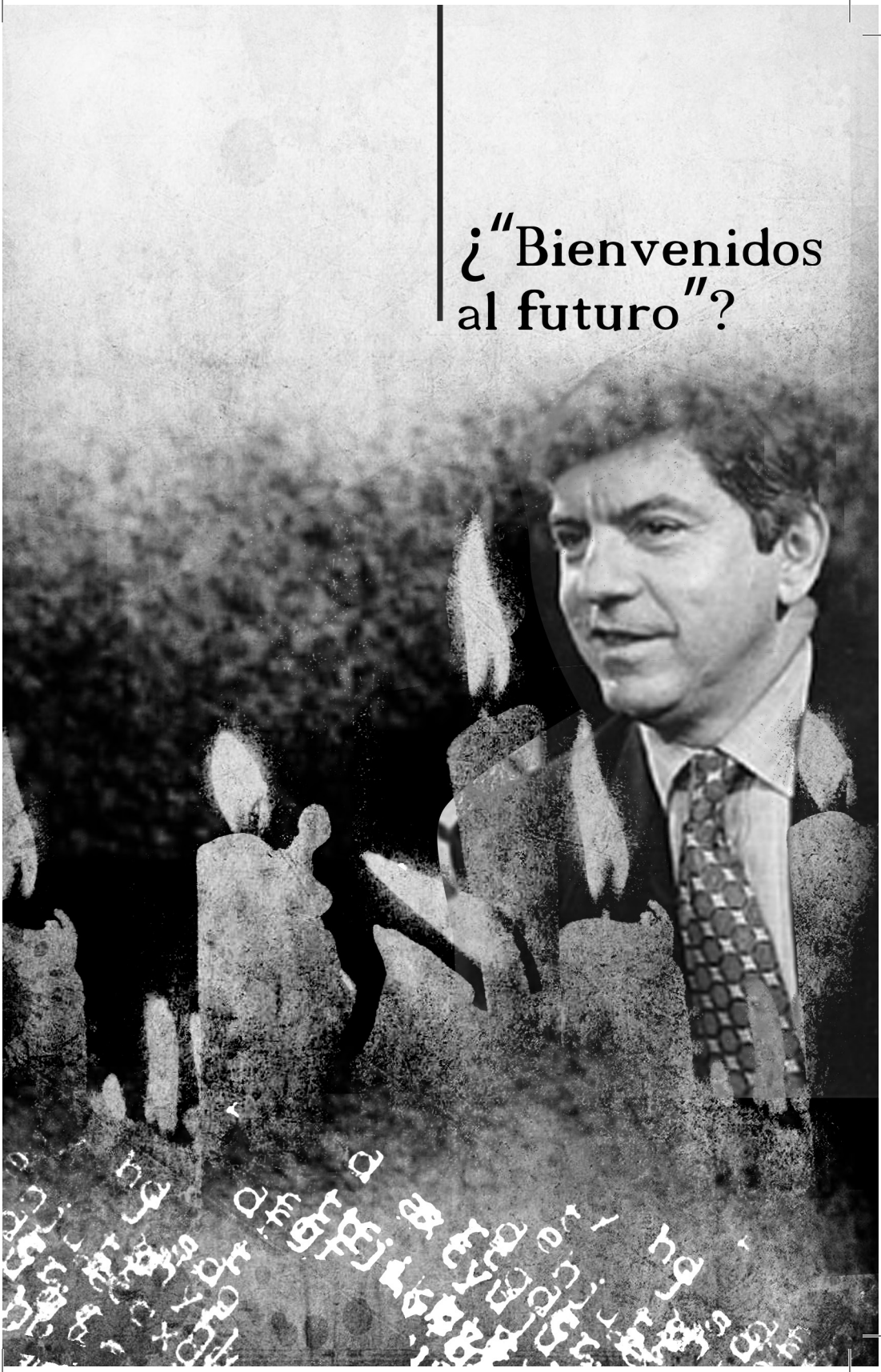
Como ya se había mencionado, y como ha sido una constante, la Corporación Minuto de Dios acudió a apoyar a la región que se debatía en medio de la inmensa tragedia y, en combinación con organismos estatales, empresas privadas de la zona, las universidades del Tolima e Ibagué y la diócesis de Líbano-Honda, en 1989 creó un instituto tecnológico a imagen del Jaime Isaza Cadavid de Medellín; la entidad, que se inició con cuarenta y siete estudiantes, cuenta ahora con mil quinientos.

En 1993 se creó la Escuela Superior de Artes y Oficios (ESAO) con la cooperación del Ministerio de Educación, que dio origen a una institución de bachillerato y luego, en 1999, a la regional Norte de UNIMINUTO.

Para 2004, y de nuevo con el apoyo departamental, las alcaldías de la zona y las universidades de Ibagué y Tolima, UNIMINUTO creó el Ceres de Lérida, que más tarde amplió su radio de acción con sedes en Cajamarca, Fresno y Puerto Boyacá en el Magdalena Medio, además de centros tutoriales de educación a distancia en Líbano, La Dorada y Mariquita.

Ya para mayo de 2011, UNIMINUTO dio vida al Centro Regional de Ibagué y de los ciento noventa y dos estudiantes iniciales cuenta ahora con seis mil, gracias a las políticas de la entidad que permiten el acceso a la educación superior a miles de ciudadanos en virtud de un régimen especial de matrículas y una nueva y amplia sede llamada Chicalá, en donde ofrece dos especializaciones y siete programas de pregrado, otra vez con el decidido apoyo de la Gobernación, la Alcaldía de Ibagué, el SENA y Comfenalco.

¿"Bienvenidos al futuro"?



Gaviria había mostrado su talante a los pocos días de haber sido señalado por Juan Manuel Galán como sucesor de su padre en la carrera hacia la Presidencia y haber refrendado esa condición en la consulta interna del Liberalismo: seleccionó a Alberto Santofimio como jefe de debate de su aspiración en el Tolima, pese a que era clara la vinculación del senador tolimense con los asesinos de Galán, cosa que se probó judicialmente más tarde y le significó una larga condena a Santofimio. Una vez posesionado, y pese a solicitudes muy precisas de los antiguos partidarios del Nuevo Liberalismo, procedió a nombrar en la gobernación del departamento al candidato de Santofimio y le concedió numerosas prebendas. Santofimio había sido cercano a todos los grandes capos: Escobar y su primo Gustavo de Jesús Gaviria, Lehder, Rodríguez Gacha y los Rodríguez Orejuela y había conformado una hegemonía política por medio de la cual se entronizó el saqueo y el despilfarro por más de dos decenios que lastraron el futuro del departamento del Tolima y corrompieron a varias generaciones con el banal lema de establecer la "patria socialista del mañana", entelequia en la que sucumbieron todas las formaciones de izquierda establecidas en la región sin el más elemental raciocinio ni análisis.

Entretanto, el rechazo colectivo a tan deplorable estado de cosas y la presión por modificar la situación llevó a que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros habrían de ser elegidos por voto popular, y se clausuró el Congreso elegido en 1990.

En la misma línea de López Pumarejo y Lleras Restrepo, el gobierno de Gaviria prestó especial atención al campo y a los sectores marginados ya aislados a través de una fuerte inversión conducida a través del llamado "Desarrollo Rural Integral" (DRI), que buscaba también quitar espacio a los grupos insurgentes en zonas de conflicto.

Durante su gobierno, Gaviria procedió a acelerar la llamada "apertura económica", que había iniciado pausadamente en tiempo de Barco. La apertura se hizo pese a las advertencias de diversos sectores sobre la necesidad de preparar al país para tan severa reforma, ya que quedaría en inferioridad de condiciones ante países que sostenían cuantiosos

subsidios para sus estructuras productivas, de manera que se pondría en peligro la producción nacional, el empleo y, sobre todo, la seguridad alimentaria.

Como se dijo, durante este mandato se desmovilizaron el EPL, el Quintín Lame y el PRT, pero las FARC se retiraron de los diálogos y, el mismo día en que se realizaba la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, el 9 de diciembre de 1990, el ministro Rafael Pardo ordenó el bombardeo de Casa Verde, el santuario de las FARC localizado en el municipio de La Uribe, en el Meta, lo que traía a la memoria escenas del pasado como las ocurridas en 1954, 1962 y los comienzos del gobierno de Betancur, por lo que las conversaciones con este grupo guerrillero se rompieron por varios años.

Pocos meses, antes de la posesión de Gaviria, había muerto en enfrentamientos con las autoridades uno de los más peligrosos líderes del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, "el Mexicano", pero el Gobierno libraba una batalla sin cuartel contra las organizaciones criminales que, validas de su poderío económico, habían infiltrado diversos sectores de la sociedad y, a la vez, establecido alianzas con políticos, bandas paramilitares e incluso grupos guerrilleros. La confrontación arreció con la amenaza del Gobierno de aplicar la extradición de nacionales requeridos por la justicia de otros países, pero este se arredró ante los secuestros, amenazas y acciones terroristas de los llamados "extraditables", y la Asamblea Nacional Constituyente declaró inconstitucional la extradición, por lo que ese mismo día se entregó Pablo Escobar con todo su anillo de seguridad y fue instalado en "La Catedral", una hacienda que él mismo había adaptado a sus necesidades en el municipio de Envigado, que, por cierto, dominaba el capo política y económicamente. Un tiempo después, se descubrió que algunos constituyentes fueron aproximados por mensajeros de los carteles para condicionar sus decisiones a los requerimientos de los criminales; entre estos últimos, un tolimense que actuó sobornado por el dinero de la mafia y como puente entre los criminales y los constituyentes asequibles a los recursos de la mafia.

Escobar continuó con sus crímenes desde La Catedral y la convirtió en un lugar de excesos que tornó al Gobierno en hazmerreír, hasta que este decidió poner punto final al abuso, pretendiendo trasladar a Escobar y sus escoltas a otra prisión. El capo huyó, desatándose otra ola de terror y de atentados, hasta que fue dado de baja en Medellín, en diciembre de 1993. La llamada "Ley de Sometimiento a la Justicia"

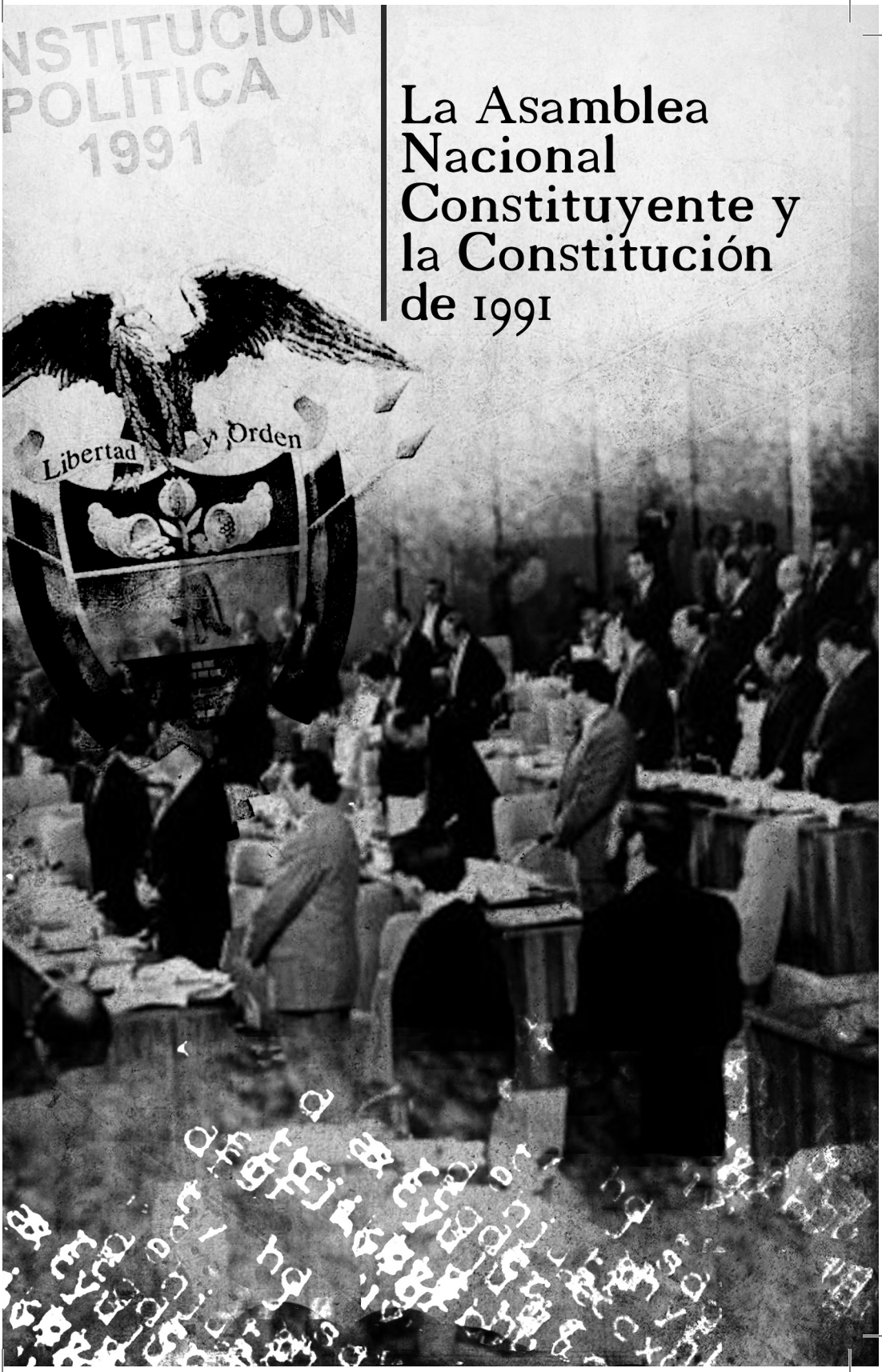
(1993) solo fue utilizada por unos pocos, entre ellos los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez y algunos otros destacados narcotraficantes del Cartel de Medellín, mientras el otro gran cartel, el de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que habían colaborado en la persecución de Escobar, siguieron con sus acciones criminales y su notoria infiltración en la sociedad (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Durante el periodo se autorizó la creación de las llamadas "Convivir", que luego dieron origen a la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a otras bandas paramilitares que, con sectores de la fuerza pública y los narcotraficantes, se unieron contra la acción de los grupos guerrilleros.

En tanto, por efectos de la sequía, originada por el fenómeno del Niño y un cúmulo de imprevisiones ocurridas en el sector eléctrico, se presentó una enorme restricción del servicio del fluido eléctrico en lo que vino a conocerse como "el apagón" que obligó a un cambio de horario que se prolongó por nueve meses.

Por otra parte, el Gobierno propició la reunión de nueve reconocidos y expertos educadores en lo que se vino a conocer como los "nueve sabios" para que realizaran un diagnóstico del panorama educativo del país y propusieran fórmulas para solucionar los problemas y proyectar a la nación en tan esencial tema. El asunto terminó siendo un proyecto mediático; el trabajo de los expertos no tuvo aplicación y solo vestigios de sus recomendaciones fueron aplicadas, entre ellos la creación, en algunas partes del país, de los Institutos de Innovación Regional (Innovar).

La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991



Ya se ha descrito la situación que vivía el país y la propuesta discutida en las postrimerías del gobierno de Virgilio Barco sobre la necesidad de adoptar una nueva constitución más acorde con los tiempos, la evolución de la sociedad y el avance de los derechos fundamentales en el mundo. El asunto vino a tomar forma con la llamada "séptima papeleta" que se introdujo de manera irregular en las elecciones de marzo de 1990; el Consejo de Estado conceptuó que el alto volumen de votos depositado por la iniciativa le daba validez, por lo que el Gobierno llamó a elecciones para seleccionar los setenta dignatarios que deberían integrar la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990. El Partido Liberal obtuvo veinticinco posiciones, la Alianza M-19 consiguió diecinueve, el Movimiento de Salvación Nacional, once; el Partido Conservador, nueve; la Unión Cristiana, dos; la Unión Patriótica, dos, y grupos indígenas, dos. A las agrupaciones desmovilizadas se les asignaron cuatro posiciones, así: dos para el EPL, una para el PRT y una para el Quintín Lame, estos cuatro últimos con voz pero sin voto.

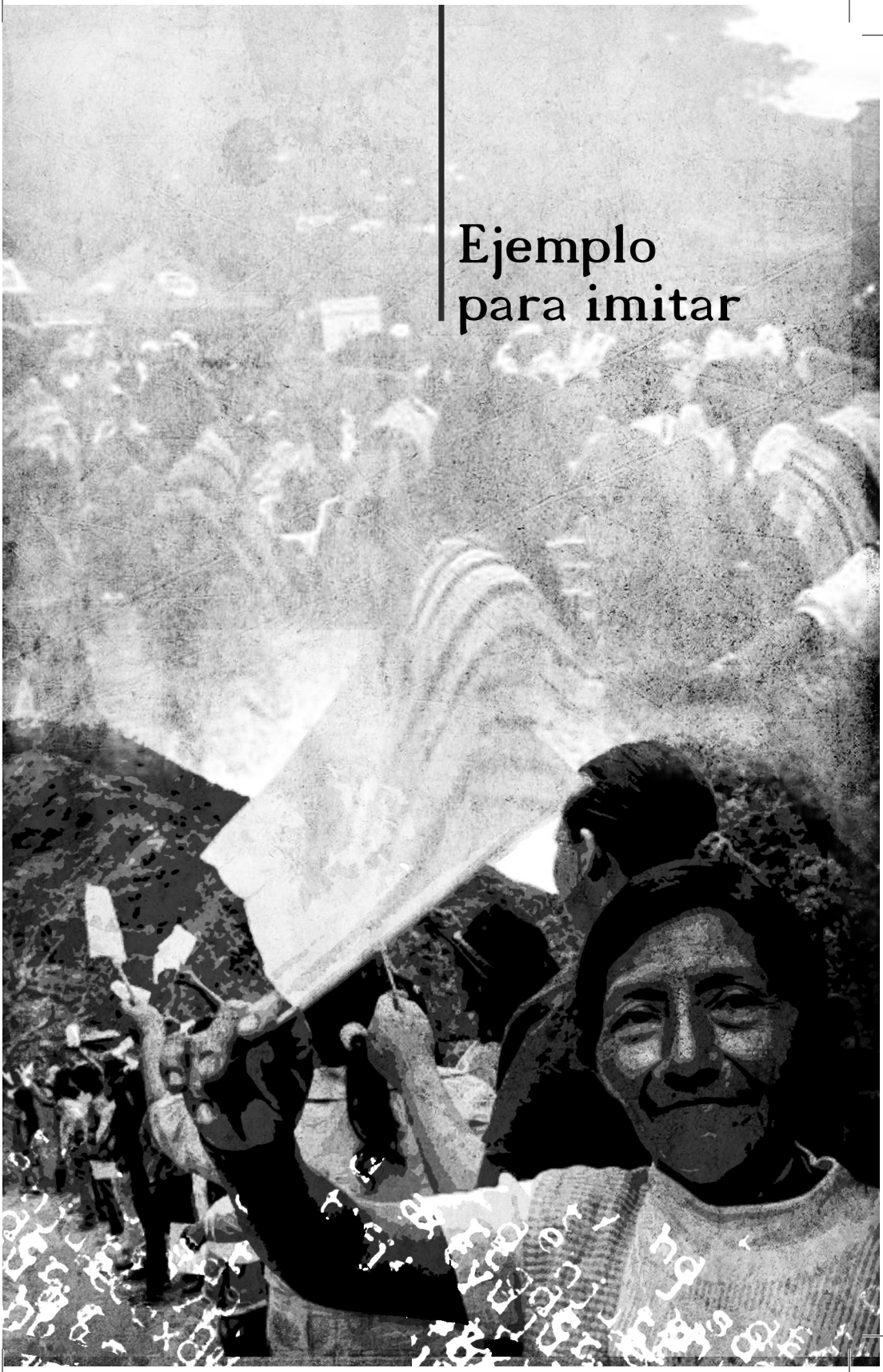
Para dirigir la Asamblea se acordó un equipo tripartito con representantes de los partidos con mayor número de delegados, que quedó integrado por Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff, razón por la cual se retiró de la asamblea el conservador Misael Pastrana Borrero. El odontólogo y futbolista Francisco Maturana García no asumió.

La Asamblea inició deliberaciones el 5 de febrero de 1991 y la nueva Constitución fue proclamada el 7 de julio del mismo año. Una de las más destacadas determinaciones adoptadas fue la del establecimiento de Colombia como un Estado Social de Derecho en el que queda abolido el *estado de sitio*, que se aplicó sin pausa a lo largo del siglo XX, y, en su sustitución, se establecieron el *estado de emergencia*, que no puede regir por más de noventa días al año, y el *estado de excepción*, en caso de guerra interna o externa. En una votación de cincuenta y un votos contra trece se abolió la extradición de nacionales.

La nueva Constitución creó la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la *acción de tutela* y el

derecho de petición. Estableció la diversidad lingüística y religiosa de la nación y el Sistema Penal Acusatorio. De la misma manera, se configuró un delicado juego de pesos y contrapesos entre los distintos poderes para lo cual era fundamental determinar la no reelección presidencial. Así se preservaba la independencia de entidades como la Junta Directiva del Banco de la República, a la que se le asignaba en la Carta la defensa del poder adquisitivo de la moneda o, en otras palabras, el control de la inflación. Del mismo corte resultaba la Comisión Nacional de Televisión que tuvo muy corta y precaria vida.

Con la proclamación de la nueva Constitución se propagó un sentimiento colectivo de optimismo que hacía creer en un futuro en el que imperara la concordia y la justicia. Lamentablemente, muchos de los derechos y avances plasmados en la Carta se convirtieron en letra muerta por la ausencia de reglamentación y legislación pertinentes y, también, por la reacción inmediata de sectores que no compartían los logros alcanzados y promovieron reformas que neutralizaban las conquistas. Así se repetía la historia de lo ocurrido con la "revolución en marcha" de López Pumarejo o las reformas propuestas en el gobierno de Lleras Restrepo, especialmente en lo que tuvo que ver con la distribución y propiedad de la tierra. Unos pocos años después, en 1996, se reformó la Constitución para dar cabida a la extradición de nacionales, cuando el poder de las mafias y el narcotráfico amenazaba con desbordar la capacidad de control y la misma estabilidad del Estado, y el aparato de justicia estaba dominado por el dinero o la violencia de las organizaciones criminales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).



Ejemplo para imitar

A finales del gobierno de César Gaviria y principios del de Ernesto Samper comenzó a agudizarse un conflicto entre la comunidad indígena situada en Gaitania y sus vecinos de las FARC ubicados en Marquetalia.

En páginas anteriores se trató el tema de las Ligas Campesinas, el movimiento agrario del Alto Sumapaz y la concentración de muchas de estas manifestaciones y fuerzas en el municipio tolimense de Villarrica. Posteriormente se reseñó lo ocurrido durante la hegemonía conservadora y el gobierno de Rojas que generó un movimiento de resistencia armada que desembocó en la llamada "Columna de Marcha" y la movilización de un gran número de familias hacia la zona de Marquetalia en Planadas, en donde, tras divergencias entre liberales o "limpios" y comunistas o "comunes", se abrió paso a la creación de las FARC en 1965.

La vecindad entre las FARC y el resguardo Páez originó numerosos enfrentamientos, muchos de ellos con saldos de sangre, hostigamientos entre las comunidades, afectación de las familias y permanente deterioro de la situación económica.

Tras varios años de confrontación y una inútil guerra los gobernantes del Resguardo Indígena Páez de Gaitania y los comandantes del Frente Joselo Losada de las FARC-EP, estos iniciaron una prolongada serie de diálogos, con los que se consiguió, en principio, desmontar la mutua desconfianza para poder pasar a establecer los elementos de un "convenio" entre las dos comunidades que, a más de regirse por la legislación indígena y la *Constitución del 91*, estableciera parámetros de comportamiento, obligaciones y prohibiciones que permitieran la recuperación de la tranquilidad y las fórmulas para dirimir los conflictos que se llegaren a presentar. Un elemento esencial lo constituye el hecho de que dentro del territorio indígena no se permite la presencia de personal armado, además de que habrá de acudirse a la mediación de los dirigentes de las dos organizaciones para zanjar las diferencias.

Por los indígenas firmó el gobernador Virgilio López Velasco y por las FARC, el comandante Jerónimo Galeano; actuaron como testigos

Delphine Vann del Comité Internacional de la Cruz Roja y Monseñor José Luis Serna Alzate de la Diócesis de Líbano-Honda.

En mayo de 2016 se conmemoró el vigésimo aniversario de la firma del convenio que ha permitido mantener la paz entre indígenas y FARC, y que de contera se ha traducido en significativo progreso económico y social para la comunidad indígena que, liberada de tributar a la guerrilla, invierte el producido de sus feraces tierras en bienestar y mejores oportunidades para su conglomerado.

La exitosa y probada fórmula debería imitarse en otras regiones, adaptada a las particulares circunstancias de las comunidades para permitir el progreso gradual de la paz y el enorme bienestar que de ella se deriva.

Y... se quedó

Ernesto Samper Pizano había sido derrotado por César Gaviria y Hernando Durán en la consulta liberal que llevó al primero a la candidatura y luego a la Presidencia en 1990. Para el periodo de 1994-1998 volvió a participar como cabeza de un movimiento llamado "Poder Popular", de tinte social demócrata; ganó la consulta venciendo holgadamente a Humberto de La Calle y a Carlos Lemos Simmonds quienes posteriormente fueron sus vicepresidentes.

Ya como candidato oficial del Partido Liberal venció en la segunda vuelta a Andrés Pastrana Arango, cabeza de un movimiento llamado "Nueva Fuerza Democrática", una escisión del Partido Conservador, por un poco más del dos por ciento de los votos.

Samper había sido presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y del Instituto de Estudios Liberales, a más de Secretario General del Partido. También había sido concejal, diputado, senador, ministro y embajador.

Su plataforma política, de clara inclinación social, se vio gravemente afectada en cuanto a su ejecución por las acusaciones de su rival, Andrés Pastrana, que aportó unas incriminatorias grabaciones que daban cuenta de la penetración de dineros del Cartel de Cali en la campaña presidencial. En la investigación, que llevó a prisión a numerosos congresistas y vino a conocerse como el "Proceso 8000", se comprobó que el jefe de campaña y ministro de Defensa, Fernando Botero, y el gerente de la campaña, Santiago Medina, se habían apropiado de no menos de seis millones

de dólares que los miembros del Cartel de Cali habían entregado para influir en el proceso electoral. Ambos funcionarios pagaron cárcel por su participación en el escándalo, pero nunca se dilucidó la duda de si habían tomado para sí todo o parte del dinero. De todas maneras, a diversas partes del país llegaron altos dignatarios de la campaña con voluminosas cajas, adornadas con motivos navideños, que contenían los fajos de billetes que se iban a emplear en los días críticos en vísperas de la segunda vuelta, como si por la época no existieran en los bancos las fórmulas para trasladar electrónica y seguramente los importantes volúmenes de dinero; el Tolima no fue la excepción.

Si bien Samper fue exonerado por la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, liderada por un palurdo y proclive congresista de Sucre de nombre Heyne Mogollón, el acceso de Samper a la Presidencia y todo lo que ha hecho desde entonces ha soportado el estigma de una espuria victoria.

Pocos recuerdan que en su mandato se creó el Sisbén, por medio del cual no menos de veinticuatro millones de colombianos consiguieron cobertura en salud, ni de la creación del Ministerio de Cultura, ni mucho menos de un programa de sustitución de cultivos ilícitos que se denominó "Plante", ni de importantes avances en la reducción de la pobreza y mejoras en la cobertura en educación, salud y vivienda. Tampoco se trae mucho a cuento que fue durante su gobierno que se desmanteló la estructura del cartel del Valle y sus jefes, los Rodríguez Orejuela, fueron encarcelados.

El recuerdo es el de un presidente acorralado con una oposición feroz e inclemente tanto del partido Conservador, la jerarquía católica, Andrés Pastrana, Álvaro Gómez y el Gobierno estadounidense en cabeza de su embajador, quien finalmente le retiró la visa, y un permanente pulso con las Fuerzas Armadas caracterizado por un incesante "ruido de sables". De hecho, su primer vicepresidente, De la Calle, y su canciller y embajadora, Noemí Sanín, renunciaron ruidosamente dejándolo en la estacada.

Samper aseveró que si algún dinero ilícito había entrado a su campaña proveniente del Cartel de Cali había sido a sus espaldas y, ante las presiones de diversos sectores de la vida nacional y del extranjero para que dejara el poder, contestó con una de sus más recordadas frases: "Aquí estoy y aquí me quedo". Los rumores crecieron acerca de una conspiración entre distintos estamentos para dar un golpe de Estado que nunca se consolidó.

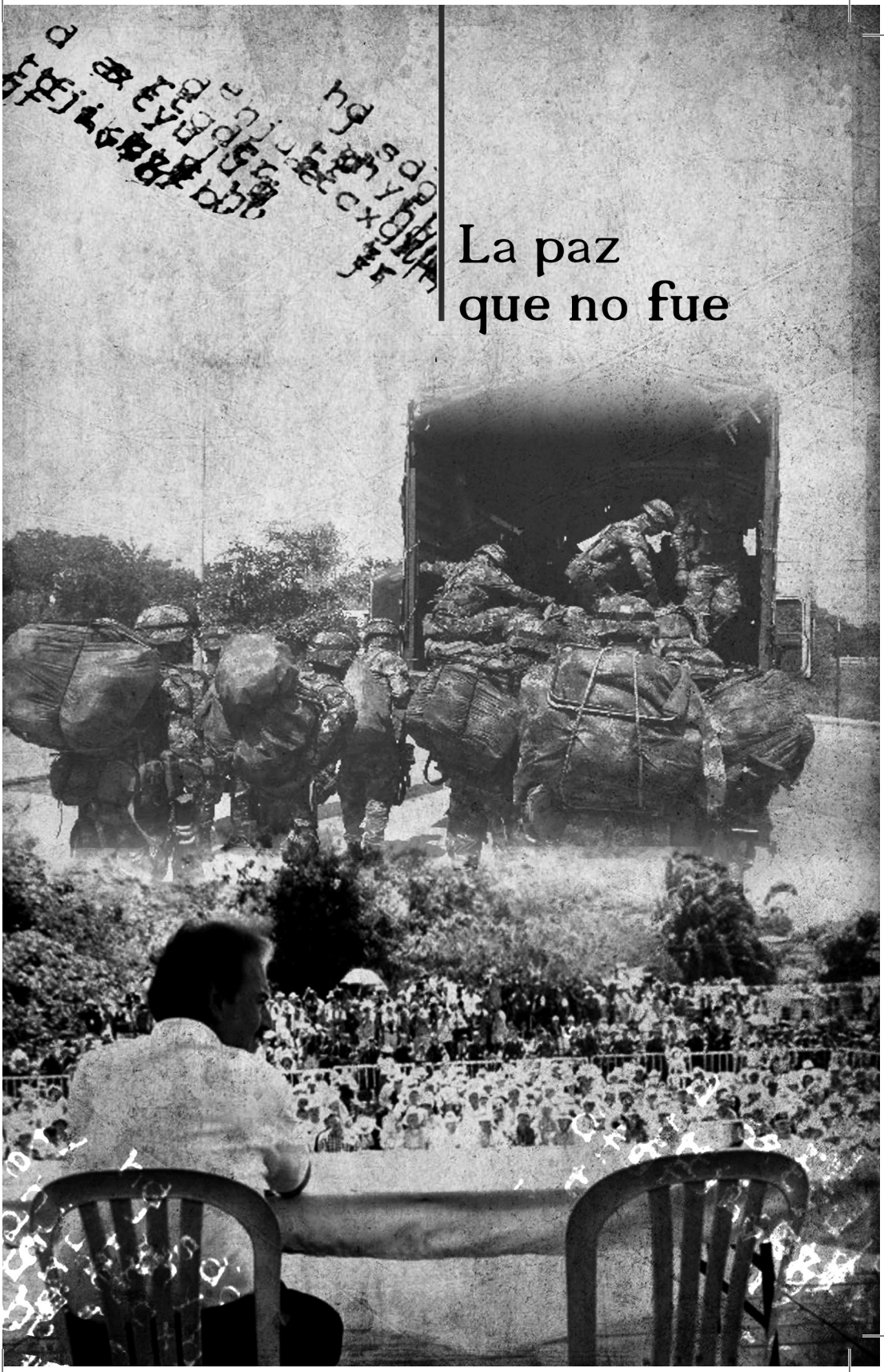
En tanto, se fortalecieron las fuerzas paramilitares con los Castaño Gil, Salvatore Mancuso, "Don Berna", "Macaco", "Jorge 40" y decenas de

criminales de similar laya, que actuaban en contubernio con miembros de las Fuerzas Armadas, caracterizados gremios de la producción y líderes políticos que buscaban conformar un contrapeso contra el poder de la guerrilla.

Durante su mandato fue asesinado uno de sus más grandes contradictores, el conservador Álvaro Gómez Hurtado, pero la conmoción social y política que se creyó habría de presentarse nunca se consolidó.

El periodo puede caracterizarse como un cuatrienio de oportunidades perdidas, principalmente por la debilidad política que lo acompañó y la innegable sujeción de toda la política estatal a posiciones claramente extorsionistas de los Estados Unidos, que aprovecharon tan precaria situación para imponer sus intereses. El Proceso 8000 supuso una debacle en el Congreso para la clase política y, en alguna medida, produjo una afectación al dañino contubernio que se había entronizado entre la mafia y amplios círculos del poder (Aguilera, 2012).

La paz que no fue



La crisis económica que azotó al mundo tras la cesación de pagos de Rusia y sus consecuencias en varios países asiáticos pronto llegó a Colombia y afectó, particularmente, al sistema hipotecario conocido como "UPAC" instaurado en el gobierno de Misael Pastrana. Le correspondería a su hijo, Andrés, asistir al colapso del mismo y a un descalabro que sacudió al país, en especial a las entidades financieras con terribles repercusiones en el aparato productivo.

Andrés Pastrana Arango se había enfrentado a Ernesto Samper en las elecciones de 1990; él, hijo del expresidente Misael y María Cristina Arango –a su vez hija de un candidato liberal, Carlos Arango Vélez, en las elecciones de 1942–, es un abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que ejerció como periodista –director del noticiero TV HOY y fundador de la revista Guion–, concejal de Bogotá en dos oportunidades, alcalde de la capital en 1988, y fue el fundador de una escisión del Partido Conservador llamada "Nueva Fuerza Democrática" que logró nueve senadores en 1990, incluida una curul para el propio Pastrana; estuvo secuestrado por Pablo Escobar.

Ya se había mencionado que Pastrana fue quien entregó a César Gaviria y su ministro Rafael Pardo las grabaciones que dieron origen al tristemente célebre Proceso 8000, que marcó el gobierno de Samper y se convirtió en su estigma imborrable. Es preciso traer a cuento, en un país donde impera la memoria selectiva, que las grabaciones incluían no solo a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela sino a Alberto Giraldo, el periodista estrella del diario conservador La República, especialmente afecto a las familias Ospina y Pastrana; también, que en la época se especuló que en las grabaciones también se hacía referencia a dineros del Cartel de Cali para la campaña de Pastrana y que un controvertido congresista del Quindío, llamado Carlos Alberto Oviedo Alfaro, quien fuera posteriormente asesinado, fue señalado de encausar dineros del Cartel del Norte del Valle –José Santacruz Londoño, Orlando Henao "el hombre del overol" y otros– hacia las toldas conservadoras.

Pues bien, Pastrana volvió a aspirar a la Presidencia y en el empeño derrotó, como candidato de su partido, a Juan Camilo Restrepo Salazar,

quien luego fue su Ministro, para luego derrotar al candidato liberal Horacio Serpa Uribe, tras alcanzar el 50,4 % de la votación.

Serpa, por cierto, había resultado salpicado en el Proceso 8000; se le señalaba de haber transportado dinero para la campaña del 94 en Sucre, en una avioneta y, si bien dio muestras de enorme lealtad a Samper, sus explicaciones en medio del escándalo nunca fueron convincentes.

Un episodio inclinó la situación hacia el nombre de Pastrana: las conversaciones sostenidas entre Víctor G. Ricardo, un escudero del candidato, y Manuel Marulanda Vélez "Tirofijo", el jefe máximo de las FARC, en las que Marulanda exhibía un reloj, regalo de Pastrana, como símbolo del inicio de unos potenciales diálogos de paz.

Como ha sido tradicional a lo largo del prolongado conflicto, la propuesta de Pastrana en procura de la paz levantó acre oposición y críticas de diversos sectores tildándola de ingenua y carente de una agenda coherente. Pese a que entonces se arguyó que la negociación había seguido parámetros inspirados en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, ya que se adujo que Pastrana había asistido por un año a clases en dicha institución, las negociaciones fueron un completo galimatías en el que tuvieron cabida temas sobre lo divino y lo humano, que se consignaron en un plan inicial de ciento diez puntos, y la zona se convirtió en el escenario de un evento mediático al que acudía toda suerte de personajes en plan de figuración, pero que no tenían nada que hacer en tan complejas negociaciones.

Un testigo presencial del momento en que Marulanda incumplió la cita a Pastrana para avanzar en los diálogos, señalaba con preocupación que los delegados del Gobierno y el propio presidente se preocupaban más sobre si su atuendo registraba bien en las tomas de las cámaras de CNN que de lo que se definía en la mesa de diálogo[15].

Muestras de la falta de conocimientos y preparación con las que se llevaron a cabo los diálogos se puede evidenciar en el hecho de que las más elementales reglas de la Teoría de Juegos y el llamado "dilema del prisionero", se escenificaron en la zona, pues al tiempo que las partes hablaban de paz y del silencio de los fusiles, las FARC reclutaban, se surtían de armas y del dinero de la coca en el Caguán, secuestraban, saqueaban territorios vecinos y extorsionaban, a más de establecer un poder incontestable en los cuatro municipios; no obstante, el Gobierno

15 Conversaciones con Carlos Antonio Vejarano.

también se preparaba para la guerra, adoptaba el Plan Colombia, fortalecía y dotaba al Ejército y recibía de Estados Unidos la base del poderío aéreo que se convertiría en la fórmula para inclinar la balanza en la confrontación con esta guerrilla.

El intento de negociación con el ELN suponía una zona de despeje parecida al Caguán, que se vio repudiada inmediatamente con un movimiento llamado "No al despeje" en el sur de Bolívar. Los paramilitares apoyaron el rechazo usando la fuerza para someter a comunidades campesinas partidarias del proceso; estos ya dejaban de tener un enfoque local de defensa contra la guerrilla para concebir un plan nacional político, económico y social. Poco a poco se delimitaban las aspiraciones y los objetivos; por un lado, una guerrilla de corte rural centrada en el campesinado y, por el otro, el latifundio ganadero, la agroindustria, la gran minería y los megaproyectos como el imaginado en la Altillanura (Ronderos, 2014).

La carencia de unas reglas de juego claras permitió que la zona de influencia de las FARC no se redujera al Caguán; de hecho, el vecino departamento del Tolima en ese periodo padeció veintiocho tomas guerrilleras que afectaron a veintiún municipios y se perdió toda sensación de tranquilidad, a tal punto que en la misma Ibagué se percibía el miedo de sus habitantes a trasladarse por vía terrestre, motivo por el que floreció el transporte aéreo.

Como consecuencia del fortalecimiento de la guerrilla, se presentó una reacción de parte de ciertos sectores empresariales y políticos que se tradujo en alianzas con organizaciones armadas, amparadas a la vez por sectores militares, para la creación y financiación de verdaderos ejércitos que sembraban la destrucción en amplias regiones a fin de disminuir el accionar guerrillero.

El Gobierno estadounidense aprovechó la situación para someter, aún más, al ejecutivo nacional a sus designios, mediante la conformación y la consolidación del Plan Colombia, en el que primaron no solo los intereses de grandes corporaciones de contratistas a cargo de los suministros, los equipos, las armas y las aeronaves, que al fin de cuentas fueron los que se lucraron de los millardos de dólares empleados, sino que se le impusieron al país políticas nocivas como la fumigación aérea con glifosato a los plantíos de coca y amapola en las zonas marginales, y se hizo cada vez más marcada la injerencia de Washington en las políticas internas.

La mencionada crisis económica hizo estragos: el producto interno bruto (PIB) se contrajo, no descendieron los índices de desempleo, miles de familias perdieron sus hogares, los intereses se dispararon hasta llegar a 70 % anual en el caso de los sobregiros en cuenta corriente y el dólar rozó los tres mil pesos con enormes y gravísimas consecuencias para la industria y el sector agropecuario, dependiente de las importaciones, y para las muchas empresas que se habían endeudado en el extranjero y tenían créditos en dólares; muchas de ellas sucumbieron y otro tanto hubo de recurrir a la reestructuración financiera al amparo de la Ley 550 de 1999.

El sistema UPAC colapsó, las corporaciones de ahorro y vivienda mutaron en bancos y numerosas entidades financieras desaparecieron al ser absorbidos por entes más grandes o por carecer de una masa crítica de patrimonio suficiente para sobrevivir en ese agitado ambiente. El país se anticipó en diez años a otra crisis que, con características similares, afectó a Estados Unidos y a Europa al finalizar el primer decenio del nuevo siglo, época en la cual Colombia y sus instituciones habían aprendido la lección con enormes sacrificios.

La paz estaba cada día más lejana, muy poco se volvió a saber de amnistías o indultos y los conflictos entre un sector de las Fuerzas Militares, al que adhirió el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y el Gobierno por su posición ante una posible negociación, provocó por enésima vez ruido de sables que se saldó con el retiro de Lloreda. Las acciones sangrientas e irreflexivas de las FARC, que suponían ir ganando de mano en la situación, condujeron a la ruptura abrupta de los diálogos el 20 de febrero de 2002, fecha en la que Pastrana estableció un plazo de veinticuatro horas para que la guerrilla evacuara la zona de distensión. Las posibilidades de un arreglo civilizado quedaron sepultadas mientras se abría paso la vía de las armas como única opción, determinación que habría de imponerse en las urnas en las siguientes elecciones.

Tras el colapso de los diálogos, Pastrana se escudó en conjeturas y teorías que buscaban matizar el precario manejo dado a la situación; mantuvo por años que había logrado desenmascarar a las FARC a los ojos del mundo quitándoles el carácter de héroes y defensores de los débiles y, además, hizo gala de su gestión en el montaje del Plan Colombia que, si bien había permitido fortalecer a las Fuerzas Armadas, lo había hecho con el sacrificio de la soberanía nacional en todos los órdenes (Garavito, 2016). Al finalizar el gobierno de Andrés Pastrana se vivía en el país una sensación de intranquilidad e inseguridad acuciadas por los efectos de

la crisis mundial que había afectado en manera grave a Colombia y, en particular, a los sistemas financiero y productivo. La situación afectaba tanto a la gente del campo como a las de las ciudades y Colombia, en palabras de la periodista Tina Rosenberg (2003), se había convertido en la "líder mundial en la producción de tribulaciones". No en vano la guerrilla de las FARC había modificado su estrategia para pasar a una guerra de posiciones y a la toma, con enormes contingentes, de grandes centros poblados, y el ELN continuaba con su rentable actividad extorsiva no solo de grandes empresas contratistas y de energía sino de las administraciones públicas en sus regiones de influencia. Las nuevas organizaciones de narcotraficantes habían mutado en bandas paramilitares o habían hecho pactos y conformado asociaciones con las más reconocidas bandas y con los políticos de las regiones donde desarrollaban sus actividades, con el apoyo de entidades estatales como gobernaciones, alcaldías, fuerzas militares y el mismo aparato judicial.

Se trataba de un proceso defensivo contra la acción guerrillera y con la intención de "refundar el país" de acuerdo con sus intereses, creencias y actividades que, por supuesto, contaba con el apoyo de empresarios que así protegían sus propiedades y encontraban una vía expedita para expandir sus operaciones y acrecentar sus patrimonios.

De nuevo el dominio territorial se acompañaba del poder político que, combinados, no se sometían a escrúpulo alguno para lograr su cometido. A la violencia guerrillera se contraponía la barbarie paramilitar y el resultado no era nada distinto a un desplazamiento forzado de proporciones bíblicas; sangre y muerte que podían equipararse con lo ocurrido en la Violencia de mediados del siglo XX. Así se conformaba una diáspora colombiana, interna y externa, que solo se parangona con la ocurrida en Sudán y en las instancias internacionales se empezaba a considerar a Colombia como un estado fallido, en trance de colapsar.

Los diálogos con las FARC habían fracasado, el ELN se había levantado por enésima vez de la mesa de negociaciones y la alianza de narcos y bandas paramilitares se había tomado extensas regiones a lo largo y ancho del país, ejerciendo el poder real en ciudades como Medellín, los departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Cesar, La Guajira y gran parte del Magdalena Medio, así como en grandes porciones del Meta, Casanare y Arauca.

Como se anotó, el Gobierno había sentado las bases del Plan Colombia, que luego mutó a Plan Patriota, lo que permitió el apoyo de Washington

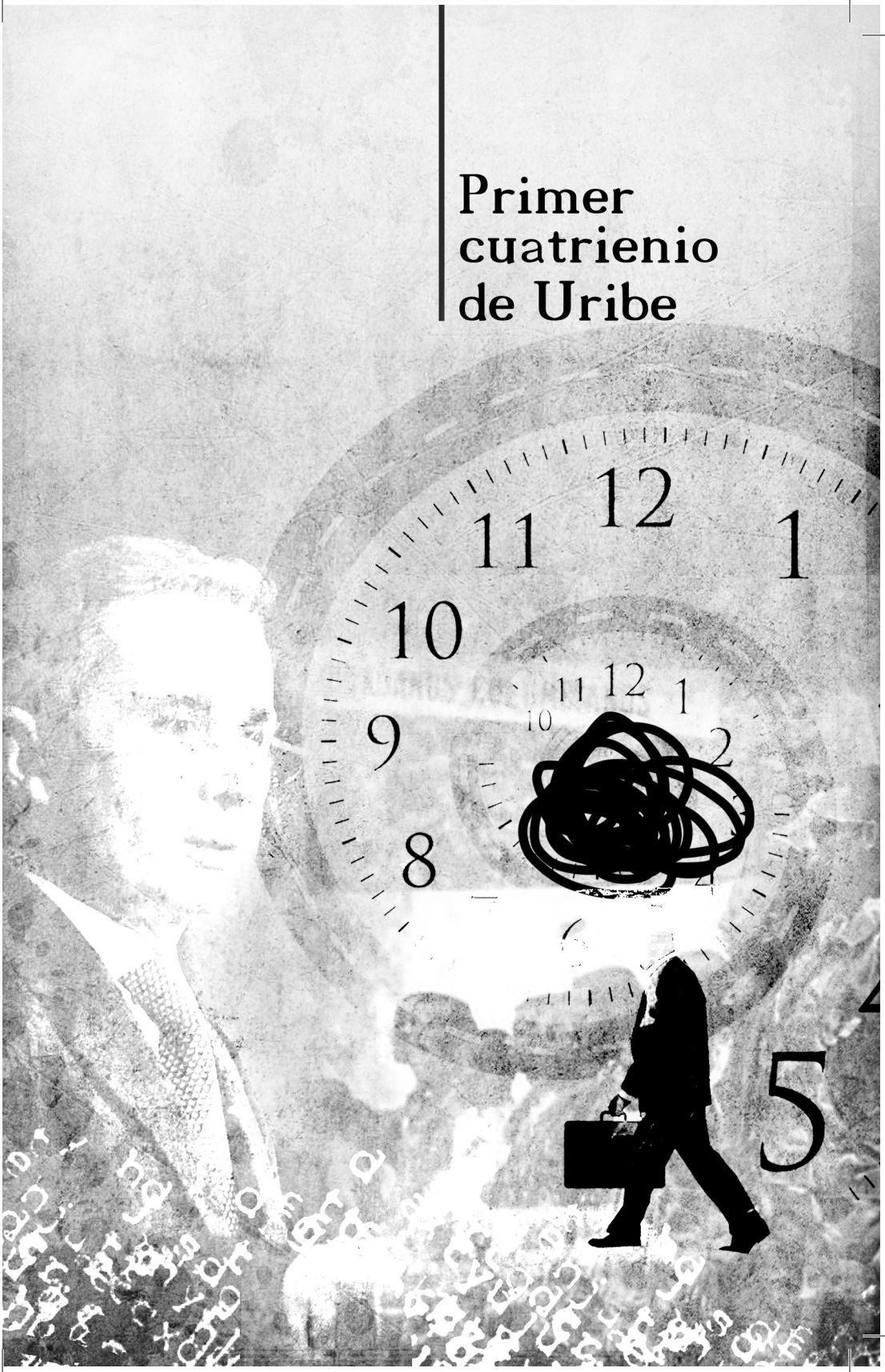
a través de cuantiosos recursos, el estratégico y decisivo apoyo aéreo y la tecnología que permitirían inclinar la balanza en el futuro próximo mediante continuas y cada vez más amplias cesiones de la soberanía.

En el decenio comprendido entre 1996 y 2005 la guerra había llegado a su máxima expresión: una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local y regional. Simultáneamente se formulaba un nuevo contrato social con fundamento en la propiedad privada y el mantenimiento del poder regional, que buscaba imponerse al Gobierno sin que este se opusiera contundentemente, dada su afinidad demostrada con los grupos que hicieron presencia en lo que vino a llamarse "pacto de Ralito"[16] (Garavito, 2006).

Todo este escenario fue presentado por el Grupo de Memoria Histórica (2013) en una radiografía cuya macabra estadística daba cuenta de que, entre 1980 y 2012, se habían producido 1982 masacres en Colombia, de las cuales 1166 había sido cometidas por los paramilitares, 343 por la guerrilla y 158 por la fuerza pública, a más de otras 295 de las que no se podía identificar al autor; en todas murieron 405 niños. Una estadística igualmente espeluznante hablaba de 5016 desapariciones en las que seis de cada diez correspondían a militantes políticos y sindicalistas, y que se complementaba con otra que daba cuenta de la existencia de 8578 secuestros perpetrados por las FARC y 7108 por el ELN.

16 Según declaraciones de Salvatore Mancuso en la audiencia llevada a cabo el 19 de diciembre de 2006.

Primer cuatrienio de Uribe



En tan precario escenario caló mayoritariamente la propuesta del senador antioqueño Álvaro Uribe Vélez sin importar mucho su origen, lazos y negocios familiares ni mucho menos controvertidas actuaciones en su desempeño como director de la Aeronáutica Civil, la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia (Garavito y Contreras, 2001).

En las elecciones de 2002, Uribe, a nombre de un movimiento llamado "Primero Colombia", del que formaba parte su primo el senador Mario Uribe, obtuvo el 54 % de los votos, derrotando al liberal Horacio Serpa, a Noemí Sanín del movimiento Sí Colombia, a Luis Eduardo Garzón del Polo Democrático Independiente, a Guillermo Lora del M-19 y a Ingrid Betancourt del movimiento Verde Oxígeno, quien para ese entonces estaba secuestrada.

Los lemas de su campaña y su gobierno fueron la "seguridad democrática", que buscaba recuperar la tranquilidad perdida en campos y ciudades, y la "confianza inversionista", más que todo la internacional, que se había puesto en duda por considerarse a Colombia como un Estado fallido; a fe que ambas se consolidaron, sin importar los métodos empleados, las concesiones dispensadas, las alianzas configuradas y, en muchísimas ocasiones, sin parar mientes en la Constitución y la Ley, circunstancias que fueron la impronta de este y el posterior mandato.

Muy temprano en su mandato, Uribe promovió una reforma laboral. En efecto, con la Ley 789 de diciembre de 2002 y con el prurito de facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, se procedió a reducir los costos para los empleadores. De esta manera se amplió la jornada laboral diurna llevándola hasta las diez de la noche, en detrimento del pago de las horas extras y las horas nocturnas trabajadas; de la misma manera, redujo el pago adicional en los domingos y festivos, así como la indemnización por despidos sin justa causa. Mientras los trabajadores vieron rebajada su remuneración, el efecto en la creación de empleo fue nulo, como lo señalaron años después el procurador Maya y los estudios de diversas universidades.

La dinámica imperante desde la elección de Uribe se tradujo en un enorme respaldo en las elecciones de 2003 para la conformación del Congreso, con un inmenso apoyo a la coalición de Gobierno. De nada valieron las advertencias ni hicieron mella los comentarios de connotados jefes paramilitares que auguraron la llegada al Congreso de más de la tercera parte de candidatos afectos al paramilitarismo o que se habían coaligado con los grupos armados al margen de la ley. Finalmente, se pudo establecer que los paramilitares habían incidido en la elección o tenían cercanías con un tercio de los congresistas, no menos de veintiséis senadores, doscientos cincuenta alcaldes y nueve gobernadores; de hecho, siete de los diez presidentes que tuvo el senado entre 2002 y 2012 fueron procesados por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares, y ocho de cada diez congresistas, investigados por sus relaciones con los paramilitares, formaron parte de la coalición de Gobierno.

Por supuesto, tal situación no resultaba asimilable por ciertos sectores de la comunidad nacional ni mucho menos por la comunidad internacional, por lo que el Gobierno se empeñó en establecer un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares; para el efecto, y tras fallidos intentos, logró reunir en Ralito, Córdoba, a los más reconocidos e influyentes líderes de los diferentes grupos. El país parece olvidar que las ofertas del Gobierno contemplaban la total impunidad para responsables de crímenes atroces y por ningún lado reconocía los derechos de las víctimas. No había, tampoco, intención de reconocer el origen, el desarrollo y la expansión del paramilitarismo ni mucho menos condicionamientos para devolver bienes y patrimonios habidos ilegalmente con base en el terror y la violencia. Pese a todas las ventajas ofrecidas a los que se sometieran, hubo quienes no comulgaron con la idea, como fue el caso de Vicente Castaño quien muy pronto abandonó la concentración y predijo lo que habría de ocurrir en fecha próxima, respecto de los compromisos del Gobierno (López, 2010).

Sin embargo, los primeros años fueron los más auspiciosos para los paramilitares, al punto de que en julio de 2004, muy tiesos y muy majos, precedidos por sus acuciosas representantes Eleonora Pinedo y Rocío Arias, llegaron al Congreso Salvatore Mancuso de las AUC, Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", del Bloque Central Bolívar, y Ramón Isaza de las Autodefensas del Magdalena Medio. Los dos primeros dieron discursos de cuarenta y cinco minutos cada uno e Isaza confió al secretario de la sesión la lectura del suyo de diez minutos de duración. Aunque la

flaca memoria de muchos ha hecho olvidar el episodio, debe recordarse que quienes se sometieron al ignominioso evento, 60 de un total de 268 congresistas, ovacionaron de pie los discursos de los invitados. El propio Duque, en audiencia pública en el Tribunal Superior de Bogotá el 2 de julio de 2014, recordó que había sido el propio presidente Uribe quien lo había urgido para que fuera al Congreso para justificar la existencia de las autodefensas y su trayectoria, como lo refiere María Teresa Ronderos (2014) en un libro de indispensable lectura titulado *Guerras recicladas*.

En tanto, las FARC, como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2002, se dieron a la tarea de amenazar a los funcionarios regionales, en particular a alcaldes y concejales, con el objeto de crear un vacío de poder que sería llenado por ellos en aquellas regiones y municipios donde tenían mayor radio de acción. Tales amenazas llevaron a que no menos de 236 alcaldías se convirtieran de hecho en virtuales, con alcaldes y concejales laborando lejos de sus jurisdicciones. De nuevo, la estrategia del grupo guerrillero repetía las Juntas Populares que funcionaron en las agrupaciones primigenias de las FARC en el sur del Tolima y el norte del Huila. El nombre dado a estas fórmulas fue el "nuevo poder" que quedó a cargo del Movimiento Bolivariano y del Partido Comunista Clandestino de Colombia.

Llegaron las elecciones de 2003 y la determinación fue la de sabotear sus resultados mediante acciones armadas contra los elegidos al punto de hacerlos renunciar, con enormes efectos en las zonas en las que mantenían su poderío como Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y Huila.

Ya se había dicho que la acción gubernamental había forzado a las FARC a regresar a su primitiva operación de insurrección popular, pues habían perdido terreno ante la ofensiva militar y mediática del Gobierno. Cada vez tomaba más fuerza la carencia de legitimidad de los insurgentes en la percepción del colectivo, a lo que se unía el desprestigio derivado de la vinculación de esta guerrilla al narcotráfico, a más de que su imagen venía en picada tras lo ocurrido en el Caguán. No quiere decir esto que hayan perdido su capacidad de reclutar en las zonas de su influencia o que no contara con los recursos para seguir enfrentando al Estado; pero su imagen y estructura política habían sido irremediablemente minadas.

La pregunta, entonces, tiene que ver con el contraste entre el aparente éxito tenido por los paramilitares para apoderarse de estructuras y poder regional, y llegar a adquirir un importante número de posiciones en el Congreso, habiendo actuado permanentemente con el soporte

económico del narcotráfico. La diferencia estriba en que la guerrilla no pudo aliarse con las élites políticas y económicas que tenían la manera de acoger y encubrir a quienes lavaban el dinero y proyectaban la actividad al apoderamiento de los recursos públicos a través de la corrupción[17].

Como se advirtió unos párrafos atrás, los gobiernos de Uribe gozaron de una prerrogativa muy especial: no importó lo que hiciera o dejara de hacer, ni cómo lo hiciera, el sentir mayoritario siempre lo acompañó sin beneficio de inventario.

No hubo un sector que reflejara con más fuerza esta singular característica que el correspondiente a las obras públicas, las licitaciones y las adjudicaciones de concesiones. De hecho, durante los ocho años de gobierno estuvo al frente de estas tareas, con omnímodo poder, una persona de la absoluta confianza del presidente, que le acompañó desde sus épocas de gobernador de Antioquia: el ingeniero Andrés Uriel Gallego.

Pocos lo recuerdan, pero el país fue repartido entre unos pocos conglomerados cuya principal característica consistía en la multifuncionalidad, pues sin importar las pocas o muchas destrezas, la capacidad demostrada o la eficacia de sus gestiones anteriores, les fue adjudicada toda suerte de tareas, canonjías, exclusividades y concesiones. Los mencionados grupos resultaron aptos y dotados para hacer aeropuertos, operar empresas de distribución y generación de energía, construir viaductos, túneles y autopistas; servir de interventores a quienes se les había encomendado la preparación y fabricación de alimentos para estudiantes y niñez vulnerable, levantar cárceles, recoger y disponer de basuras y desechos, proporcionar alumbrado público, operar el transporte masivo, distribuir el gas natural, manejar acueductos y todo aquello que corresponde al Estado o se hace con los recursos del erario y las contribuciones de los ciudadanos. No se piense que las adjudicaciones estuvieron basadas en comprobada idoneidad o experiencia demostrable y satisfactoria; seguramente imperaron otras exigencias que no saltan a la vista; pero, lo más lamentable es que los resultados, con muy contadas excepciones, fueron de una precariedad que asombra, condujeron a un incalculable deterioro del erario o se concluyeron años después de lo pactado y con muy poco apego a las condiciones establecidas en los contratos.

17 Esta es la teoría que plantea el libro Y refundaron la patria (López, 2010).

Cada región puede exhibir sus razones de queja o los orígenes de su inexplicable silencio. En lo que corresponde al Tolima, son múltiples los señalamientos y los reclamos, y muy pocas las realizaciones. Al respecto, se puede destacar, sin temor a equivocación, el desastre de la doble calzada Bogotá- Girardot –que sin duda ha perjudicado a todos los colombianos sin excepción– y añadir a ese memorial la entrega de la Electrificadora del Tolima a un conglomerado que del tema no podía exhibir antecedentes de ninguna especie y que, un decenio después, se encuentra en mora de cumplir con los compromisos de calidad y confiabilidad a los que adhirió; igual puede decirse del aseo y el procesamiento de basuras en la capital del Departamento –bastante controvertida desde su adjudicación–. A lo anterior, es menester añadir los nulos resultados del cacareado "Plan 2500", por medio del cual se construirían en el país dos mil quinientos kilómetros de carreteras, y que en los frentes de trabajo en el Tolima, entregados a contratistas seleccionados e impuestos desde el Ministerio, ninguno cumplió su cometido, quedando las obras abandonadas e inconclusas y esfumándose los dineros dispuestos y entregados. En aras de la verdad, en el Tolima se ejecutó una de las pocas realizaciones del sector que se puede mostrar con orgullo y satisfacción, entregada de acuerdo con el cronograma y con las especificaciones acordadas: la doble calzada Flandes-Ibagué que, para satisfacción colectiva, continuará en las mismas manos en su extensión hasta el municipio de Cajamarca. Por cierto, los ocho años se fueron en promesas respecto de los aeropuertos de Ibagué, Mariquita, Planadas, y el proyecto de aeropuerto alterno de carga en Flandes significó un gran fiasco. Igual destino tuvieron el Triángulo del Tolima, la navegación en el Magdalena y la reconstrucción de los ferrocarriles.

Más paradójico resulta que mientras muchos de los contratistas que depredaron a su amaño en el Tolima, y en muchos otros sitios del país, fueron los mismos que se confabularon en el carrusel de contratos en Bogotá, y que hayan sido solo los funcionarios de la capital, quienes fueron sus cómplices, los procesados y encarcelados –con plena justicia–, en tanto que a los otros, del orden nacional, no les sucedió nada y ni siquiera se les puede mencionar sin caer en la ira de los intocables.

No debe pensarse que el silencio y la falta de reclamos por lo sucedido sea producto únicamente de la abulia de la ciudadanía, de las regiones o de los líderes que actúan en las mismas, no obstante haya algo de eso, pues lo que tiene un enorme peso en la paradójica actuación es el carácter vindicativo del Gobierno, para el cual cualquier reclamo o investigación a

sus más cercanos partidarios y colaboradores convertía inmediatamente a quien lo hiciera en objeto de una persecución de la cual participaban todos los organismos del Estado, sin limitación a las acciones autorizadas por la ley. Las confrontaciones con magistrados, investigadores, periodistas, políticos opositores y sindicalistas tuvieron siempre la acción de los organismos del Estado como elemento de amedrentamiento y venganza. El presidente Uribe y su círculo más cercano siempre han confundido la crítica legítima con el terrorismo.

El extremo caso de anomia que afecta a Uribe y que se explica por su particular condición y por los negocios de su familia próxima desde su padre, sus hermanos, primos e incluso sus hijos, se hace presente en las actuaciones del político, al punto de que se ha llegado a transmitir esa misma irregular condición a cientos de miles de colombianos que les impide ver lo que acontece y las anómalas circunstancias en las que se desempeña el ciudadano en mención (Garavito y Contreras, 2001; Castillo, 1987).

Pocos le atribuyen alguna responsabilidad en la precaria situación en la que se encuentra sumido el sistema nacional de salud o en la indiferencia con la que se asumió el hecho de que Saludcoop se apoderara de parte sustancial de los recursos del sector. De la misma manera, se soslaya su responsabilidad en el disparatado manejo del conflicto con Nicaragua por las zonas marítimas o la forma como Colombia fue quedando aislada en la región y en el mundo por su política internacional –si hasta el propio presidente manifestó que le hizo falta un semestre para invadir a Venezuela–, ni para qué hablar de la obcecación por entregar a los Estados Unidos no menos de tres bases militares en suelo colombiano o la adhesión irreflexiva a la invasión a Iraq.

So pretexto de la seguridad democrática y su manejo mediático se escenificaron episodios que todavía no se evalúan en su demencial dimensión, como el que vino a llamarse "los falsos positivos", en el que más de tres mil quinientos jóvenes, provenientes en su totalidad de sectores pobres y excluidos de la sociedad, fueron desaparecidos y asesinados en acciones que se realizaban para aparentar triunfos contra la subversión que se recompensaban con ascensos, permisos y condecoraciones. El propio presidente desestimó los reclamos de las familias aduciendo que los desaparecidos "no estarían cogiendo café".

Se hicieron burdos montajes para hacer aparecer entregas de guerrilleros y paramilitares cuando todo correspondía a bien financiadas

trapisondas por medio de las cuales se reclutaba a drogadictos, ladrones y vagos, con armas suministradas por jefes paramilitares o fabricadas sobre la marcha para formar parte de un orquestado espectáculo. Si hasta se hizo aparecer un avión varado por más de tres años como parte del armamento y la dotación entregados.

En el Tolima tuvieron lugar dos de los más sonados montajes: el primero, la entrega en Alvarado de una desconocida estructura guerrillera llamada "La Gaitana", en la que los supuestos combatientes llegaron todos estrenando botas y uniformes, luciendo cabelleras recién lavadas con champú y anteojos de marca, y cuyas armas habían sido suministradas por un jefe paramilitar de apellidos Mejía Múnera; el segundo, de similar producción, por medio del cual supuestos integrantes del Bloque Tolima de los paramilitares entregaban sus armas y se desmovilizaban; de nuevo, eran en su mayoría jóvenes desempleados a los que se les prometía un ingreso por un largo periodo y mantenimiento en instalaciones oficiales. Ambos tinglados tienen procesados a los oficiales protagonistas del espectáculo y al mismo Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

De igual forma, y so pretexto de la "confianza inversionista", se realizó una auténtica feria de extensos territorios del país, muchos de ellos en zonas de reservas y montañas, para la exploración y producción de nocivos proyectos mineros. Se estableció una desproporcionada e inequitativa rebaja de obligaciones fiscales, pactadas a treinta y más años, con grandes empresas extranjeras que de esta manera podían girar más utilidades a sus casas matrices en detrimento de los recursos oficiales. Asimismo, se levantó el régimen de control de precios para productos farmacéuticos de primera necesidad, lo que se tradujo en enormes perjuicios para las finanzas del sistema de salud nacional y el presupuesto de las familias; pero, como se dijo, todo esto con el beneplácito de grandes sectores.

Como se vino saber más tarde, fueron varias las regiones en las que se conformó una perversa alianza entre mafiosos, paramilitares, uniformados, administradores y sectores de la justicia que pretendieron apoderarse del Estado. En el Tolima, por cierto, se vivió el fenómeno con singular intensidad muy a comienzos del siglo: en la confabulación participaron desde alcaldes, narcotraficantes, paramilitares, hasta oficiales de la Policía y directivos de la Fiscalía. Sin pudor alguno, y para escándalo de la ciudadanía, se le concedían al más destacado mafioso el usufructo de bienes del municipio de Ibagué; la Policía, junto con el Estado Mayor departamental, facilitaba la actuación del "fuera de la ley" y le brindaba protección; ninguno de los procesos contra miembros de

la parapolítica progresaba en la Fiscalía, las denuncias por el accionar de los paramilitares eran desconceptuadas públicamente por las autoridades militares y caracterizados jefes políticos; con el apoyo de los depredadores, imponían su voluntad en el territorio a sangre y fuego –en San Luis, Valle de San Juan, Guamo y Fresno– y saqueaban el erario en diversas fuentes como la Dirección Nacional de Estupefacientes. Este estado de cosas llevó al gobernador de la época a denunciar la situación en círculos de la capital y organismos internacionales, y en la Policía Nacional se designó un equipo investigador que, no sin riesgo para quienes lo conformaban y sus familias, consiguió desmontar la trinca: el Estado Mayor de la Policía en el departamento fue relevado, sus integrantes fueron retirados del servicio, el jefe mafioso fue extraditado y condenado en Estados Unidos y, en Colombia, el director de fiscalías fue radicado en otro departamento y un senador y un representante perdieron su posición y fueron condenados por la Corte Suprema (Higuera, 2013).

Por cierto, Guillermo Alfonso Jaramillo, el gobernador que propició el desmantelamiento del montaje de corrupción logró hacer realidad varias iniciativas que en otras manos habían significado costosos fracasos, pero que bajo su influencia se llevaron a cabo con economía de recursos y calidad en las ejecutoria: el principal hospital de la región, el Federico Lleras Acosta, que se encontraba en estado calamitoso fue gradualmente recuperado, iniciando con el servicio de urgencias y la atención de enfermedades cardiovasculares hasta la dotación de una espléndida sección de neonatología, y la refacción y el equipamiento de las instalaciones. De la misma manera, en tiempo record y con utilización espartana de recursos, se construyó el Museo de Arte del Tolima adonde se llevó lo que quedaba de la colección de propiedad del departamento que había sido saqueada paulatinamente por manos aviesas. También promovió la primera Asamblea Constituyente Regional, en la que participaron todos los municipios y los diferentes sectores del departamento, con enorme impacto en el compromiso ciudadano y la vinculación del colectivo.

El presidente y su entorno fueron construyendo una artificial situación que lo hacía aparecer como el único capaz de sacar adelante el país, de manera que se comenzó a promover la reforma a la Constitución para permitir la reelección, pese a que de esta manera se alteraba el delicado equilibrio de poderes diseñado por la Carta de 1991. "Solo hay que modificar un articulito", decía uno de los validos del régimen. Dentro de la estrategia que habría de conducir a la reelección, tuvo

especial importancia el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el que fue esencial la aprobación, el 25 de julio de 2005, de la Ley 975 llamada "de Justicia y Paz", que había sufrido un tormentoso tránsito en el Congreso ante la presentación de un proyecto alternativo que limitaba las ventajas extraordinarias que contemplaba el proyecto gubernamental. Sin embargo, la aplanadora del Gobierno se impuso, en gran medida, gracias al apoyo de congresistas que, dos años más tarde se sabría, tenían componendas y repartijas con los paramilitares por las que sesenta de ellos fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia.

Puede señalarse que el gobierno de Uribe, en medio de su megalomanía, creyó que podía hacer su voluntad y privilegiar a quienes resultaban más afines a sus preferencias políticas, desestimando los derechos de las víctimas y de la ciudadanía, sin tener en cuenta la evolución de la legislación y el derecho internacionales; de tal manera, la desmovilización puesta en práctica ofreció a las fuerzas paramilitares una corta estadía en cárceles que más se asemejarían a centros recreacionales como el de La Ceja, para regresar tras ese breve lapso a sus haciendas –muchas de ellas usurpadas con violencia– y hacerlas aparecer como colonias penales. Adicionalmente, prometió remuneración a los desmovilizados y el apoyo al montaje de grandes proyectos agroindustriales como los plasmados en las comunicaciones de los hermanos Castaño Gil y sus asociados.

De hecho, los grandes proyectos agroindustriales, que fueron promocionados con empresas nacionales y extranjeras, hacían caso omiso de la forma utilizada por los empresarios para apoderarse o adquirir las tierras, a más de que los privilegiaba en las formas de explotación y despreciaba a los campesinos reduciéndolos a la condición de jornaleros no propietarios (ver tabla 4).

Tabla 4. Inflación y crecimiento económico de 2003 a 2013

	2003	2004	2005	2006
Inflación	6,49	5,5	4,85	4,48
Crecimiento Económico	3,9	5,3	4,7	6,7

Nota: Adaptado de *Boletín de indicadores económicos*, Banco de la República, 2016, pp. 11 y 4.

Sin embargo, Uribe seguía navegando en la cresta de la ola y, pese a la reticencia y a la desconfianza de algunos jefes paramilitares, continuó una masiva desmovilización que se apoyaba en la participación de numerosos

postulantes a desmovilizados, que nada tenían que ver con los grupos armados, como ocurrió con decenas de trabajadores de las múltiples haciendas de los Castaño Gil. La fementida Ley no obligaba a decir la verdad ni a reparar a las víctimas de los paramilitares para acceder a una justicia transicional con penas alternativas, lo que aceleró las desmovilizaciones y fomentó el fervor popular por la reelección. Y, pese a la oposición de algunos sectores que avizoraban la catástrofe que habría de presentarse y prevalidos de canonjías, extorsiones y cohecho que luego llevaría a la cárcel a dos ministros y al Secretario de la Presidencia, la reforma pasó en el Congreso y Uribe fue reelegido con el 62,23 % de la votación, más de siete millones de votos, en tanto que la segunda votación fue lograda por el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático, con 2,4 millones de votos que representaban el 22,1 %, y, en un distante tercer lugar, el liberal Horacio Serpa Uribe con apenas 1,4 millones de votos, o sea el 11,08 %. La reforma fue posteriormente refrendada por la Corte Constitucional. A lo anterior se añade que el Congreso quedó conformado por noventa representantes y setenta senadores afectos a sus propuestas, muchos de los cuales alcanzaron sus curules mediante alianzas con los grupos paramilitares que les facilitó la toma del poder a sangre y fuego en las regiones (Jaramillo, 2014).

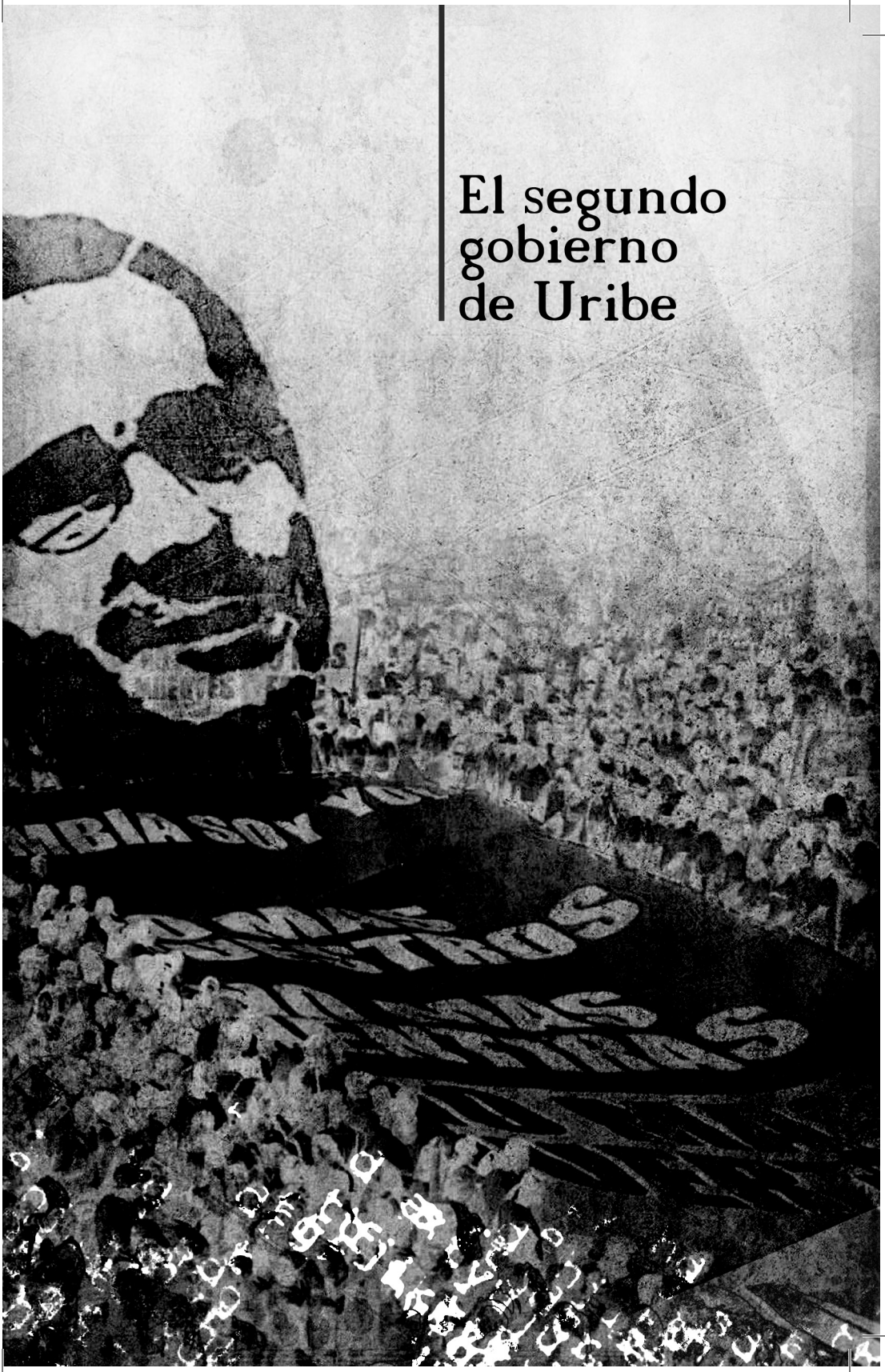
Las prevenciones de los jefes paramilitares principiaron a confirmarse cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles varios artículos en los que se daban amplias prerrogativas a los desmovilizados y les impusieron exigencias de verdad, justicia, reparación y compromiso de no volver a delinquir.

Puede afirmarse, sin temor a equivocación, que entre el final del gobierno de Samper, el de Pastrana y la primera administración de Uribe el conflicto colombiano se convirtió en una confrontación por las tierras, el territorio y el poder local. Ya no se guardaban las apariencias ni se empleaba el discurso para generar adeptos; ahora imperaba la fuerza y la barbarie a través de la amenaza, la agresión, la muerte y el desplazamiento forzado.

La expansión del paramilitarismo, ante la mirada pasiva, cuando no el abierto apoyo de los Gobiernos, significó la aparición de un tercer actor en la confrontación con una contribución en muerte y desolación similar a la generada por la guerrilla, lo que se tradujo en un enorme poder político que contaba con la tercera parte del Congreso –veintiséis senadores–, doscientos cincuenta alcaldes, y nueve gobernaciones en las elecciones de 2005. En total 1,7 millones de votos (Romero, 2007).

Las FARC no se quedaron estáticas y de cuarenta y ocho frentes, y cinco mil ochocientos combatientes, en 1991, pasaron a sesenta y dos frentes y veintiocho mil combatientes en 2002, con presencia armada en el 60 % de los municipios colombianos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

El segundo gobierno de Uribe



Apenas iniciado el segundo periodo de Uribe, cuando ya no les era de mucha utilidad y sí de gran desprestigio su cercanía, los paramilitares fueron trasladados al centro de recreación de una caja de compensación en La Ceja. La premisa para el traslado fue que "continuaban delinquiendo", cosa que se sabía cuándo estaban recién aposentados en Ralito. Los jefes no las tenían todas consigo: Carlos Mario Jiménez, "Macaco", supremo jefe militar y político en Risaralda, había sido confinado a un barco en el Atlántico y luego extraditado a Estados Unidos. Los mandos medios estaban protagonizando una rebelión contra quienes se habían desmovilizado, a causa de la cual ya habían sido asesinados Miguel Arroyave, en el Llano, y Vicente Castaño, que se había evadido de La Ceja. El asunto tomó un cariz más complejo con la detención de Diego Murillo Bejarano, el poderoso "Don Berna", amo y señor de Medellín, quien fue enviado a la cárcel de Itagüí contra todos los compromisos. La copa se llenó y los jefes "paras" se jugaron los ases al anunciar que habrían de revelar la verdad sobre sus asociaciones, cómplices y socios. El Gobierno les salió adelante y "empacó" a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, a la cúpula compuesta por Hernán Giraldo, el sátiro de la Sierra Nevada; Salvatore Mancuso, vecino del Ubérrimo y quien había arrasado con Montería, Córdoba y Norte de Santander; Rodrigo Tovar Pupo, "Jorge 40", lugarteniente del anterior y depredador del Cesar, Magdalena y Atlántico; así como a Ramiro "Cuco" Vanoy y "Pablo Sevillano" (López, 2010).

El intento de las FARC por obtener estatus de beligerancia ante la comunidad internacional había fracasado completamente y ese capítulo vino a cerrarse total y definitivamente, el 4 de febrero de 2008, con una histórica marcha en la que participaron más de un millón de personas en contra de las actividades del grupo guerrillero. La marcha fue organizada por las redes sociales, los medios y las alcaldías de cientos de municipios. El evento marcó el punto máximo del desprestigio y la deslegitimación de las FARC, derivada del accionar errático del grupo guerrillero que se basaba en el secuestro, las "pescas milagrosas", la extorsión, la vinculación al narcotráfico, la instalación de minas antipersonas y el irrespeto al medio ambiente que se hacía evidente con los atentados a los oleoductos y la afectación del entorno.

Por cierto, en mucho contribuyó a esa visión colectiva el extendido fenómeno mediático por medio del cual se enfatizaba en el carácter bárbaro del actuar de la guerrilla y en mitigar las similares salvajadas cometidas por las bandas paramilitares o ni siquiera referirse a ellas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Como muchas otras veces en el pasado, las FARC perdían la sintonía con la evolución del país y su gente, en aspectos como el del avance educativo, las aspiraciones de movilidad social que generaba ese ascenso en el nivel educativo general, la aversión a la violencia y al narcotráfico, y el incremento en amplios segmentos de la sociedad de la participación en actividades religiosas, en especial por el aumento en la feligresía de las iglesias cristianas.

Parafraseando a María Teresa Ronderos (2014), hay que decir que las crisis financieras en Colombia son también recicladas y, como la ocurrida en el gobierno de Julio César Turbay, siendo superintendente bancario Francisco Morris Ordóñez, en 2008, se estaba incubando una de insospechable magnitud: en el sur del país un imaginativo sujeto de nombre David Murcia Guzmán estaba construyendo la más gigantesca pirámide financiera; un esquema *Ponzi* que funcionaba mediante la venta de tarjetas prepago a las que se les reconocían rendimientos inverosímiles que iban siendo atendidos con puntualidad; se decía, en ese entonces, que allí habrían utilizado muchos de los dineros obtenidos por las FARC en sus extorsiones y sus negocios de droga, pero nunca se ha probado.

La organización funcionaba con las iniciales del nombre de su creador y propietario, DMG, y cada día atraía a más clientes y se expandía territorialmente. Las colas de incautos en las ciudades donde funcionaba la pirámide daban la vuelta a la manzana. Los crecientes negocios despertaron la codicia de más proveedores que ante el volumen de las transacciones se vincularon masivamente con el esquema que, por cierto, en la misma región había dado lugar a una competencia dentro de la misma línea, y si se quiere más audaz, que se llamó "DRFE"[18].

Murcia se percató pronto que debía asociarse con gente que tuviera experiencia jurídica y financiera, a más de vincularse con personajes con buenas relaciones sociales y políticas que le permitieran expandir sus negocios, les sirvieran de escudo ante investigaciones de los organismos de control y le abrieran las puertas a círculos a los que el astuto empresario nunca habría tenido acceso.

18 DRFE: Sigla de Directo Rápido Fácil y Efectivo, liderada por Carlos Alfredo Suárez.

Su actividad ya no estaba concentrada en los ingenuos y rústicos clientes del Putumayo y Nariño; ahora, el poder de su dinero le permitía codearse con miembros de familias acomodadas con negocios tan singulares como la comercialización de yates de lujo y el "manejo " de modelos y artistas, en cuyos hogares no causara sorpresa que un miembro llegara con quinientos millones de pesos en efectivo y los escondiera en la bodega de casa. Para el efecto, conformó varias empresas como un canal de televisión por cable llamado Body Channel, una agencia de modelos, Factory Models, y otra especializada en moda, DMG Fashion. Pronto encontró personalidades afines en el mundo de la política y la corrupción, lo que le permitió seguir aumentando sus negocios a pesar de los crecientes señalamientos y las advertencias que provocaba la pirámide.

Los hijos del presidente encontraban en los artistas, las modelos y las figuritas de sociedad un campo con personajes más atractivos y sofisticados que los rudos finqueros de Córdoba, los recicladores de basura, los artesanos fabricantes de pulseras y los serios caballeros de las grandes empresas que les dejaban participar para asegurar la concesión de sus zonas francas. Se dio comienzo a una ininterrumpida farra, que iba de ciudad en ciudad y de evento social en evento social, con los artistas de moda y las modelos más cotizadas. En algo sí competían Murcia y los jóvenes Uribe: en quién llevara más guardaespaldas a las festividades.

El ingreso de Murcia a las grandes ligas y su generosidad atrajo a otros tiburones como lo hermanos Berrío Villarreal de Cartagena, que tenían una transportadora de valores llamada "Transval", en la que movilizaban las grandes sumas en efectivo que se depositaban en DMG. De allí salió una multimillonaria contribución a la triunfadora campaña de Joaquín Berrío a la Gobernación de Bolívar y la donación del transporte de los documentos con las firmas recolectadas para promover el referendo que permitiría una nueva reelección del presidente.

La prodigalidad y la influencia de Murcia crecían. Entre los favorecidos estuvo el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, quien recibió una gratificación de doscientos millones de pesos por "hacerse el de la vista gorda" ante el escándalo que provocaba la pirámide.

El cielo era el límite; los dineros y las actividades de DMG superaron fronteras y llegaron al paraíso fiscal que cultivaba el presidente Ricardo Martinelli en Panamá. Allí arribaba el dinero a cántaros; anclaban los yates y se parqueaban los Lamborghini, los Maserati y los Ferrari de Murcia y sus "amiguitos". Eran los tiempos en que allí, en Panamá, se

lavaban los dineros, se hacían los grandes negocios, se interceptaban las comunicaciones de magistrados, políticos y opositores y, más tarde, se les brindaba asilo a los corruptos de naciones vecinas. Valdría la pena averiguar quiénes eran los socios de la empresa a la que se le adjudicó el negocio de la recolección y disposición de basuras de Ciudad de Panamá.

Forzado el Gobierno colombiano, hubo de pronunciarse acerca del escándalo y Murcia en su megalomanía cometió el mismo error que los paramilitares en abril y mayo de ese año: retó al presidente prevalido de sus nexos con Tomás y Jerónimo, lo que condujo a la inmediata intervención de DMG, el 17 de noviembre de 2008, la que se complementó con igual acción en Panamá y más tarde en Estados Unidos a propiedades del grupo que figuraban a nombre de algunos de los testaferros de Murcia.

El descalabro de DMG y DRFE afectó a miles de ingenuos y avaros en todo el país. Miles de millones se sumieron en un foso sin fondo y todavía quedan muchos lamentando haber vendido sus propiedades o haberse endeudado con tan fantasiosas historias.

Murcia fue extraditado y muchos de sus familiares fueron perseguidos en el exterior y condenados. Como en la crisis de la época de Turbay, hubo quienes recibieron livianas condenas, mientras que otros continuaron impávidos sus carreras de caballeros de industria. Como se dijo atrás, los procesos se reciclaban y la anomia se regaba en el territorio.

Desde el principio del mandato se comenzó a agitar la consigna de que tampoco en ese segundo periodo se podría culminar la obra de Gobierno concebida; por esa razón, se desarrolló un movimiento a favor de una nueva reelección y la necesaria e indispensable reforma. Los agitadores de la iniciativa propusieron la realización de un referendo que no se concretó, hasta cuando la Corte Constitucional falló en contra de la nueva reforma, por lo que por interpuesta persona en la figura del controvertido Ministro de Agricultura se pretendió mantener el poder para Uribe y sus partidarios, a lo que vino a añadirse un programa que empleó cuantiosos recursos, supuestamente destinados a favorecer a sectores campesinos afectados por la puesta en funcionamiento de diversos tratados de libre comercio y que terminaron en los bolsillos de acaudalados hacendados, controvertidos empresarios y reinas de belleza y modelos, afectos y cercanos al potencial heredero del presidente Uribe, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien destinó una buena porción de recursos oficiales a la agencia de publicidad que servía a su campaña y, coincidentemente, también al programa Agro

Ingreso Seguro (AIS). El funcionario fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y se encuentra prófugo; quien le sucedió en el cargo, Andrés Darío Fernández Acosta, continuó con los controvertidos programas y con su pendenciera actitud.

Las cifras macroeconómicas del período mencionado indican la evolución y desempeño de la economía nacional, y pueden contrastarse con las de otros gobiernos (ver tabla 5).

Tabla 5. Inflación y crecimiento económico de 2007 a 2010

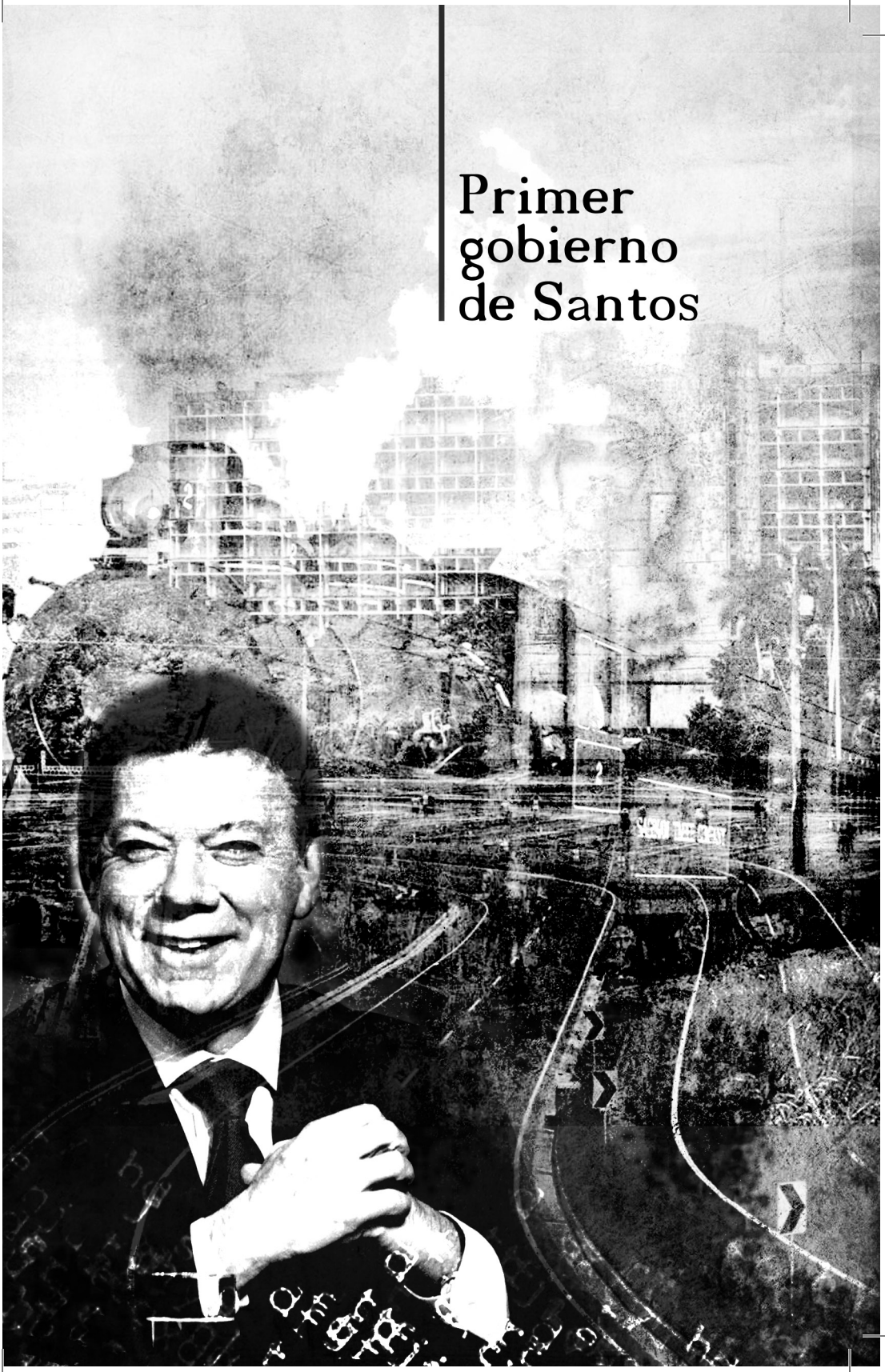
	2007	2008	2009	2010
Inflación	5,69	7,67	2,0	3,17
Crecimiento económico	6,9	3,5	1,7	4,0

Nota: Adaptado de *Boletín de indicadores económicos*, Banco de la República, 2016, pp. 11 y 4.

En tanto, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, se enfrentó públicamente con el Gobierno Nacional, ya que el ejecutivo pretendió hacer aparecer como asignados nuevos recursos, a través de una operación en la que en realidad se reconocía al Tolima el pago por las inversiones hechas por el departamento en la Hidroeléctrica de Río Prado. Tras un forcejeo, el Gobierno reconoció la impostura y procedió a apoyar los programas regionales, principalmente uno que pretendía la consolidación del sur del departamento mediante inversión en distintos sectores, en una región que había sido inexplicable y consuetudinariamente olvidada. En efecto, y tal vez por la concentración en los municipios del sur de las fuerzas guerrilleras y las simpatías con los insurgentes, una zona que tiene la misma composición geológica de su contraparte de la cordillera como lo es la compuesta por los municipios de Risaralda y Caldas, de gran producción agropecuaria, había padecido el abandono que se traducía en la carencia de carreteras, servicios públicos indispensables y una infraestructura escolar precaria. El Gobierno seccional se empeñó en una ambiciosa construcción de vías que no solo conectaba a los municipios del extremo sur sino que compensaba las equivocaciones del fracasado Plan 2500; a la vez, realizó un programa extendido de construcción de colegios modernos dotados de laboratorios, bibliotecas, amplios y aireados salones y campos deportivos, que en los casos de ubicaciones rurales proporcionaron a los maestros allí destacados alojamiento decente y comodidades mínimas que hicieron más atractivas estas instituciones a docentes con mejores hojas de vida y capacidades. Puede decirse que con ese conjunto de inversiones se

recuperó, en parte, del olvido y la exclusión tradicionales lo que, sin duda, repercutió en resultados electorales posteriores. Por cierto, la tarea para involucrar económica y socialmente esa extensa y feraz zona al resto del departamento está lejos de culminarse.

Primer gobierno de Santos



Juan Manuel Santos Calderón, que había sido ministro en las administraciones de Gaviria, Pastrana y Uribe, y, además, había sido el último colombiano que tuvo la dignidad de Designado, fue seleccionado como el candidato presidencial de una alianza de fuerzas en la que se unieron las que conformaban parte de la coalición del gobierno de Uribe, y a las que se añadió el Partido Liberal.

En la primera vuelta, el 30 de mayo de 2010, Santos obtuvo el 46,56 % de los votos, por lo que hubo de enfrentarse en una segunda vuelta, el 20 de junio, a Antanas Mockus de la Alianza Verde. En esta ocasión obtuvo un poco más de nueve millones de votos, el 68,9 % de los depositados.

Desde su posesión, el presidente reveló los acercamientos con la guerrilla de las FARC, que tenían el propósito de entablar conversaciones en procura de alcanzar la paz. Dichos diálogos se habrían de realizar en La Habana con la actuación, como garantes, de los Gobiernos de Cuba y Noruega, e intervendrían como facilitadores los Gobiernos de Venezuela y Chile.

Se acordó negociar en medio de las confrontaciones y se definió una agenda de cinco puntos a la que debían circunscribirse las conversaciones. Se estableció un parámetro inamovible por medio del cual "(...) nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado" (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 331).

En el mismo sentido, y con el apoyo decidido del Partido Liberal en el Congreso, este que se había convertido en elemento esencial para la coalición de Gobierno, pasó la llamada "Ley de víctimas y restitución de tierras" (2011), habida cuenta de que Colombia es, desde hace años, el segundo país del mundo en número de refugiados ya que, según la ACNUR[19] (2016), hay casi siete millones de desplazados en el territorio colombiano. Por cierto, las dos propuestas, la del diálogo y la de las víctimas, marcaron la ruptura de Santos con su antecesor y la oposición consiguiente de Uribe y sus seguidores.

19 Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –En términos genéricos: Agencia de la ONU para los refugiados–.

Para completar los motivos de disensión, el 14 de junio de 2012, el Congreso aprobó el llamado "Marco Jurídico para la Paz", por medio del cual se le proporcionaban al Gobierno las herramientas para proseguir con las negociaciones y establecer condiciones extraordinarias para procesar a los miembros de la guerrilla, en lo que ha de considerarse como una "justicia transicional".

Ya se había hecho mención del fracaso que significó la gestión en infraestructura en los ocho años de gobierno de Uribe Vélez. El contraste con la primera administración de Santos fue marcado ya que, mientras la inversión entre 2002 y 2010 fue de 2,2 billones de pesos anuales en promedio, con Santos se pasó a 7,2 billones de pesos anuales, y, si bien se había anunciado la construcción de mil kilómetros de carreteras de doble calzada, finalmente se realizaron seiscientos diez kilómetros.

La ambiciosa tarea en cuanto hace a restitución de tierras tuvo un lento comienzo a pesar de haberle dedicado tiempo y dinero al propósito. De las 3,5 millones de hectáreas –que incluían dos millones de hectáreas de titulación– a través de más de treinta mil solicitudes recibidas, solo se llegó a conseguir mil trescientas sentencias definitivas. En el desarrollo de la red ferroviaria o de navegación fluvial no se logró casi nada (Forjando Futuro, 2015).

Como aconteció con la violencia de mediados del siglo pasado, existe en las comunidades el temor a hablar sobre lo ocurrido ante la presencia de los depredadores que continúan actuando y amedrentando a las víctimas. Con decir que, más de medio siglo después, los sobrevivientes todavía callan por cuenta de los horrendos hechos del pasado, situación que se repite en las zonas afectadas por más recientes actuaciones de quienes imponen su poder a sangre y fuego. En el Tolima, en municipios como San Luis y Valle de San Juan, en los que los actos violentos y las masacres se sucedieron a comienzos del siglo XXI por grupos paramilitares aliados a congresistas de la región, todavía la gente no se atreve a hablar abiertamente sobre lo sucedido, pese a que estos últimos perdieron sus curules y fueron condenados a prisión; algo similar a lo que ocurre en Fresno en donde la presencia paramilitar se mantiene con apoyo del poder político local (Higuera, 2013).

En tanto, los índices macroeconómicos fueron destacados: el desempleo, que por años se mantuvo por encima del de los otros países suramericanos, llegó a un dígito por primera vez en cuatro lustros; el crecimiento económico alcanzó un importante promedio de 4,8 % en

el PIB a lo largo del cuatrienio, con especial referencia en el crecimiento del sector agropecuario, que fue de 5,2 %, un notorio avance respecto de las cifras negativas del pasado reciente.

La inversión extranjera directa (IED), jalonada por las inversiones en petróleo, carbón y energía, llegó a diecisiete millardos de dólares anuales, una cantidad sin antecedentes que, por cierto, fue factor decisivo en la continuada apreciación del peso respecto del dólar (ver tabla 6).

Tabla 6. Inflación y crecimiento económico de 2011 a 2014

	2011	2012	2013	2014
Inflación	3,73	2,44	1,94	3,66
Crecimiento económico	6,6	4,0	4,3	4,9

Nota: Adaptado de *Boletín de indicadores económicos*, Banco de la República, 2016, pp. 11 y 4.

El lema de las locomotoras como motores del crecimiento tuvo destacada concreción en cuanto hace a la construcción de vivienda, particularmente en los programas de vivienda gratuita –de las cuales se entregaron 64 000 de un presupuesto de 100 000– y vivienda subsidiada, lo que jalonó al sector a un crecimiento superior al 17 %.

No hubo similar suceso en sectores claves como salud, justicia o educación, pues las respectivas y necesarias reformas propuestas fracasaron en su trámite por diversas circunstancias; aunque, es preciso resaltar que en el cuatrienio se reactivó el control de precios de medicamentos esenciales y componentes del POS, que había sido desmontado en el gobierno de Uribe y que había significado un incremento enorme en las erogaciones del sistema nacional de salud, a más de incalculables perjuicios al presupuesto de los hogares colombianos. El Ministerio elaboró un comparativo del costo de los medicamentos en diferentes países para confirmar las monumentales diferencias que los laboratorios multinacionales establecían para sus productos en el mercado colombiano.

Durante el periodo se conoció el fallo del diferendo de límites con Nicaragua de parte del Tribunal de La Haya, que se saldó con la pérdida de 75 000 hectáreas de plataforma marítima y el aislamiento de varias islas e islotes de soberanía colombiana. Las distintas administraciones recientes se culparon entre sí por cuenta del precario resultado y se endilgaron negligencia en el manejo y la defensa del interés nacional.

Este periodo fue prolífico en paros y bloqueos de vías por cuenta de los reclamos de agricultores e indígenas. En tales demandas se presentó una insólita identidad entre sectores políticos hasta entonces verdaderamente antagónicos: el más ortodoxo sector de la izquierda y la extrema derecha. Coincidió la agitación con las campañas electorales al punto de poner en riesgo la aspiración de la reelección presidencial de Santos. Sectores agrícolas, como los cafeteros y los cultivadores de papa, coincidieron en tiempo y lugares con los reclamos reivindicativos de los indígenas por tierras.

En la región tolimense continuaban surgiendo enfoques particulares que pretendían aliviar las deficiencias y las limitaciones del departamento y de las opciones de sus habitantes. Una de ellas fue la concreción del llamado "Contrato Plan del Sur" (2013) firmado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Departamento, en cabeza de Luis Carlos Delgado Peñón, que afecta positivamente a la zona en un programa de orden social enfocado a superar necesidades básicas insatisfechas, conectar los municipios entre sí y con los más importantes mercados y realizar obras de infraestructura y dotación de elementos básicos para las comunidades del sur del departamento. Más tarde se buscó replicar similar agrupación de recursos, objetivos y disponibilidades con un programa parecido en los municipios del norte. No obstante, un proyecto como el del Triángulo del Tolima y su distrito de riego no se concluye y todavía falta medio billón de pesos de inversión para que cumpla su cometido.

La Universidad de Ibagué (2015), en su propósito de integrar la región, estableció el programa de *Paz y Región* por medio del cual, y como requisito indispensable para obtener el grado, los estudiantes de último semestre de las diferentes disciplinas deben realizar un trabajo en alguno de los cuarenta y dos municipios vinculados al proyecto por medio del cual, y acompañados por un equipo multidisciplinario que incluye estudiantes de otras carreras, ofrece apoyo a la gestión municipal en la formulación, la ejecución o el monitoreo de proyectos de desarrollo local. De esta manera se produce una mayor vinculación de los universitarios con la región, se forjan amistades y alianzas imperecederas, y se contribuye al progreso de los municipios beneficiados. Se espera que, en la medida en que se solucionen algunos problemas de orden público, se logre la vinculación de los cuarenta y siete municipios del departamento y se expanda el programa para beneficio de todos (Universidad de Ibagué, 2015).

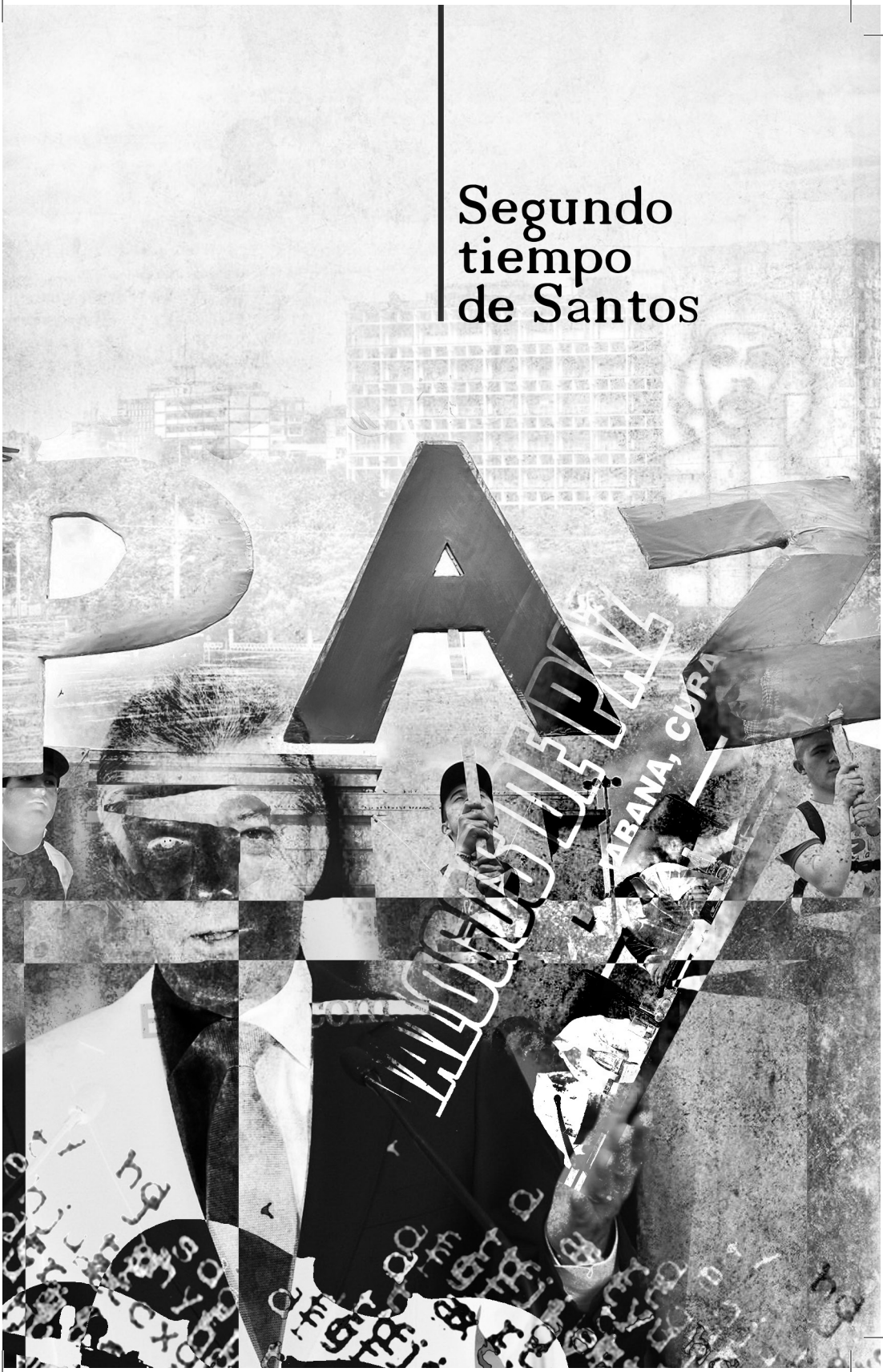
Las contradicciones políticas entre el presidente Santos y su antecesor se agudizaron en el periodo, a lo que contribuyó enormemente el proceso seguido al exministro Andrés Felipe Arias, del Partido Conservador, que terminó en condena, lo que obligó al sector liderado por Uribe a conformar un nuevo partido y a recurrir a la figura del exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, para aspirar a la Presidencia.

A la primera vuelta, el 25 de mayo de 2014, acudieron cinco aspirantes y la mayor votación la obtuvo el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, con 3,7 millones de votos, seguido por el presidente Santos, con 3,3 millones de votos; un empate técnico en el tercer lugar entre la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez y la del Polo y la Unión Patriótica, Clara López, con 1,9 millones de votos y, en un último lugar, el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, con un poco más de un millón de votos. Para la segunda vuelta, el 15 de junio, la votación favoreció a Santos, quien obtuvo el 50,95 % de la votación –7,8 millones de votos– y casi seis puntos porcentuales por encima de Zuluaga que obtuvo 6,7 millones de votos.

De esta manera quedaba establecido el panorama político, ya que en las elecciones del 9 de marzo se había configurado un Congreso con mayoría para la coalición de Gobierno partidaria de las negociaciones de paz. También se confirmó la consolidación de un sólido bloque de diecinueve senadores y doce representantes tras la figura del expresidente Uribe (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2014).

La Comisión de Conciliación Nacional, presidida por el cardenal Rubén Salazar Gómez, con ocasión de los Diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC, publicó un *Acuerdo Nacional* logrado tras intensas conversaciones y debates en el país, entre 2009 y 2010, por medio del cual se definió una propuesta de ocho mínimos para "la reconciliación y la paz" en Colombia, que fue presentada al Gobierno y acogida en algunos apartes del *Plan de Desarrollo 2010-2014*. En el país se han conformado ocho comisiones de Conciliación Regional, que a la vez promueven las Mesas Municipales de Conciliación, en las diferentes poblaciones (Comisión de Conciliación Nacional, 2013).

Segundo tiempo de Santos



De entrada, el reelegido presidente parecía dispuesto a recuperar el tiempo perdido y así lo demostró en la configuración de su gabinete y en la publicación de los tres pilares que habrían de guiar su segundo término: "Paz, equidad y educación".

En cuanto a educación, ha esbozado un ambicioso programa que pretende convertir al país en la nación más educada de América Latina para 2025, con becas para los mejores alumnos en las mejores universidades, establecimiento de jornada única en los planteles oficiales y un esfuerzo enorme en la construcción de infraestructura y dotación para cumplir el cometido.

Anuncia mayores inversiones en los programas de vivienda gratuita y subsidiada, a más de facilidades en la financiación de vivienda nueva y usada, y un ambicioso plan de infraestructura con más de cuarenta y siete billones de pesos para autopistas de doble calzada, a lo que se añade un programa de fortalecimiento de la navegación en el río Magdalena y recuperación de los ferrocarriles.

Pero, por sobre todo, este Gobierno muestra un gran empeño en hacer avanzar las conversaciones con los grupos guerrilleros, a fin de obtener la paz, un propósito que ha tenido grandes crisis y desalentadores altibajos pero que, a agosto de 2016, continuaba pese a las vicisitudes.

Tras un proceloso tránsito en el Congreso, la administración concluyó el proceso de aprobación de una reforma al equilibrio de poderes que suprime entidades inanes y dominadas por la corrupción, como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Superior de la Judicatura, a la vez que elimina la reelección de los más importantes cargos del Estado y pone coto al llamado "carrusel", en el que los funcionarios rotaban por diferentes cargos con el apoyo de quienes habían sido elegidos con su voto y promoción.

En el plano internacional, se ha recibido apoyo de casi todas las naciones para el proceso de paz, aunque continúan las fricciones con Venezuela por límites, con Panamá por razones de control de dineros y con Nicaragua por las zonas marítimas y el canal que el país

centroamericano se propone construir con inversión de China. De otro lado, se definió la supresión de la visa para los colombianos para la zona Schengen, un incremento en los aportes de los Estados Unidos a los programas de gobierno y una relación más cercana con Ecuador.

En lo que compete al departamento, la Comisión de Conciliación y Paz Regional Tolima fue creada en septiembre de 2014 y constituida con delegados de nueve municipios. Esta Comisión ha realizado foros en cinco municipios tolimenses y promovido la conformación de las Mesas Municipales de Paz; simultáneamente, ha seleccionado cinco de los mínimos nacionales divulgados por la Comisión de Conciliación Nacional que más se aproximan a la particular situación del Tolima y la idiosincrasia de la gente de la región, y ha enfatizado en el papel protagónico que la cultura y el llamado "buen vivir" ha tenido, tiene y tendrá en los procesos de paz y conciliación. Así como las regiones tienen prioridades particulares, lo mismo ocurre con los municipios, pues las vivencias, los padecimientos y las soluciones se antojan muy propias de las experiencias vividas. Así, mientras en Dolores, que fue tomada en tres ocasiones por la guerrilla en los primeros años del nuevo siglo y sus habitantes abusados, la prioridad es la calidad y cobertura de la educación pública; en tanto, en Icononzo, que fue escenario de las luchas por la tierra y afectada por las disputas entre paramilitares y guerrilla, la mayor preocupación consiste en lo que ha de ocurrir con el agua y con la intervención anunciada al río Magdalena; mientras en Coyaima los desvela la conclusión del distrito de riego y su impacto en la población indígena.

Los procesos de restitución de tierras marchan a mínima velocidad a pesar del empleo de millonarios recursos. A la oposición contra la gestión de los funcionarios se combina la presencia de grupos armados, que no dudan en asesinar y destruir, y las actuaciones judiciales de empresas y ciudadanos con equipos jurídicos dispuestos a todas las artimañas. De hecho, en los tres años de funcionamiento de la Ley, las entidades ejecutoras han empleado 836 millardos de pesos y lo restituido apenas alcanza a 263, es decir, una tercera parte de lo empleado, pues tan solo han sido compensadas 1534 hectáreas y 46 000 restituidas. Se esperaban 360 000 solicitudes y se han presentado 73 000, de las cuales solo han sido resueltas por los jueces el dos por ciento (Forjando Futuro, 2015).

Continúan las protestas campesinas que, seguramente, subieron en agitación en la medida en que se acercaron las elecciones de octubre en las que se definieron gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales.

El panorama aparece confuso tras una corta temporada en la que se agitó una optimista esperanza. Sin embargo, existe consenso en que esta ha de ser la última oportunidad de alcanzar una precaria y parcial paz que termine una guerra que ha arrebatado el futuro y los sueños a varias generaciones.

Aún, con notoria oposición de caracterizados sectores, se acepta que todos los esfuerzos han de ir acompañados de un proceso por medio del cual se conozca la verdad sobre lo sucedido y la responsabilidad que le cabe en esa tragedia colectiva a distintos sectores de la sociedad. Por dura que sea, debe erradicarse la impunidad que se produce por la ausencia de sanción moral, el silencio, la negación, la minimización y la banalización de los hechos y, algo realmente asombroso, la asignación de culpa a las víctimas.

Debe existir el convencimiento de que lo que viene, con o sin paz, ha de lograrse con el trabajo, la generosidad y el compromiso de todos, pues habrá que reconstruir comunidades a través de la recuperación de la memoria, así como exaltar y reconocer la decencia, el valor y la entereza moral de quienes se han enfrentado a los crímenes y vilezas de los bárbaros.

Ha de entronizarse la memoria como reclamo y pedagogía social y reparadora. Decir lo que otros no pudieron, no pueden o no saben decir. Sin duda, construir la paz ha de ser tremendamente costoso, pero mucho más costoso resulta mantener la guerra. Debe definirse el pasado como prólogo de todo lo que es menester hacer, hasta cuando en las mejillas de los colombianos las lágrimas sean de risa y alegría.

Bibliografía

Aguilera, M. (2012). Refundemos la nación: perdonemos a delincuentes políticos y comunes. *Análisis Político*, *25* (76), 5-40.

Álvarez, J. (Ed.). (2005). *Memorias de un proceso económico y social 1964-2004*. Ibagué: ADT.

Aprile-Gniset, J. (1991). *La Crónica de Villarrica*. Bogotá, D. C.: ILSA.

Arrubla, M., Bejarano, J. A., Cobo, J. G., Jaramillo, J., Kalmanovitz, S., Melo, J. O. y Tirado, A. (1978). *Colombia hoy*. Bogotá, D. E.: Siglo XXI.

Behar, O. (1985). *Las guerras de la paz*. Bogotá, D. E.: Planeta.

Bejarano, J. A. (Ed.). (1990). *Construir la paz: Memorias del seminario "Paz, democracia y desarrollo"*. Bogotá, D. E.: Presidencia de la República - Cerec.

Blanco, C. (Ed.) (1999). *Facetas ibaguereñas*. Ibagué: Editorial Aguasclaras.

Bonilla, V. D. (1966). Tolima 1: Biografía del primer proyecto de la Reforma Agraria colombiana. *Tierra: Revista de Economía Agraria*, 1, 6-81.

Braun, H. (2008). *Mataron a Gaitán*. Bogotá, D. C.: Planeta.

Buitrago, J. del C. (2006). *Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: El Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1958*. Ibagué: Universidad del Tolima.

Cardona, R. (Ed.). (1973). *Las migraciones internas*. Bogotá, D. E.: Ascofame.

Castaño, L. Á. y Melo, A. (2005). *La encrucijada del milenio*. Ibagué: ADT.

Castillo, F. (1987). *Los jinetes de la cocaína*. Bogotá, D. C.: Documentos Periodísticos.

Castillo, G. (1971). *En defensa de mi raza: Manuel Quintín Lame*. Bogotá, D. E.: Rosca de Investigación y Acción Social.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *Guerrilla y población civil: Trayectoria de las FARC 1949-2013*. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional.

Comisión de Conciliación Nacional. (2013). *Propuestas de mínimos para la reconciliación y la paz en Colombia*. Bogotá, D. C.: CCN.

Fajardo, D. (1979). *Violencia y desarrollo: Transformaciones sociales en tres regiones del Tolima*. Bogotá, D. E.: Suramericana.

Franco, E. (1955). *Las guerrillas del Llano*. Caracas: Universo.

Galvis, S. y Donadio, A. (2002). *El jefe supremo: Rojas Pinilla en la violencia y en el poder*. Medellín: Hombre Nuevo.

Garavito, F. (2006). *Paramilitar para paramilitares*. Bogotá, D. C.: FICA.

Garavito, F. y Contreras, J. (2001). *El Señor de las sombras*. Bogotá, D. C.: Oveja Negra.

García, G. (2000). *Vivir para contarla*. Bogotá, D. C.: Norma.

González, F. E. (2014). *Poder y violencia en Colombia* (Colección "Territorio Poder y Conflicto"). Bogotá, D. C.: Odecofi-Cinep

Grupo de Memoria Histórica –GMH. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, D. C.: CNMH-DPS.

Guzmán, G., Fals, O. y Umaña, E. (1962). *La violencia en Colombia*. Bogotá, D. E.: Tercer Mundo.

Higuera, A. K. (2013). *Etnografía del olvido: La masacre del Neme. Tolima y las políticas de la memoria en Colombia* (Tesis de grado para optar al título Magíster en Antropología). Universidad de los Andes. Bogotá, D. C.

Jaramillo, C. E. (1983). *Ibagué: conflictos políticos de 1930 al 9 de abril*. Bogotá, D. C.: Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán.

Jaramillo, J. (2014). *Pasados y presentes de la violencia en Colombia: Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011)*. Bogotá, D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.

Lara, P. (1986). *Siembra vientos y recogerás tempestades: La historia del M-19, sus protagonistas y sus destinos*. Bogotá, D. E.: Planeta.

López, C. (Ed.). (2010). *Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá, D. C.: Debate.

Martínez, G. (2006). *Hablan los generales: Las grandes batallas del conflicto colombiano contadas por sus protagonistas.* Bogotá, D. C.: Norma.

Matallana, J. J. (1984). *Paz o guerra: Alternativa del 84*. Bogotá, D. E.: Antares.

Pecaut, D. (1997). *Política y sindicalismo en Colombia*. Bogotá, D. C.: La Carreta.

Pecaut, D. (2001).*Orden y violencia: Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953*. Bogotá, D. C.: Norma.

Pineda, R. (1962). El impacto de la violencia en el Tolima: El caso del Líbano. Bogotá, D. E.: Universidad Nacional de Colombia.

Restrepo, L. (1986). *Historia de una traición*. Bogotá, D. E.: Plaza y Janés.

Rincón, O. y Ruiz, M. (Eds.). (2002). *Bajo todos los fuegos: Los periodistas en el conflicto colombiano*. Bogotá, D. C.: Proyecto Antonio Nariño.

Romero, M. (Ed.). (2007). *Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá, D. C.: Corporación Nuevo Arco Iris - Intermedio.

Ronderos, M. T. (2014). *Guerras recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, D. C.: Aguilar.

Salazar, A. (2003*). No nacimos pa'semilla*. Bogotá, D. C.: Cinep.

Sánchez, G. y Meertens, D. (1983). *Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la violencia en Colombia*. Bogotá, D. E.: El Áncora.

Secretaría de Agricultura del Tolima. (1985). Efectos económicos de La Violencia. *Revista de la Contraloría General del Tolima*. Segunda época. 1.

Tirado, Á. (1976). *Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia*. Bogotá, D. E.: Instituto Colombiano de Cultura.

Tirado, Á. (2014). *Los años sesenta: Una revolución en la cultura*. Bogotá, D. C. Debate - Penguin Random House.

Tovar, H. (1999). *Colombia: Droga, economía, guerra y paz*. Bogotá, D. C: Planeta.

Universidad de Ibagué. (2015). *Informe del Consejo Superior y la Dirección de la Universidad de Ibagué al Consejo de Fundadores*. Ibagué: Universidad de Ibagué.

Vargas, G. (1972). *Colombia 1854: Melo, los artesanos y el socialismo*. Bogotá, D. E.: La Oveja Negra.

Cibergrafía

Acto legislativo No. 01. (31 de julio de 2012). "Marco jurídico para la paz" [versión PDF]. Recuperado de Presidencia de la República [sitio web]http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf

Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR. (2016). *Situación Colombia*. Recuperado de http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/colombia/

Banco de la República. (2016). *Boletín de indicadores económicos* [versión PDF]. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf

Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia 1991*. Recuperado de Alcaldía Mayor de Bogotá [sitio web] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

Decreto No. 1110 de 1928: Por el cual se destinan zonas para colonización. *Diario Oficial*, Año LXIV, No. 20832, del 2 de julio de 1928. Versión en línea disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1225682

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. (2016). *Estadísticas por tema*. Recuperado de http://www.dane.gov.co/

Departamento de Planeación Nacional –DPN. (2010). *Plan Nacional de 2010-2014*. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx

Hace 25 años. (31 de marzo de 2009). Investigan al Banco Vaticano. *El Tiempo*, Archivo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4930388

Isaza, J. F. (18 de mayo de 2016). Predecible. *El Espectador*, Opinión. Recuperado de http://www.elespectador.com/opinion/predecible

Forjando Futuro. (Junio, 2015). Análisis de 1.000 sentencias de restitución de tierras: Falsas víctimas, no! Lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe. Semana (separata) [versión PDF]. Recuperado de http://forjandofuturos.org/documentos/publicacion-restitucion-de-tierras_falsas-victimas-no_1000-sentencias_junio-2015_fundacion-forjando-futuros.pdf

Ley 1 de 1968: "Ley de Tierras" (por la cual se introducen modificaciones a la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Social Agraria). Recuperado de Sistema Único de Información Normativa –SUIN Juriscol [sitio web] http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1786063

Ley 7 de 1908: Por la cual se aprueba un Convenio entre Colombia y España. Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa [versión PDF]. Recuperado de http://190.24.134.101/corte/wp-content/uploads/subpage/exequatur/Instrumentos%20Internacionales/LEY%20NUMERO%207%20DE%201908.pdf

Ley 30 de 1986. "Estatuto Nacional de Estupefacientes" (Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986). Recuperado de Alcaldía de Bogotá [sitio web] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774

Ley 81 de 1993: "Ley de sometimiento a la justicia" (derogada por la Ley 600 de 2000). *Diario Oficial*, No. 41.098, del 2 de noviembre de 1993. Versión en línea disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0081_1993.html

Ley 89 de 1890: Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Recuperado de Alcaldía de Bogotá (sitio web) http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920

Ley 200 de 1936: Sobre el régimen de tierras. Recuperado de Alcaldía de Bogotá [sitio web] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16049

Ley 550 de 1999: Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales. *Diario Oficial*, No. 43.940 del 19 de marzo de 2000. Versión en línea disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html

Ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del

Código Sustantivo de Trabajo. *Diario Oficial*, No. 45.046 del 27 de diciembre de 2002. Versión en línea disponible en http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0789_2002.htm

Ley 975 de 2005: "Ley de Justicia y paz" [versión PDF]. Recuperado de https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf

Ley 1448 de 2011: "Ley de víctimas y restitución de tierras". *Diario Oficial* No. 48.096 del 10 de junio de 2011. Recuperado de Congreso de la República de Colombia [sitio web] http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html

Machado, A. (2009).*Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: De la Colonia a la creación del Frente Nacional* [versión PDF]. Recuperado de http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/Politica-de-Tierras-en-Colombia.pdf

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2006). *Universidad del Tolima*. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-93349.html

Presidencia de la República de Colombia, Gobernación del Tolima y Departamento Nacional de Planeación –DNP. (2013). *Contrato Plan de la Nación con la Región Sur del Departamento del Tolima: Acuerdo Estratégico para el Desarrollo del Territorio* [versión PDF]. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Acuerdo%20Estrat%C3%A9gico%20con%20Componente%20Programatico%20Sur%20del%20Tolima%20%2030.01.13.pdf

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2014). *Elecciones 2014: Elecciones de presidente y vicepresidente de la República 25 de mayo y 15 de junio.* Recuperado de http://www.registraduria.gov.co/-Elecciones-2014,1995-.html

Rosenberg, T. (3 de julio de 2003). In Colombia, Muckrakers Have Become Scarce. *New York Times (Editorial Observer)* [en línea]. Recuperado de http://www.nytimes.com/2003/07/03/opinion/editorial-observer-in-colombia-muckrakers-have-become-scarce.html

Santos, E. (1991). La contra-amnistía asoma la cara. En O. Morales (Comp.), *Papeles para la paz* (capítulo C, segunda parte) [versión en línea]. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/papeles/indice.htm

Lista de entrevistas

Aguilera Peña, Mario (profesor de la Universidad Nacional de Colombia): Miembro del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales–Iepri y asesor del Grupo de Memoria Histórica (entrevista realizada en diciembre de 2014).

Alvarado Gaitán, César Augusto (abogado): Notario segundo de Ibagué y funcionario del Palacio de Nariño en el gobierno de Betancur (entrevista realizada en marzo de 2015).

Castro Carvajal, Carmen Luisa (abogada): Funcionaria de la Corporación Reiniciar (entrevista realizada en febrero de 2015).

Díaz, Deogracias (campesino de Villarrica): Miembro de la tercera generación de "luchadores por la tierra" (entrevista realizada en 2015)

Galeano Arbeláez, Héctor Manuel (ingeniero Agrónomo): Gestor cultural e historiador (entrevista realizada entre 2014 y 2015).

García Camargo, Pedro Martín (biólogo y químico): Ambientalista y veedor ciudadano en Icononzo, Tolima (entrevista realizada en marzo de 2015).

Londoño, Julio Alberto (ingeniero): Voluntario en la operación de sistemas y registro de víctimas en la tragedia de Armero (entrevista realizada en julio 2014).

Martínez, Marcos Antonio (administrador de la ESAP): Secretario de la Comisión Temática del Tolima en los diálogos del Caguán (entrevista realizada entre 2014 y 2015).

Mietke, Stephan (miembro de la Secretaría de la Comisión de Conciliación Nacional): Delegado de Concern Internacional a la Pastoral Social (entrevista realizada en febrero de 2015).

Pacheco, Carlos (conductor): Trabajó por diecisiete años para Rafael Parga Cortés (entrevista realizada en 2014).

Parra, Isidro (campesino de Villarrica): Miembro de la segunda generación de "luchadores por la tierra" (entrevista realizada en 2015).

Payá, Ovidio (indígena páez): Gobernador, en varias oportunidades, del Cabildo Páez de Gaitania –entrevista filmada– (entrevista realizada en mayo de 2016).

Prada Fernández, Gustavo (veterinario zootecnista en Armero): Miembro del Comité Ambiental del Tolima (entrevista realizada en junio de 2015).

Quiroga Carrillo, Venus: Directora de la Corporación Reiniciar Seccional Tolima (entrevista realizada en febrero de 2015).

Trujillo Ortigoza, Esperanza: Concejal de Dolores (entrevista realizada en diciembre de 2014).

Vejarano, Carlos Antonio (médico anestesiólogo): Miembro de los servicios de apoyo médico en los diálogos del Caguán (entrevista realizada en abril de 1999).